

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA**

**UNIDAD DE POSGRADO**

**Crédito laboral: su falta de signo de reconocibilidad  
como causante de inseguridad jurídica**

**TESIS**

**Para optar el Título Profesional de Magíster en Derecho con  
mención en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social**

**AUTOR**

**Mario Eliseo Reyes Puma**

**Lima – Perú**

**2012**

**A mis padres Mario y Bertha por los valores y principios inculcados.**

## **INDICE**

### **INTRODUCCION**

### **CAPITULO I**

#### **PLANTAMIENTO METOLOGICO**

1. FORMULACION DEL PROBLEMA
2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
  - 2.1.- Generales
  - 2.2.- Específico
3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
4. FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACION
5. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION
  - 5.1 Espacial:
  - 5.2 Temporal:
6. FORMULACION DE HIPÓTESIS
  - 6.1.- HIPOTESIS
  - 6.2. HIPOTESIS
7. IDENTIFICACION DE VARIABLES
  - 7.1.- Variables Independientes (X)
  - 7.2.- Variable Dependiente (Y).
8. TIPO DE INVESTIGACION
9. UNIVERSO Y MUESTRA
10. TÉCNICAS

### **CAPITULO II**

#### **MARCO TEORICO**

##### **SUB-CAPITULO 1**

#### **FUNDAMENTOS DE LA PREFERENCIA DE LOS CREDITOS LABORALES**

- 1.1. ASPECTOS GENERALES
- 1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PREFERENCIA DEL CREDITO LABORAL
- 1.3. LA PREFERENCIA DEL CREDITO LABORAL COMO OPCION DE POLITICA LEGISLATIVA.
- 1.4. NIVEL DE LOS CREDITOS LABORALES EN LAS CONSTITUCIONES AMERICANAS Y EUROPEAS

1.5 CONVENIOS INTERNACIONALES DE LA OIT SOBRE PROTECCION DE LOS CREDITOS LABORALES.

1.5.1. CONVENIO N° 95

1.5.2. CONVENIO N° 173

1.5.3. RECOMENDACION 180

SUB - CAPITULO 2

ANTECEDENTES DE LA PREFERENCIA DE LOS CREDITOS LABORALES EN EL PERU.

2.1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA PREFERENCIA DE LOS CREDITOS LABORALES

2.2. NORMAS VIGENTES INFRACONSTITUCIONALES QUE ESTABLECEN LA PRIORIDAD DEL PAGO DE LOS CREDITOS LABORALES.

2.3. NORMAS QUE NO COMPARTEN ESTA PREFERENCIA.

SUB - CAPITULO 3

EL CREDITO LABORAL EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 856

3.1. CREDITOS PROTEGIDOS

3.2. PRIORIDAD DE LOS CRÉDITOS LABORALES

- BIENES AFECTADOS

3.2.1. SUSTITUCION DEL EMPLEADOR

3.2.2. CESION DE CREDITO LABORAL FUERA DE LA PLATAFORMA DE UNA RELACION LABORAL.

3.3. PERSECUTORIEDAD

3.3.1. BIENES DEL NEGOCIO

3.3.2. INSOLVENCIA

EL CREDITO LABORAL EN EL SISTEMA CONCURSAL

3.3.3. SIMULACION O FRAUDE

FRAUDE A LA LEY

FRAUDE EN EL CREDITO LABORAL

GRUPOS DE EMPRESAS

TRANSMISION DE EMPRESAS

3.4. PROCESO LABORAL PREVIO

SUB - CAPITULO 4

LA PREFERENCIA Y LA PERSECUCION SON DISTINTAS O SE COMPLEMENTAN

4.1. LA PREFERENCIA Y PERSECUCIÓN

4.2. PREFERENCIA Y PERSECUCIÓN NO SON DESLIGABLES

4.3. RANGO Y LÍMITES A LOS CREDITOS LABORALES

EL RANGO: SUPERPRIVILEGIO

LEGISLACION COMPARADA

CONNIVENCIA DEL TRABAJADOR CON EL EMPLEADOR

¿SE DEBE PONER LÍMITES A LOS CRÉDITOS LABORALES?

SUB - CAPITULO 5

LOS CREDITOS LABORALES CONTRA LA GARANTIA HIPOTECARIA

5.1. GARANTIAS Y CLASES

LA HIPOTECA

NO TODA GARANTIA REAL CUENTA CON SIGNO DE RECOGNOCIBILIDAD.

EL CREDITO LABORAL FRENTE AL DERECHO REAL

SUB - CAPITULO 6

LA PERSECUTORIEDAD LABORAL VERSUS LA ACCION PAULINA

6.1. LA ACCION PAULIANA O REVOCATORIA

6.2. LA PERSECUTORIEDAD LABORAL VERSUS LA ACCION PAULIANA

LA FALTA DE ALGUN SIGNO DE RECOGNOCILIDAD ES EXCLUSIVA DEL CREDITO LABORAL

DERECHO DE PROPIEDAD NO INSCRITA VERSUS HIPOTECA

DERECHO DE PROPIEDAD NO INSCRITA VERSUS EMBARGO

CUANDO SURGE Y ES OPONIBLE EL CREDITO LABORAL

TERCERIAS

TERCERIA DE PROPIEDAD.

LA TERCERIA EN LA NUEVA LEY PROCESAL LABORAL

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA

SUB CAPITULO 7

7.1. LA CONSTITUCION Y SU INTERPRETACION

7.1.1 LA CONSTITUCION

7.1.2. LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL

7.1.2.1. TIPOS DE INTERPRETACION CONSTITUCIONAL

7.1.2.2. LOS CRITERIOS DE INTERPRETACION CONSTITUCIONAL

LA INTERPRETACION SISTEMATICA

LOS PRINCIPIOS HERMENEUTICOS

7.2. LA PREFERENCIA DEL CREDITO LABORAL NORMA PROGRAMATICA O AUTOAPLICATIVA

SUB CAPITULO 8

PRECEDENTES VINCULANTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL PODER JUDICIAL

8.1. PRECEDENTES DEL TC

8.1.1. PRESUPUESTOS PARA EXPEDIR UN PRECEDENTE VINCULANTE POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

8.1.2. LOS PRECEDENTES VINCULANTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

8.2. INTERPRETACION DEL ALGUNOS CASOS EFECTUADAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN MATERIA LABORAL

8.3.- EL PRECEDENTE JUDICIAL

PRECEDENTE LABORAL DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO LABORAL

PRECEDENTES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN MATERIA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA

8.4. A NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO Y LOS PRECEDENTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL PODER JUDICIAL

1. DEL PRINCIPIO PERSECUTORIO

Contratos de compra venta de embarcaciones pesqueras.

El Arrendamiento Financiero O Leasing

Dación en Pago

Compra Venta Con Reserva De Dominio - Principio De Fe Pública Registral

2. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

8.5. COMPULSA DE LOS CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DE LA CORTE SUPREMA

CAPITULO III

INVESTIGACION REALIZADA

1. El problema investigado
2. Tipo de investigación
3. Técnicas de investigación
4. Universo y muestra
5. Recolección de información
6. Contrastación de hipótesis
- 6.1. Variables Independientes (X)
- 6.2. Variable Dependiente (Y)
7. Comprobación de hipótesis

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SUB-CAPITULO 1

CONCLUSIONES

SUB-CAPITULO 2

RECOMENDACIONES

ANEXOS  
ANEXO I  
JURISPRUDENCIA  
ANEXO II  
PROPUESTAS  
BIBLIOGRAFIA

## **RESUMEN**

En el derecho laboral encontramos muchos temas que por su contenido resultan controversiales, pero hay uno en especial que dada su relevancia no sólo en nuestro país, sino también en la legislación comparada, nos ha motivado a realizar el presente trabajo de investigación que esta vinculado al tema de la preferencia de los créditos laborales, teniendo esté tantas implicancias en el ordenamiento jurídico que rebasa el campo netamente laboral de ahí también que en otras legislaciones no deja de ser polémico; más aún, si el campo practico encontramos resoluciones expedidas por las Salas Especializadas Supremas de la República, tanto las Civiles y Laborales, que resultan contradictorias en algunos casos y sí ha ello, le sumamos las resoluciones del Tribunal Constitucional, nos encontramos entonces con muchas aristas que merecen ser analizadas y permitirnos hacer un mejor estudio para poder establecer que tanto asidero tiene dicha preferencia frente a otras obligaciones que pudiera tener el empleador.

Existe una serie de cuestionamientos a la preferencia de los créditos laborales por un gran sector de la doctrina, quienes han mencionado sus objeciones por sus efectos o consecuencias perniciosos a la seguridad jurídica, económica, sociedad, etc., que trae consigo dicha preferencia, sosteniendo entre otras cosas que: El Decreto legislativo N° 856, establece los alcances y limites de la norma constitucional y que la persecución de los bienes del empleador solo se aplica en los dos supuestos establecidos en la ley; la preferencia solo se puede dar en caso de concurrencia de acreedores; se viene afectando las garantías reales y con ello el encarecimiento del crédito hipotecario y la seguridad en las transferencias de propiedades; no se puede oponer el derecho de crédito que es de carácter personal frente a uno de distinta naturaleza como el real; se atenta contra la fe pública registral; crea inseguridad jurídica al carecer el crédito laboral de un signo de reconocibilidad; propicia el fraude entre empleadores y trabajadores; se tiene que acreditar la mala fe del empleador así como del tercero adquirente; hay que poner límites de tiempo y monto a la preferencia; que la afectación de la transferencias en todo caso se tiene que efectuar sólo cuando el crédito laboral se haya generado, etc.;



cuestionamientos que esperamos absolver con la misma fuerza y soporte de sus retractores, antes de ingresar a las resoluciones expedidas por el supremo interprete de la Constitución..

De todos los cuestionamiento mencionados unos con mayor asidero que otros, nos llama poderosamente la atención y que nos lleva al Titulo de nuestro trabajo de investigación es al referido al **“Crédito Laboral: Su falta de signo de reconocibilidad como causante de inseguridad jurídica”**.

Hemos querido iniciar nuestro trabajo señalando cual es la Justificación de la preferencia del crédito laboral frente a otra clases de obligaciones que pudiera tener el empleador, las razones de ese privilegio, el nivel que se le otorga a los créditos laborales en otras Constituciones, tanto Americanas como Europeas; así como la protección dada por los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente los Convenios 95, 173 así como la recomendación N° 180; aunque no han sido suscritos por el Estado Peruano sus acuerdos en cierto modo han sido acatados por nuestro país.

Abordaremos como ha sido el tratamiento de los créditos laborales en nuestra legislación laboral, pasando por otras normas legales que también establecen esta preferencia; analizando cada uno de los artículos del Decreto Legislativo N° 856, sin dejar de soslayar que con anterioridad al citado decreto las Salas Laborales venían pronunciándose a favor de la preferencia y persecución de los Créditos laborales.

Veremos que una de las principales instituciones del derecho real que es la compra y venta y en especial cuando se trata de bienes inmuebles que conforme a nuestro ordenamiento se transmite con el mero consentimiento de las partes, sin que sea necesario su inscripción, desconociendo los terceros quien es el real propietario de dicho inmueble generando con ello, una gran cantidad de conflictos que se presentan en nuestros tribunales para determinar ha quien le corresponde la propiedad.

No podemos dejar de mencionar las Casaciones que tanto las Salas Civiles Supremas, como las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte

Suprema han emitido en materia de Tercerías, pero sobre todo analizaremos las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional cuando ha tenido que pronunciarse sobre la preferencia del crédito laboral; para esto último hemos creído conveniente previamente dejar bien en claro lo referente a la Constitución, sus principios y valores que ella contiene, así como sus métodos de interpretación para que partiendo de ellos podamos realizar una explicación de las normas infra constitucionales y en especial la que regula lo concerniente al crédito laboral; así como establecer la distinción entre la jurisprudencia, doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes expedidos por el Supremo Interprete de la Constitución.

Por último señalaremos las conclusiones y recomendaciones arribadas, no sin antes indicar que así como en nuestro país la preferencia de los créditos laborales es un “tema tortuoso” que se encuentra pendiente hasta el momento de solución satisfactoria para todas las partes involucradas, en otros países también sucede lo mismo en mayor o menor grado que el nuestro.

**Mario Eliseo Reyes Puma.**

## **ABSTRACT**

In labor law found many topics that are controversial content, but there is one in particular given their importance not only in our country, in comparative law too, has motivated us to conduct a research work which is linked to the issue Preference of Labor Credit having this many implications in the legal system that goes beyond the purely labor in other legislation there continues to be controversial. In the practice, there is judicial decision issue by Room Supreme Specialized of Republic of Peru labor and civil those are contradictory in some cases. Also, the judicial decision issues by Law Court, there are many edges that to be analyzed and to be a better study to establish how much legal support has preference over other obligations that the employer could have.

There are a number of questions about Preference of Labor Credits by a sector of the doctrine; because of they believe that the effects of preference are dangerous security system legal, economic and social. Also, they think in the other things that Legislative Decree N° 856 to be establish limits of the Constitutional law and that the persecution of employer property only applies in both cases establish by law, such as: The preference may be given only on the Meeting of Creditors. In this case is affected to Real Warranty, higher Mortgage loan and security in property transfer. It's impossible to offer a personal credit right over to one of different nature as real warranty, because it threatens with bona fides register, to generate insecurity system legal to decrease labor credit and bring about evasion between employers and workers. Also, its necessary accredit bona fides of employer as third to acquire and to put limits of time and the preference amount. The affected in the transfer has been made when the Labor Credit is generated. All those questions we will try to absolve with the same strength of our opposition, before entering the resolutions issued by the supreme interpreter of the constitution.

Of all the questions mentioned some more grip than others, calls attention to us and leads us to title of our research referred to “**Labor Credit**”: Your failure to sign of recognoscibilidad to cause legal insecurity.

We have wanted to start our research mentioned the justification of Credit Labor over other kind of obligations the employer could have, the reasons of this privilege, the level to give in other constitutions so in America like in Europe; what is protection of International Organization of Job in convention 95, 173, as well as, recommendation 180; although this convention wasn't been signed for Peru, but these are obeying in our country.

Also, we raise us which are the treatment of Labor Credit in our labor legislation, other laws that establish about preference too; analyzing each one of items of Legislative Decree N° 856, not to ignore that before, the said Legislative Decree labor rooms were coming declare in favor of preference and persecution of labor credits.

On the other hand, we'll study the main institution of real warranty, such as: contract of buy - sale, in special bona inmobilia, because of in our legislation bona inmobilia are only transmitted with consent of contracting parties. It's not necessary inscription of bona immobilain a public register, ignoring the third who is the actual owner of that property. This situation generated many problems in Courts of justice to determine to who the property belong.

We can't leave of mentioning the judicial decision issued by Room Supreme Specialized Civil; Rooms constitutional law and Supreme Court social about Terceira, but overcoat discuss the judicial decision issued by Law Court when they are pronounced about Preference of Labor Credit. Previously, we have thought proper to refer about constitution, principle and values, as well as, method of

interpretation, because of based on them can make an explanation of constitutional law and especially concerning regulating labor credit. Also, we establish which is the different between Case Law, doctrine and binding precedents issued by Supreme interpreter of the Constitution.

Finally, we point out conclusions and recommendations and mentioned as well as in our country the preference is a complicated topic which is waiting to satisfactory solution at this moment, in other countries happened greater or lesser degree the same than ours.

**MARIO ELISEO REYES PUMA**

## **INTRODUCCION**

En el derecho laboral encontramos muchos temas que por su contenido resultan controversiales, pero hay uno en especial que dada su relevancia no sólo en nuestro país, sino también en la legislación comparada, nos ha motivado a realizar el presente trabajo de investigación que esta vinculado al tema de la preferencia de los créditos laborales, teniendo esté tantas implicancias en el ordenamiento jurídico que rebasa el campo netamente laboral de ahí también que en otras legislaciones no deja de ser polémico; más aún, si el campo practico encontramos resoluciones expedidas por las Salas Especializadas Supremas de la República, tanto las Civiles y Laborales, que resultan contradictorias en algunos casos y sí ha ello, le sumamos las resoluciones del Tribunal Constitucional, nos encontramos entonces con muchas aristas que merecen ser analizadas y permitirnos hacer un mejor estudio para poder establecer que tanto asidero tiene dicha preferencia frente a otras obligaciones que pudiera tener el empleador.

Existe una serie de cuestionamientos a la preferencia de los créditos laborales por un gran sector de la doctrina, quienes han mencionado sus objeciones por sus efectos o consecuencias perniciosos a la seguridad jurídica, económica, sociedad, etc., que trae consigo dicha preferencia, sosteniendo entre otras cosas que: El Decreto legislativo N° 856, establece los alcances y limites de la norma constitucional y que la persecución de los bienes del empleador solo se aplica en los dos supuestos establecidos en la ley; la preferencia solo se puede dar en caso de concurrencia de acreedores; se viene afectando las garantías reales y con ello el encarecimiento del crédito hipotecario y la seguridad en las transferencias de propiedades; no se puede oponer el derecho de crédito que es de carácter personal frente a uno de distinta naturaleza como el real; se atenta contra la fe pública registral; crea inseguridad jurídica al carecer el crédito laboral de un signo de reconocibilidad; propicia el fraude entre empleadores y trabajadores; se tiene que acreditar la mala fe del empleador así como del tercero adquirente; hay que poner límites de tiempo y monto a la preferencia; que la afectación de la transferencias en todo caso se tiene que efectuar sólo cuando el

crédito laboral se haya generado, etc.; cuestionamientos que esperamos absolver con la misma fuerza y soporte de sus retractores, antes de ingresar a las resoluciones expedidas por el supremo interprete de la Constitución..

De todos los cuestionamiento mencionados unos con mayor asidero que otros, nos llama poderosamente la atención y que nos lleva al Título de nuestro trabajo de investigación es al referido al **“Crédito Laboral: Su falta de signo de reconocibilidad como causante de inseguridad jurídica”**.

Hemos querido iniciar nuestro trabajo señalando cual es la Justificación de la preferencia del crédito laboral frente a otra clases de obligaciones que pudiera tener el empleador, las razones de ese privilegio, el nivel que se le otorga a los créditos laborales en otras Constituciones, tanto Americanas como Europeas; así como la protección dada por los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente los Convenios 95, 173 así como la recomendación N° 180; aunque no han sido suscritos por el Estado Peruano sus acuerdos en cierto modo han sido acatados por nuestro país.

Abordaremos como ha sido el tratamiento de los créditos laborales en nuestra legislación laboral, pasando por otras normas legales que también establecen esta preferencia; analizando cada uno de los artículos del Decreto Legislativo N° 856, sin dejar de soslayar que con anterioridad al citado decreto las Salas Laborales venían pronunciándose a favor de la preferencia y persecución de los Créditos laborales.

Veremos que una de las principales instituciones del derecho real que es la compra y venta y en especial cuando se trata de bienes inmuebles que conforme a nuestro ordenamiento se transmite con el mero consentimiento de las partes, sin que sea necesario su inscripción, desconociendo los terceros quien es el real propietario de dicho inmueble generando con ello, una gran cantidad de conflictos que se presentan en nuestros tribunales para determinar ha quien le corresponde la propiedad.

No podemos dejar de mencionar las Casaciones que tanto las Salas Civiles Supremas, como las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema han emitido en materia de Tercerías, pero sobre todo analizaremos las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional cuando ha tenido que pronunciarse sobre la preferencia del crédito laboral; para esto último hemos creído conveniente previamente dejar bien en claro lo referente a la Constitución, sus principios y valores que ella contiene, así como sus métodos de interpretación para que partiendo de ellos podamos realizar una explicación de las normas infra constitucionales y en especial la que regula lo concerniente al crédito laboral; así como establecer la distinción entre la jurisprudencia, doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes expedidos por el Supremo Interprete de la Constitución.

Por último señalaremos las conclusiones y recomendaciones arribadas, no sin antes indicar que así como en nuestro país la preferencia de los créditos laborales es un “tema tortuoso” que se encuentra pendiente hasta el momento de solución satisfactoria para todas las partes involucradas, en otros países también sucede lo mismo en mayor o menor grado que el nuestro.

**Mario Eliseo Reyes Puma.**



## **CAPITULO I**

### **PLANTAMIENTO METOLOGICO**

#### **1. FORMULACION DEL PROBLEMA**

Uno de los principales cuestionamientos que se hacen a la preferencia del crédito laboral es su falta de signo de reconocimiento de ahí que cabría hacernos las siguientes preguntas:

- I).-** ¿La falta de algún signo de reconocibilidad es exclusiva del crédito laboral?
- II).-** ¿El crédito laboral es el mayor causante de inseguridad jurídica en nuestro país?

#### **2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN**

##### **2.1.- Generales**

**2.1.1.-** Es absolver gran parte de los cuestionamientos que se vienen produciendo a la preferencia de los créditos laborales haciendo la salvedad que muchas parten de la interpretación que realizan de conformidad al Decreto Legislativo N° 856, cuyo objetivo en la realidad no fue ordenar la legislación que se encontraba dispersa en el tratamiento de la preferencias de los créditos sino restringir los alcances de la norma Constitucional y con ello, se buscaba que los órganos jurisdiccionales cambien el criterio jurisprudencial que existía hasta antes de su promulgación.

**2.1.2.-** Análisis de las resoluciones expedidas en los últimos años, por los máximos Órganos Jurisdiccionales de la Administración de Justicia, así como del Tribunal Constitucional cuando existe de por medio un crédito laboral.

## **2.2.- Específico**

**2.2.1.-** Se busca demostrar que la falta de algún signo de reconocibilidad del crédito laboral no le es exclusiva, estando que en nuestro ordenamiento el más representativo de los derechos reales como es el de propiedad su transferencia también carece de algún signo de reconocibilidad, siendo en todo caso el mayor causante de inseguridad jurídica, generando innumerables conflictos o litigios que abarrotan los diferentes órganos jurisdiccionales donde se discute la propiedad: reivindicación, mejor derecho de propiedad, tercerías de propiedad y de mejor derecho, etc., teniendo respuestas diferentes e incluso contradictorias por parte de los máxima instancia del poder judicial.

**2.2.2.-** Que, en todo caso, el hecho de registrar un crédito laboral al ser de carácter personal no sería oponible frente a uno real a tenor de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil.

## **3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION**

Ante los cuestionamientos de la preferencia del crédito laboral resulta necesario analizar cada uno de ellos, para poder ver que tanto asidero tienen y darles una respuesta sustentada no solo en informes, cifras, comparaciones con otras legislaciones que también le otorgan dicha preferencia sea a nivel Constitucional o Legal ; por ello, al margen de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que han abordado dicha problemática resulta necesario analizar el gran impacto social que tendría desplazar dicha preferencia basándonos o teniendo como uno de sus sustentos su falta de signo de reconocibilidad frente a otros derechos inscribibles.

Además también se justificaba el presente trabajo debido a que si bien se han escrito artículos en revistas o comentado en foros sobre las

infortunadas consecuencias de la norma Constitucional para nuestro sistema jurídico, sin embargo no se ha efectuado un estudio comparativo con otras legislaciones donde también se le otorga dicha preferencia frente a otras obligaciones que pudiera tener el empleador ya sea a nivel Constitucional o Legal, sin que ello les haya ocasionado algún tipo de freno para su desarrollo económico.

Por último, dicho estudio se justifica también en el hecho de poder examinar si resultan compatibles o congruentes las Resoluciones expedidas con por Tribunal Constitucional con el precedente de obligatorio cumplimiento de la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, y en que medida la creación de un Fondo de Garantía Salarial podría resolver el controversial tema de la preferencia de los crédito laborales.

#### **4. FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACION**

El desarrollo del proyecto resulta factible en razón que actualmente me desempeño como Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Piura, permitiendo por la practica jurisdiccional analizar los casos donde se opone un crédito laboral frente a otros derechos.

##### **4.1. Investigaciones preexistentes**

A nivel de Tesis de maestría no se ha encontrado investigación al respecto donde se hubiese abordando dicho tema como se pretende en este caso, Si bien se ha escrito artículos a nivel nacional referente a la preferencia del crédito laboral sin embargo no se ha efectuado un trabajo que abarque todas las implicancias de dicha preferencia y menos haya abordado las resoluciones expedidas por el Supremo Interprete de la Constitución al respecto.

En nuestro país, el Magistrado Hugo Huerta Rodríguez, tiene un libro sobre El carácter Persecutorio de los Créditos Laborales, sin embargo no existe trabajo alguno que absuelva los severos cuestionamientos de dicha preferencia entre ellas su falta de signo de reconocibilidad del crédito laboral.

## **5. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION**

### **5.1 Espacial:**

La investigación se centrara en las Resoluciones expedidas vía recurso de casación por Salas Civiles y de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la Republica del Perú, pero sobre todo por las Resoluciones del Tribunal Constitucional.

### **5.2 Temporal:**

La investigación se desarrollará sobre la base de la actuación de la Corte Suprema por lo años 2001 a la actualidad y del Tribunal Constitucional por los años 2005 a la actualidad.

## **6. FORMULACION DE HIPÓTESIS**

### **6.1.- HIPOTESIS**

La falta de algún signo de reconocibilidad no es exclusiva del crédito laboral ya que la transferencia de propiedad de inmuebles se produce con el mero consentimiento de las partes.

### **6.2. HIPOTESIS**

La preferencia del crédito laboral no origina mayor inseguridad jurídica en nuestro país, si la comparamos con la transferencia de propiedad.

## **7. IDENTIFICACION DE VARIABLES**

### **7.1.- Variables Independientes (X)**

#### **7.1.1. Falta de signo de Reconocibilidad del crédito laboral**

- No es exclusiva

#### **7.1.2. La preferencia del crédito laboral**

- No genera mayor inseguridad jurídica.

### **7.2. Variable Dependiente (Y)**

**7.2.1.-** Puesto que el principal derecho real carece de todo signo de reconocibilidad.

**7.2.2.-** Si la comparamos con la compra venta de inmuebles.

## **8. TIPO DE INVESTIGACION**

En razón al problema seleccionado la investigación tiene un carácter descriptivo, analítico y explicativo.

## **9. UNIVERSO Y MUESTRA**

### **9.1. UNIVERSO**

La investigación tiene como universo los procesos de Tercería donde estaba de por medio un crédito laboral impago frente a otros derechos resueltos tanto por las Salas Civil y Laborales de la Corte Suprema de la República, desde el 2001 hasta la actualidad, pero sobre todo en las resoluciones expedidas por el Supremo Interprete de la Constitución cuando ha tenido que pronunciarse sobre la preferencia del crédito laboral.

## **9.2. Muestra**

Se ha tomado como muestra para el caso del Tribunal Constitucional, todos los procesos donde el Supremo Interprete de la Constitución, se ha pronunciado sobre la preferencia del crédito laboral, no obstante el cambio de sus integrantes a lo largo de su creación.

## **10. TÉCNICAS**

La recopilación es el método de investigación que recurrimos para analizar el presente trabajo, particularmente efectuamos un análisis jurisprudencial donde ha existido de por medio un crédito laboral, realizando en este caso el acopio de la información a través de revistas, jurisprudencias, libros, paginas Web, etc.

## CAPITULO II

### MARCO TEORICO

#### SUB-CAPITULO 1

### FUNDAMENTOS DE LA PREFERENCIA DE LOS CREDITOS LABORALES

#### 1.3. ASPECTOS GENERALES

Principio, todos los acreedores de un mismo deudor tienen igual derecho a ver satisfecho su crédito. A esta tendencia a la igualdad de las condiciones de los acreedores se hace referencia tradicionalmente con la expresión de la par *condicio creditorum*. Es decir, la misma condición o la misma cualidad inicial de todos los acreedores. Si todos los créditos no pueden ser satisfechos íntegramente, debería de realizarse un reparto proporcional entre todos ellos (*concurso partes fiunt*).

Aunque la igualdad es la regla general, las excepciones a dicha regla se han multiplicado de tal forma, en aras a la protección de la parte más débil, a la incentivación del crédito, o por la presión de determinadas categorías profesionales, que han acabado por convertir dicha regla general en una regla residual, que sólo se aplicará a los acreedores a los que ninguna norma legal atribuya un privilegio, y que no hayan podido imponer al deudor una garantía personal o real.

El criterio actual de resolución de los conflictos entre créditos concurrentes en la actualidad no es ya la igualdad de los mismos, sino el de la jerarquía de valores, al respecto (Lasarte, López y Yañes. (2007: 27) nos dicen que cada crédito, en función de su causa (o de su titular), dispondrá de una tutela particular y diversa por parte del ordenamiento, sobre la base de una especial **escala de valores** conforme a las razones de política legislativa.

En nuestro país, la preferencia del crédito laboral frente a cualquier otra obligación del empleador, se encuentra dentro del capítulo de los derechos sociales y económicos previstos en la Constitución, es una que privilegia a una clase social, precisamente una de las más postergadas, lo que se hace con el *animus* de pretender la mejora en sus condiciones de vida, atendiendo además, a la protección de la dignidad de la persona humana, pues protege los ingresos del trabajador que servirán directamente para el sustento de él y de su familia.

#### **1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PREFERENCIA DEL CREDITO LABORAL**

La preferencia que se otorga a los créditos laborales, tienen su principal justificación en el carácter alimenticio de la remuneración cuya finalidad es hacer posible la subsistencia del trabajador y de su familia. La remuneración, en la enorme mayoría de los casos, es la única fuente de ingresos del trabajador o por lo menos la principal.

Hay una posición desventajosa del trabajador frente a los demás acreedores. Esta situación se manifiesta, en primer lugar, en la imposibilidad que tiene de imponer condiciones para garantizar el pago oportuno de sus créditos; y en segundo lugar, por la oportunidad del pago de la contraprestación.

La protección y privilegio del crédito laboral se justifica asimismo, en el hecho que los trabajadores se encuentran ajenos a los riesgos de la empresa; en ese sentido G.H. Carmerlynck y G. Lyon-Caen (2001:99), mencionan:

*“Los trabajadores al servicio de la empresa, que no están asociados ni a su gestión ni a sus beneficios, no deben sufrir los riesgos. En caso de insolvencia del empleador, dado el carácter alimenticio del salario, importa sustraerle de la condición de simples acreedores no privilegiados en el*



*concurso a prorrata con los demás sobre un activo insuficiente. De este modo, la evolución legislativa se caracteriza por una constante extensión de las garantías concedidas...”*

Se añade a ello que en general el trabajador es informado tardíamente de las dificultades de su empresa, y que de cualquier manera, en razón de su estado de dependencia, tendrá dudas antes de iniciar contra su empleador un procedimiento de ejecución forzada, lo que por demás implica gastos.

A esto se agrega un hecho fáctico, que consiste en las dificultades de acceder a un empleo, con lo que se puede observar claramente que los trabajadores prefieren posponer el cobro de alguno de los créditos laborales que perder el empleo<sup>1</sup>.

Por otra parte y en consecuencia de lo señalado anteriormente, el trabajador no puede ser un acreedor diligente, es decir, actuar diligentemente solicitando garantías suficientes para poder ver satisfecho su crédito oportunamente.

Otras de las Justificaciones que se mencionan es la llamada **dispersión del riesgo**, esto es, mientras los acreedores pueden dispersar sus riesgos entre muchos deudores diferentes, con la obvia ventaja de pérdida mínima, entre muchas facturas, los trabajadores tienen un sólo deudor: su empleador; si éste quiebra corren el riesgo de perderlo todo: el empleo y los créditos laborales pendientes de pago. De aquí resulta que quienes prestan dinero<sup>2</sup>, están más favorecidos que quienes prestan su trabajo,

---

<sup>1</sup> Siendo este el fundamento principal que nuestra legislación laboral a tomado en cuenta para regular lo concerniente a la prescripción de los derechos laborales y considerar como una de las causales de nulidad de despido el de represalia, contemplado en el artículo 29 inciso c) del Decreto Supremo N° 003-97-TR, que se configura cuando el trabajador haya presentado una queja o participado en un proceso contra su empleador en defensa de sus derechos reconocidos por ley.

hecho que justifica la necesidad de establecer alguna medida de protección en favor de estos últimos.

Además a todos estos fundamentos no podemos dejar de mencionar que los trabajadores subordinados constituyen la mayoría de la población económicamente activa, López Basanta 1977. De Buen y Morgado. (2008: 433 ss).

Existe en la normatividad una opción legislativa de proteger especialmente a las acreencias laborales frente a los demás créditos, debido a las razones señaladas y además porque responde a una experiencia histórica y al desarrollo de los derechos laborales.

Asimismo, se encuentra justificado el privilegio de los créditos laborales, por cuanto, como se menciona en la 78ª Conferencia Internacional del Trabajo OIT:

---

<sup>2</sup> En el Perú, las empresas bancarias mantuvieron sus ganancias en el año 2009 de la crisis internacional.

El banco Continental obtuvo la mayor utilidad del año con S/. 927 millones, seguido del Banco de Crédito con una utilidad neta de S/. 924 millones, entre otros. Un aspecto importante que contribuyó a las ganancias de los bancos peruanos fue la labor de sus áreas de tesorería o mesas de dinero, es decir, aquellas que se encargan de calzar sus posiciones en soles y dólares y de negociar compra de dólares, incluyendo los contratos forward. (<http://finanzasperu.wordpress.com/2010/04/05/ganancia.2009-banco-de-Perú/>).

Como podemos apreciar los bancos vienen realizando actualmente una serie de operaciones bancarias que les permiten obtener ganancias por diversas fuentes: créditos hipotecarios, tarjetas de crédito de consumo, pago de servicios, compra y venta de dólares, etc.; así la imposibilidad de no ejecutar algunas de las garantías hipotecarias por la preferencia del crédito laboral, está dentro de los márgenes de riesgo que toda actividad comercial o financiera está expuesta.

Es más, el Banco Central de Reserva, proyecto que la tasa de interés de los créditos hipotecarios sigan disminuyendo en el presente año, a niveles del 8% o 9% en unos meses debido a la reducción registrada en la tasa de interés de los bonos del tesoro.

El Presidente del BCR Julio Velarde manifestó que influye también en el costo financiero de un crédito hipotecario la competencia que pueda registrarse y la seguridad de acceder a un fondeo de largo plazo. (<http://gestión.pe/noticias/300541/meses-interese-créditos-hipotecarios-bajaran>). La utilidad del sistema bancario peruano aumentó 16% en 2010 comparado con el registro de 2009, informola Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Los bancos, en conjunto, ganaron S/.3,763 millones entre enero y diciembre, frente a los S/.3,247 millones del año previo (<http://peru21.pe/noticia/707075/utilidad-bancos-crecio-16-2010>. del 01 de febrero del 2011.)

*“... no se debe olvidar que el trabajador otorga crédito al empleador por los servicios que presta, puesto que existe un principio bien establecido en virtud del cual el salario se paga sólo después de cumplido el trabajo, y ello con una periodicidad variable que va de quince días o un mes para los salarios ...” Ahora bien, el asalariado no dispone nunca de ningún medio para garantizar su crédito, al contrario de los demás acreedores de la empresa, tales como las instituciones financieras, que pueden exigir garantías personales, hipotecas o prendas, cauciones como condición para otorgar un préstamo....” Estas instituciones de crédito comunican la OIT. “corren el peligro de perder a lo sumo un crédito, entre las decenas y centenas o incluso millares que contiene su cartera; mientras que el trabajador puede perder todo: sus créditos laborales impagos, amén de su fuente de trabajo y de ingresos”. (OIT Conferencia Internacional de Trabajo -78°)*

El derecho laboral es de naturaleza eminentemente tuitiva, establece una protección de carácter especial a los derechos de los trabajadores, determinando una serie de “pisos mínimos” orientados a un adecuado resguardo de estos. Ello se distingue de la regulación contemplada por la legislación civil, en el cual ambas partes concurren al mercado en igualdad de condiciones y en consecuencia con la misma libertad y capacidad de negociar los términos de su relación contractual.

En el derecho laboral ocurre un fenómeno evidentemente distinto: es el trabajador quien se encuentra en un estado natural de desigualdad frente a su empleador, ambas partes contractuales no poseen en realidad las mismas prerrogativas que las partes en un contrato civil, siendo el trabajador quien pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo para que este último la explote a cambio de una remuneración, por lo que es el trabajador quien depende de la voluntad del empleador para regular la relación laboral.

Con la finalidad de atenuar o intentar nivelar esta desigualdad, o “igualar lo desigual”, es que el derecho del trabajo establece un contenido mínimo, irrenunciable por cierto, dentro de los derechos reconocidos al trabajador, a fin de que el empleador no pueda abusar de su posición económica prevalente en perjuicio de los intereses del trabajador. Así, las partes en un contrato no podrán pactar cláusulas que contravengan o reduzcan los “pisos mínimos” de los derechos laborales reconocidos, es decir, el contenido necesario de cada derecho de naturaleza laboral y de ineludible cumplimiento.

El Tribunal Constitucional respecto a esa desigualdad, señala en el Expediente N° 0008-2005-PI/TC, fundamento 20:

*“La relación laboral se caracteriza en sí misma por la desigualdad, lo que hace que el empleador devenga en la parte “fuerte” e “imponente” y el trabajador en la parte “débil” e “impotente” (...) reconociéndose dicha situación asimétrica, entre otros, en los campos jurídicos y económicos (...). En efecto en el campo jurídico sustancial el rasgo más característico de la relación de trabajo es la subordinación y los deberes imputables al trabajador; y en el campo jurídico procesal se constata la capacidad intimidatoria que se puede crear para impedir los reclamos en la vía litigiosa y la extensión de la posesión predominante en materia de prueba. Asimismo, en el campo económico, la nota más específica es que frente a la propiedad del medio de producción, el trabajador solo puede exponer su fuerza de trabajo”.*

Reafirmando lo señalado en los párrafos precedentes, se sostiene que, como consecuencia del carácter protector o tuitivo del derecho laboral, basado en la necesidad de “equilibrar” de alguna forma la desigualdad entre el trabajador y empleador, se establecen una serie de reglas a favor del trabajador tanto en el desarrollo como en la extinción de las relaciones laborales. Una de las Instituciones que se han implementado en la línea anotada es el privilegio laboral, esto es, el derecho que tienen los

trabajadores para cobrar en primer lugar sus beneficios sociales ante un concurso de acreedores del empleador, Toyama Miyagusuku (2005: 185 s.s).

Son por estas razones, que hoy en día se reconoce de manera casi universal el principio por el cual los créditos salariales contra un empleador insolvente deben estar amparados por un privilegio.

### **1.3. LA PREFERENCIA DEL CREDITO LABORAL COMO OPCION DE POLITICA LEGISLATIVA.**

Hemos mencionado cuales son las causas o motivos que justifican la preferencia del crédito laboral, entendiendo esta en un sentido amplio como lo veremos más adelante, frente a cualquier otra obligación que pudiera tener el empleador, estando sus bienes afectos al pago integro de los créditos laborales adeudados; con ello, el legislador opta por lo que más le interesa: que los trabajadores que han generado o contribuido en generar los bienes del empleador deudor, tenga la preferencia frente a otras obligaciones o acreedores que pudiera tener, habiendo sopesado las consecuencias social y económica que dicho privilegio acarrea al desplazar a otros créditos que también tienen gran relevancia económica y social, como pueden ser: el crédito hipotecario o las pensiones de alimentos; con ello, el legislador muestra una importante preocupación político-social, integrada en la motivación que han dado nacimiento al sistema protector que constituye el derecho del trabajo, optando que los trabajadores cobren antes que nada sus créditos laborales.

Sí el surgimiento del derecho laboral en nuestro país, tal como lo entendemos actualmente recién comenzó ha separarse de otras ramas del derecho en los inicios del siglo XX, podemos observar que la opción legislativa siempre se ha inclinado a la protección del salario, frente a situaciones o comportamientos que, aun ajenos a la idea de insolvencia,

han tutelado la adecuada percepción de sus emolumentos. Surgen así reglas sobre el modo, lugar y tiempo del pago del salario, sobre su inembargabilidad y sobre su indisponibilidad; con lo que se trata en definitiva de proteger al trabajador, respectivamente frente abusos patronales, frente a apremios instalados por terceros contra el mismo trabajador, y frente a sus propias o irreflexibles decisiones.

### **1.5. NIVEL DE LOS CREDITOS LABORALES EN LAS CONSTITUCIONES AMERICANAS Y EUROPEAS**

En las Constituciones Latinoamericanas, son cinco los países que han elevado a rango constitucional la preferencia del crédito laboral: Ecuador, El Salvador, Honduras, México y el Perú; resulta interesante lo expresado por la Constitución de Ecuador de 1998<sup>3</sup> donde la preferencia es aun respecto de los Hipotecarios.

Refiere Marcenaro Frers (2004: 137 ss.) que diversas Cartas Latinoamericanas se refieren a la protección del crédito laboral identificándolo con la inembargabilidad de las remuneraciones, como por ejemplo la Constitución de San Salvador, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela. Brasil y Honduras delegan a la ley el tratamiento privilegiado de los créditos laborales, y México prevé que la preferencia opera en caso de concurso o de quiebra del empleador, y sólo por los salarios devengados en el último año y por las indemnizaciones.

En las Legislaciones Constitucionales Europeas, no se recoge nada sobre el privilegio, cuando menos a dicho nivel. Sin duda, en la legislación infra constitucional Europea sí lo hacen como la Española, como lo veremos más adelante.

---

<sup>3</sup> Artículo 35.7: La remuneración del trabajador será inembargable, salvo para el pago de las pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo, constituirá crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun respecto de la hipoteca.

Como reparamos no son pocos los países que le han otorgado rango Constitucional a la preferencia de los créditos laborales, por tanto no somos los únicos que hemos consagrado en nuestra Constitución la preferencia del crédito laboral frente a otras obligaciones que pudiera tener el empleador.

### **Protección a la Remuneración y créditos laborales a nivel Constitucional en Latinoamérica**

PAISES	INEMBARGABLE	CREDITO PRIVILEGIADO	OTROS	EXCEPCION
ARGENTINA				
BOLIVIA				
BRASIL			CONSTITUYE DELITO RETENCION DOLOSA	
COLOMBIA				
COSTA RICA				
CUBA				
CHILE				
ECUADOR	X	X	RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE BENEFICIARIO DE OBRA	PENSION ALIMENTICIA
EL SALVADOR	X	X	INSTRUMENTOS DE LABOR SON INEMBARGABLES	SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS SINDICALES IMPUESTOS, PENSION ALIMENTICIA
GUATEMALA	X		IMPLEMENTOS PERSONALES DE TRABAJO SON INEMBARGABLES	DETERMINADOS POR LEY
HONDURAS	X	X		OBLIGACIONES FAMILIARES Y SINDICALES DETERMINADO POR LEY
MEXICO	X	X		
NICARAGUA	X			PROTECCION FAMILIAR EN TERMINOS DE LEY
PANAMA	X		INSTRUMENTOS DE LABOR SON INEMBARGABLES	PENSION ALIMENTICIA EN TERMINOS DE LEY
PARAGUAY				
PERU 1993		X		

R DOMINICANA				
URUGUAY				
VENEZUELA	X		RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL BENEFICIO DEL SERVICIO	PENSION ALIMENTICIA EN TERMINOS DE LEY
TOTAL: 19	8	5	6	7

## **1.5 CONVENIOS INTERNACIONALES DE LA OIT SOBRE PROTECCION DE LOS CREDITOS LABORALES.**

### **1.5.1. CONVENIO N° 95**

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio N° 95 el 08 de junio de 1949, relativo a la Protección del Salario, que no ha sido ratificado por el Perú, pero superado por la Legislación Nacional. En su artículo 11 establece:

- “1. En caso de quiebra o de liquidación judicial de la empresa, los trabajadores empleados en la misma, deberán ser considerados como acreedores preferentes en lo que respecta a los salarios que se les deban por los servicios prestados durante un periodo anterior a la quiebra o a la liquidación judicial, que será determinado por la legislación nacional, o en lo que concierne a los salarios que no excedan de una suma fijada por la legislación nacional.*
- 2. El salario que constituye un crédito preferente se deberá pagar íntegramente antes que los acreedores ordinarios puedan reclamar la parte del activo que les corresponda.*
- 3. La Legislación nacional deberá determinar la relación de prioridad entre el salario que constituya un crédito preferente y los demás créditos preferentes.”*

Como puede advertirse, la protección que otorga el Convenio N° 95, es tan bajo, que prácticamente equivale a una simple afirmación de



que tales privilegios deben existir, con el alcance y los efectos que le asigne cada legislación nacional y es exclusivamente respecto de los salarios, es decir se limita a la remuneración, por un periodo de tiempo y con toques; no comprende a los beneficios sociales o indemnizaciones de naturaleza laboral; pero resulta importante resaltar la prioridad que se le daba a la remuneración aunque limitada a la quiebra o liquidación judicial de la empresa.

Morales Corrales (2001:99 ss.), señala que la insuficiente protección a los créditos laborales que otorga el Convenio 95 se hizo especialmente patente con la crisis que sacudió a los países industrializados en la década de los setenta. Así como las dificultades económicas de los países en vías de desarrollo, lo que devino en una franca desprotección de los mismos, dado el incremento del número de empresas que quebraron por la imposibilidad de pagar sus deudas.

La OIT decidió reexaminar el tema y luego de varios años de estudios, en 1991, con motivo de la 78 Conferencia Internacional de Trabajo, se trató sobre la *“Protección de los Créditos laborales en caso de insolvencia del empleador”*. En dicha conferencia se efectuó un análisis profundo sobre los principios que rigen el privilegio, su origen o fuentes, trabajadores y créditos amparados, restricciones de este, bienes sobre los cuales puede recaer el mismo, concurrencia del crédito de los trabajadores con otros acreedores privilegiados, el súper privilegio, los procedimientos de pago acelerado y finalmente la protección de estos créditos por una institución de garantía.

### **1.5.2. CONVENIO N° 173**

En la septuagésima novena reunión de la OIT, con fecha 23 de junio de 1992 se adoptó el Convenio N° 173 -Convenio Sobre la Protección de los Créditos Laborales en Caso de Insolvencia del

Empleador- constituye una revisión, aunque no necesariamente una sustitución del Convenio N° 95. Asimismo en la misma fecha se aprobó la Recomendación N° 180.

Cabe resaltar del citado convenio en lo referente a sus disposiciones generales, que el término insolvencia designa aquellas situaciones en que de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, se ha abierto un procedimiento a los activos de un empleador, con el objeto de pagar colectivamente a sus acreedores. Además, señala que todo miembro podrá **extender** el término “insolvencia” a otras situaciones en que no puedan pagarse los créditos laborales a causa de la situación financiera del empleador.

Como podrá apreciarse el término insolvencia en este Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, es más amplio y puede comprender cualquier situación donde el empleador no pueda pagar los créditos laborales por motivos económicos, sin que necesariamente se tenga que recurrir a un proceso en la vía administrativa o judicial que previamente así lo declare.

El Convenio N° 173 OIT agrega que la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia quedan protegidos por medio de un privilegio, de modo que sean pagados con cargo a los activos del empleador antes que los acreedores no privilegiados, y en particular a los del estado y de la Seguridad Social; sin embargo, cuando los créditos laborales están protegidos por una institución de garantía, se podrá atribuirle un rango de privilegio menos elevado que el crédito del Estado y la Seguridad Social.<sup>4</sup>

En la legislación moderna la protección de las remuneraciones y demás beneficios sociales no sólo se limita a otorgarle un

---

<sup>4</sup> El convenio entró en vigencia el 08 de junio de 1995. Al 01 de junio de 1999 contaba con 12 ratificaciones

determinado privilegio respecto a otras acreencias, sino, que en algunos países los créditos laborales se encuentran garantizados con determinadas limitaciones, por instituciones de garantía a las cuales el empleador contribuye con sus aportaciones.

En Europa Occidental, a partir del 1967, los trabajadores comenzaron a contar con la garantía de pago de sus remuneraciones a través de una tercera institución denominada Fondo de Garantía Salarial. Según el Informe de la OIT. – Conferencia Internacional de Trabajo 78º reunión- dichos fondos han llegado a convertirse en auténticos seguros, cubriendo la contingencia de insolvencia de la empresa y funcionando bajo los principios de la seguridad social: obligatoriedad, solidaridad y financiamiento mediante cotizaciones calculadas según el salario o remuneración.

Así, en Bélgica se creó esta institución en 1967, en los países bajos en 1968, antes en Dinamarca 1972, en Finlandia, Noruega y Francia en 1973, en Alemania en 1974, en Reino Unido en 1975, en España en 1976, en Austria en 1977, en Grecia 1981, Suiza en 1982, en Irlanda en 1984 y en Portugal en 1985.

En España, la Protección del Crédito Laboral, también es aplicable para el caso de despido objetivo o por causas económicas, técnicas y por fuerza mayor, entre otras; y son cubiertos por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), por Real Decreto Legislativo se modificó el artículo 33.2º de la Ley del Estatuto de los Trabajadores el 19 de diciembre de 1997.

En general en estos países tanto el gobierno central en calidad de empleador y las instituciones públicas se encuentran excluidas del sistema (debe entenderse que el Estado siempre cumple sus obligaciones y no cae en situación de insolvencia). En consecuencia

los trabajadores del sector privado son los que se encuentran amparados por estos fondos. La administración se efectúa a través de las instituciones de la seguridad social existentes; se financia casi sin excepción mediante las aportaciones obligatorias que en la mayoría de los países corren exclusivamente a cargo de los empleadores atendiendo a que el riesgo de insolvencia compete al empleador y no al trabajador. Las cuotas se calculan teniendo en cuenta la remuneración con un tope determinado y, entre 1981 y 1990, han fluctuado entre 0.1% y 0.15% Morales Corrales ( 2001-99 ss.).

En conclusión de acuerdo al Convenio 173 de la OIT. la protección de los créditos laborales se puede dar bajo dos formas según establezca cada estado:

- “1. Por medio de un privilegio, donde los estados se comprometen a otorgarle a los créditos laborales un rango privilegiado, por determinados conceptos remunerativos y por un tiempo determinado y;*
- 2. La Protección de los créditos laborales por intermedio de una Institución de garantía o por compañías de seguros; donde también se señala los conceptos que lo integran, el tiempo de los créditos garantizados.”*

#### **1.5.4. RECOMENDACION 180**

En la Recomendación 180 se considera que la protección a través del privilegio debería cubrir, no sólo los salarios sino también a la primas por horas extraordinarias, las comisiones y otras modalidades remunerativas correspondientes al trabajo efectuado durante un periodo determinado, que no debería ser inferior a los doce meses anteriores a la insolvencia o la terminación de la relación de trabajo.

Debemos señalar para quienes sostienen que nuestra legislación laboral en materia de protección de los créditos laborales, sobrepasa y otorga un superprivilegio que no está en los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del trabajo; lo expresado por el Tribunal Constitucional, “los derechos reconocidos por tratados sobre Derechos Humanos, constituyen el estándar mínimo de derechos que los Estados se obligan a garantizar a sus ciudadanos (...)” (TC Exp. 4635-2004-AA/TC); en tal sentido no existe ningún impedimento que dentro de cada país miembro que haya suscrito el tratado la legislación nacional pueda ampliar o extender los beneficios acordados.

## **SUB - CAPITULO 2**

### **ANTECEDENTES DE LA PREFERENCIA DE LOS CREDITOS LABORALES EN EL PERU.**

Recurriendo a la legislación que precede a nuestro vigente marco normativo vinculado a la preferencia del crédito laboral podemos advertir que desde que se empezó a regular la prestación personal de servicios, remunerada y subordinada, en nuestro país se dieron normas de protección en resguardo del crédito del locador, llegando a tener rango Constitucional con la Constitución de 1979.

#### **2.1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA PREFERENCIA DE LOS CREDITOS LABORALES**

Como sabemos, los beneficios otorgados a la clase trabajadora, en general, han sido el producto de largas luchas, y como toda reivindicación social ha costado sangre y esfuerzos de sus integrantes. Pensemos en las grandes revoluciones que dieron pie a la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917, y la Constitución Alemana de Weimar de 1919, entre otros instrumentos jurídicos que, a lo largo de la historia reflejan la magnitud de las luchas en procura de estos beneficios.

El Perú no ha sido ajeno a ello, y si estudiamos nuestro ordenamiento jurídico en su integridad veremos que desde antaño se han ido reconociendo poco a poco los beneficios a favor de los trabajadores. Basta para ello citar el Código de Comercio de 1902, que fue la primera norma en conceder ciertas prioridades a los créditos laborales. En su libro V “De los derechos de los acreedores en caso de quiebra y de su respectiva graduación” el artículo 923º estableció que la graduación de créditos se haría dividiéndolos en dos secciones: la primera, comprendía los créditos que debían ser satisfecho con el producto de los bienes muebles de la

quiebra, y la segunda, los que debían de pagarse con el producto de los inmuebles.

El artículo 924 estableció la prelación de los acreedores comprendidos en la primera sección y entre los singularmente privilegiados consideró en tercer orden a los acreedores por trabajo personal, incluyendo a los dependientes de comercio por los seis últimos meses anteriores a la quiebra. Sin embargo, gozaban de prioridad las provenientes de los gastos de entierro y los alimentarios, entendiéndose por tales a los originados por el suministro de alimentos al quebrado y su familia.

Entonces vemos que el Código de Comercio de 1902, fue la primera norma en conceder prioridad a los créditos laborales, claro que ejercitables solo en los casos de quiebra del empleador, en una posición de tercer orden y pagables solo con determinados bienes del patrono, pero aún así, se considera que esta norma fue bastante avanzada para su época.

Adviértase entonces que en el Perú mucho antes de la aprobación del Convenio 95 ya se contemplaba la protección de los créditos laborales, otorgándosele una determinada preferencia respecto de otros acreedores privilegiados. Es cierto que en tercer orden y cubriendo sólo un periodo de seis meses, pero, en perfecta concordancia con lo que posteriormente aprobaría el Convenio N° 95; Morales Corrales (2001-99 s.s.).

La historia, asimismo, da cuenta de otras normas a favor del trabajador que resultaría ocioso enumerar; sin embargo, para el caso de la preferencia de los créditos laborales resulta interesante mencionar la Ley Procesal de Quiebras N° 7566 del 02 de agosto de 1932 que, continuando con la tradición del Código Napoleónico, determinó la prelación relacionándola a determinados bienes muebles e inmuebles.

Respecto a los “demás bienes muebles e inmuebles” los créditos laborales se encontraban en tercer orden, precedido por los gastos judiciales provenientes de la quiebra (primer orden) y los gastos judiciales que debía el deudor por la defensa de sus bienes en el año anterior a la declaratoria de quiebra (segundo orden).

El ámbito de protección que otorgó este dispositivo comprendía a los salarios y jornales correspondientes a los criados, dependientes obreros del deudor, durante el semestre anterior a la declaratoria de quiebra, así como las indemnizaciones que pudieran corresponderles conforme a las leyes respectivas.

Menciona Montoya Mendoza (2004:22) que posteriormente entra en vigencia la Ley N°. 7607, promulgada por el Presidente Sánchez Cerro el 20 de Octubre de 1932, que modificó la norma anterior en lo referente a que la protección de los créditos laborales solamente se limitaban a los generados a los últimos seis meses anteriores a la quiebra del empleador, con lo cual esta protección se amplió a la totalidad de los adeudos laborales, sin importar su antigüedad o su monto.

Otra norma de suma importancia relacionada a la preferencia y persecución de los créditos laborales fue la Ley N° 15485 promulgada por el presidente Fernando Belaúnde Terry, el 02 de abril de 1965, que estableció por primera vez en el Perú una **preferencia absoluta** a favor de los créditos laborales, cuando estableció que los bienes de las empresas están afectos al pago íntegro de los sueldos e indemnizaciones íntegras con preferencia de cualquier otro crédito.

Se trataba de un “superprivilegio” por cuanto dicha norma concedía a los créditos laborales prioridad absoluta de pago respecto de cualquier otra acreencia, incluso las hipotecarias; para lo cual otorgó además a la acción laboral un carácter persecutorio de los bienes del negocio, lo que en buena



cuenta significa el otorgamiento de una especie de gravamen real a favor del trabajador, en respaldo de sus créditos<sup>5</sup>.

De igual modo, no se puede dejar de mencionar la Constitución de 1979, que fue la primera en otorgar nivel constitucional a la preferencia absoluta de los créditos laborales, al disponer: Artículo 49: “El pago de las remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores es en todo caso preferente a cualquier otra obligación del empleador”.

En concordancia con lo que establecía la Constitución, se dieron las siguientes normas:

- 1) La Ley de Reestructuración Empresarial, promulgada mediante Decreto Ley N° 26116 del 28 de diciembre de 1992, que en su artículo 7° estableció el orden de preferencia de los créditos, indicando que debían pagarse en primer orden a los créditos que tuvieran como origen el pago de las remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, cuando esta es una empresa no sujeta a la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros o Administradora de Fondo de Pensiones.
- 2) La Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, aprobada por el Decreto Legislativo N° 770, tal como quedó modificada por la Ley N° 26420 que si bien otorgaban primera prioridad a las remuneraciones, beneficios sociales y otros créditos laborales de los trabajadores de las entidades financieras o cooperativas de ahorro y crédito en disolución y liquidación; “los depósitos de la Compensación por tiempo de servicio hechos por empresas de otros sectores eran considerados sólo como de tercera prioridad. Es de suponer que constituyendo tales depósitos un verdadero crédito laboral de los

---

<sup>5</sup> Ley N° 15485, Artículo 1° “Los bienes de las Empresas Industriales, comerciales, mineras, agrícolas y todas aquellas que tengan a su servicio empleados y obreros, están afectos, al pago íntegro de los sueldos, salarios, e indemnizaciones insolutas con preferencia a cualquier otro crédito. Las acciones correspondientes tienen carácter persecutorio del negocio”.

trabajadores a los que pertenecen, la prioridad para los mismos sería también de primer orden” en comentario de la Revista Análisis Laboral (1996:18 ss.).

- 3) La Ley N° 26421 estableció que tratándose de las empresas declaradas en disolución por la Corte Suprema a solicitud del Poder Ejecutivo, por ser sus fines o actividades contrarios al orden público o a las buenas costumbres, en primer orden se abonan las remuneraciones y beneficios sociales de sus trabajadores.
- 4) Asimismo, el Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo N° 816 en su artículo 6° consideraba que las deudas por tributo gozan de privilegio general sobre todos los bienes del deudor tributario, aunque reconocía prioridad a favor de los acreedores laborales por sus remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores.
- 5) En cambio el Decreto Ley N° 25897 que regula El sistema Privado de Pensiones, en su artículo 69° establece que las deudas por remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores de la AFP en Liquidación, se pagarán en segundo orden, correspondiéndole el primer orden a los pensionistas que tienen fondo administrado y el Encaje y las otras garantías que haya fijado la Superintendencia.

Sin embargo a pesar de esa evolución de las normas a favor del trabajador, a raíz del autogolpe de estado del año 1992 y del intento de flexibilizar las relaciones laborales, se dictaron una serie de normas que so pretexto de incentivar la inversión pretendieron restar eficacia a los derechos laborales. Entre esas normas tenemos el Decreto Legislativo N° 856, del 25 de septiembre de 1996, fue dictada según se señala en su parte expositiva porque:

*“La legislación vigente sobre el tratamiento de la protección de los créditos laborales resultaba dispersa y en algunos casos contradictoria, creando*

*inseguridad jurídica para las inversiones, actividades y transacciones que deben realizar las empresas que son fuentes generadoras de puestos de trabajo...”*

Al respecto resulta interesante lo señalado por Morales Corrales (2001:99 ss.), que la ausencia de una legislación armónica había llevado a los jueces a considerar que bastaba se establezca la existencia de un adeudo laboral, con prescindencia de la situación de solvencia o insolvencia del empleador, para que pueda trabar embargo en un bien otorgado en garantía de otro crédito y pagar al trabajador sus beneficios sociales en perjuicio de otro acreedor.

En realidad como podemos apreciar el problema no era la diversidad de normas que regulaban la preferencia de los créditos laborales, sino la interpretación y la aplicación que los Órganos Jurisdiccionales daban a la Norma Constitucional y Legal vigente.

En su Disposición Complementaria el Decreto Legislativo N° 856, señala que todas las disposiciones sean generales o especiales anteriores que hubieran establecido un orden de prioridad distinto al señalado en este dispositivo respecto de los créditos laborales, adecuaran su orden de prioridad a la presente Ley.

En su primera Disposición Final se derogó la Ley N° 15485 del 02.04.65 que determinaba el pago de la preferencia de los sueldos, salarios e indemnizaciones insolutas, señalando además que las acciones que se ejerciten tienen carácter persecutorio del negocio. Quedando derogadas, todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

No podemos dejar de mencionar al artículo 59° del Decreto Legislativo N° 650<sup>6</sup>, que en su segundo párrafo hacía mención al carácter persecutorio cuando se refería al incumplimiento de la compensación por tiempo de servicio, siendo que sin limitación alguna los bienes de la empresa quedan afectos a dichos pagos con preferencia a cualquier otro crédito. Las acciones legales correspondientes tienen **carácter persecutorio** de los bienes del negocio. Como bien sabemos con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 857 publicado el 04 de noviembre de 2004, se suprime dicho párrafo.

## **2.2. NORMAS VIGENTES INFRACONSTITUCIONALES QUE ESTABLECEN LA PRIORIDAD DEL PAGO DE LOS CREDITOS LABORALES.**

Entre las normas infra constitucionales que establecen la preferencia de los créditos laborales tenemos:

1. El artículo 6° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo No. 135-99-EF, establece que las remuneraciones y beneficios sociales tienen prioridad en el cobro, con lo cual la propia legislación tributaria se autolimita para dar paso a la preferencia laboral. Aunque, el citado dispositivo no hace mención a las Indemnizaciones referidas en el Decreto Legislativo N° 856.

---

<sup>6</sup> Artículo 59.- Cuando el empleador deba efectuar directamente el pago de la compensación por tiempo de servicios o no cumpla con realizar los depósitos que le correspondan, quedará automáticamente obligado al pago de los intereses que hubiera generado el depósito de haberse efectuado oportunamente y en su caso, a asumir la diferencia de cambio, si este hubiera sido solicitado en moneda extranjera, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir y de la multa administrativa correspondiente.

En estos casos, así como en todos aquellos en que el empleador deba efectuar el pago de la compensación por tiempo de servicios y sus intereses o tenga calidad de depositario, o adeude este beneficio al trabajador, sin limitación alguna, los bienes de la empresa quedan afectos a dichos pagos con preferencia a cualquier otro crédito. Las acciones legales correspondientes tienen carácter persecutorio de los bienes del negocio.

*“Artículo 6º.- Las deudas por tributos gozan de privilegio general sobre todos los bienes del deudor tributario y tendrán prelación sobre las demás obligaciones en cuanto concurran con acreedores cuyos créditos no sean por el pago de remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores; las aportaciones impagas al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y al Sistema Nacional de Pensiones, y los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran devengarse, incluso los conceptos a que se refiere el Artículo 30 del Decreto Ley N° 25897; alimentos; e hipoteca o cualquier otro derecho real inscrito en el correspondiente Registro.*

*La preferencia de los créditos implica que unos excluyen a los otros según el orden establecido en el presente artículo.*

*Los derechos de prelación pueden ser invocados y declarados en cualquier momento.”*

2. Por otra parte tenemos el artículo 42 de la Ley General del Sistema Concursal N° 27809<sup>7</sup>, nos indica que tienen prioridad en el cobro los créditos de origen laboral, así como los de origen previsional, ya que

---

<sup>7</sup> Artículo 42º.- Orden de preferencia

42.1 En los procedimientos de disolución y liquidación, el orden de preferencia en el pago de los créditos es el siguiente:

Primero: Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones o a los regímenes previsionales administradas por la Oficina de Normalización Previsional, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes previsionales creados por ley, así como los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran originarse;

Segundo: Aportes impagos al Seguro Social de Salud incluyendo los intereses, moras, costas y recargos que estos generen; y los créditos alimentarios;

Tercero: Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, anticresis, warrants, derecho de retención o medidas cautelares que recaigan sobre bienes del deudor, siempre que la garantía correspondiente haya sido constituida o la medida cautelar correspondiente haya sido trabada con anterioridad a la fecha de publicación a que se refiere el artículo 32. Las citadas garantías o gravámenes, de ser el caso, deberán estar inscritas en el registro antes de dicha fecha, para ser oponibles a la masa de acreedores. Estos créditos mantienen el presente orden de preferencia aun cuando los bienes que los garantizan sean vendidos o adjudicados para cancelar créditos de órdenes anteriores, pero sólo hasta el monto de realización o adjudicación del bien que garantizaba los créditos;

Cuarto: Los créditos de origen tributario del Estado, sean tributos, multas, intereses, moras, costas y recargos; y,

Quinto: Los créditos no comprendidos en los órdenes precedentes; la parte de los créditos tributarios que, conforme al literal d) del artículo 48.3, sean transferidos del cuarto al quinto orden; y el saldo de los créditos del tercer orden que excedieran del valor de realización o adjudicación del bien que garantizaba dichos créditos.”

ambos están íntimamente ligados, lo que además guarda armonía con el segundo párrafo del artículo 1º del Decreto Legislativo N° 856, que también otorga preferencia a los créditos de origen previsional.

De igual forma que la norma tributaria no incorpora en esa preferencia a las indemnizaciones.

3. En la misma línea, se encuentra la Ley N° 26421, “Establece Orden de Prelación que deberán cumplirse las obligaciones a cargo de las empresas declaradas en disolución por la Corte Suprema” que tratándose de las empresas declaradas en disolución por la Corte Suprema a solicitud del Poder Ejecutivo, por ser sus fines contrarios al orden público o a las buenas costumbres, en primer orden se abonan las remuneraciones y beneficios sociales de sus trabajadores.
4. De igual forma podemos apreciar, en la “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de la Banca y Seguros” Ley No. 26702, en su artículo 117 dispone una norma similar para el caso de las entidades bancarias y financieras.

*“(..)Las obligaciones a cargo de una empresa de los sistemas financiero o de seguros en proceso de liquidación serán pagadas en el siguiente orden:*

1. *Las remuneraciones; y,*
2. *Los beneficios sociales, las aportaciones al Sistema Privado de Pensiones y a la Oficina de Normalización Previsional, así como otros créditos laborales de los trabajadores de la empresa liquidada, devengados hasta la fecha en que se declara la disolución, y las pensiones de jubilación a cargo de la misma o el capital necesario para redimirlas o para asegurarlas con la adquisición de pensiones vitalicias.”*

### **2.3. NORMAS QUE NO COMPARTEN ESTA PREFERENCIA.**

Sin embargo, a diferencia de toda la normatividad hasta aquí citada, debemos precisar que existen hasta dos normas en nuestro ordenamiento jurídico que no comparten este parecer:

La primera de ellas, es el artículo 69° del Decreto Ley 25897<sup>8</sup>, que regula el Sistema Privado de Pensiones, el mismo que establece que las deudas por remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores de una AFP en liquidación se pagan en segundo orden, siendo las de primer orden las deudas de las AFP con el fondo que administra y el canje y las otras garantías que haya fijado la superintendencia.

Al respecto, ya existen algunos pronunciamientos por la inconstitucionalidad de esta norma ; aunque por otro lado, es pertinente acotar que la única disposición complementaria del Decreto Legislativo 856, estableció que todas las disposiciones generales o especiales que establecen el orden de prioridad de los créditos laborales, incluyendo expresamente a la Ley N° 25897, quedan desde tal fecha adecuadas a los artículos 1 y 2 de dicho Decreto Legislativo, que estableció un privilegio absoluto a favor de los créditos laborales, con lo que ciertamente sería cuestionable la actual vigencia de la norma mencionada.

La segunda norma que colisionaría con el segundo párrafo del artículo 24° de la Constitución sería el artículo 4 del propio Decreto Legislativo N° 856

---

<sup>8</sup> Artículo 69.- Las deudas de una AFP en liquidación son pagadas en el siguiente orden:  
a) Las de la AFP con el Fondo que administra y el Encaje y las otras garantías que haya fijado la Superintendencia;  
b) Las remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores de las AFP;  
c) Los tributos; y,  
d) Las demás no incluidas en los incisos anteriores.

*“Artículo 4.- La Preferencia o prioridad también se ejerce cuando en un proceso judicial el empleador no ponga a disposición del juzgado bien o bienes libres suficientes para responder por los créditos laborales adeudados materia de la demanda “.*

Esta última norma, como se puede notar, es incongruente con el artículo 2° del mismo Decreto Legislativo, que dispone, al igual que la Constitución de 1993, que los créditos laborales tienen preferencia absoluta sobre cualquier otra obligación del empleador, y que los bienes de estos se encuentran afectos al pago íntegro de los créditos laborales. En consecuencia estamos ante una verdadera antinomia, es decir, una situación es regulada por dos normas incompatibles entre sí, que pertenecen al mismo ordenamiento, y que tienen el mismo ámbito de validez temporal, espacial, personal y material; pues al establecer el artículo 4 de dicho Decreto Legislativo limitaciones que no establece el artículo 2 del mismo cuerpo normativo, evidentemente existe una colisión de normas dentro de un propio ordenamiento, más aún, si dichas limitaciones o restricciones impuestas por el mencionado artículo 4 son incompatibles igualmente con el artículo 24 de la Constitución, que establece sin ninguna salvedad que el pago de las remuneraciones y de los beneficios sociales es preferente a cualquier otra obligación del empleador. Es por ello que, con acierto, dicha norma ha sido declarada inconstitucional, vía control difuso, por nuestra Corte Suprema.

Esta norma evidentemente lo que pretendió fue limitar el ejercicio de la preferencia laboral al supuesto en que el trabajador debía previamente entablar una demanda contra su empleador, y, luego de ello, requerirlo a través del proceso laboral para que presente bienes libres que respondan por sus créditos laborales, bajo apercibimiento de hacer uso del carácter privilegiado sobre otras deudas que tenga el empleador.



### **SUB - CAPITULO 3**

#### **EL CREDITO LABORAL EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 856**

Como hemos señalado la Constitución de 1993 en el segundo párrafo del artículo 24 nos indica que “el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador”.

Pasaremos al análisis de cada uno de los cuatro artículos que componen la regulación de los créditos laborales contemplados en el Decreto Legislativo N° 856, que fuese publicado el 04 de octubre de 1996, y su concordancia con lo señalado por la norma constitucional.

##### **3.1. CREDITOS PROTEGIDOS**

Al margen de que la Constitución nos habla en forma singular al referirse a la remuneración, mientras que el Decreto Legislativo 856 se refiere a ella en plural; para definir que entendemos por remuneración nos tendremos que remitir al artículo 6° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.; excluyéndose, en consecuencia, todo aquello que no constituye remuneración según lo previsto en los artículos 19 y 20 del Decreto Legislativo 650.

*"Artículo 6.- Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social así como para ningún derecho o beneficio*

*de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto.<sup>9</sup>*

En nuestro ordenamiento laboral no existe una definición clara de lo que debemos entender por Beneficio Social, asimilándola a los beneficios legales o en una interpretación más amplia, a los beneficios generados durante la relación laboral sin importar el origen de los mismos. Nuestra legislación no aporta una solución para resolver este tema porque incluye como beneficios sociales también conceptos remunerativos. Así, algunos entienden por beneficios sociales; todos aquellos conceptos que perciben los trabajadores con ocasión de sus labores prestadas de manera dependiente. No importa su carácter remunerativo, el monto o la periodicidad del pago, pues lo relevante es lo que percibe el trabajador por su condición de tal y por mandato legal.

Muestra de esta falta de claridad es la “Ley de Consolidación de Beneficios Sociales” aprobada por el Decreto Legislativo 688, donde se establece algunos conceptos que compondrían un beneficio social: El seguro de Vida, la bonificación por tiempo de servicio y la Compensación por tiempo de servicio.

Nuestro Ordenamiento prevé para los trabajadores seis beneficios económicos de origen legal que se abonan durante la relación laboral (no se analizarán aquellos conceptos que se paguen al término del contrato de trabajo): Las gratificaciones de fiestas patrias y navidad, la asignación familiar, la bonificación por tiempo de servicios, el seguro de vida, Utilidades y Compensación por tiempo de servicio; los tres primeros tienen carácter remunerativo y los tres últimos no.

---

<sup>9</sup> Artículo vigente que contiene la modificatoria efectuada por el Artículo 13° de la Ley N° 28051, Ley de prestaciones alimentarias en beneficio de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, publicado el 02-08-2003.

¿Se puede decir que están comprendidos los conceptos no remunerativos, como la gratificación extraordinaria?

A diferencia de lo señalado a nivel constitucional, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 856, amplía el ámbito sobre el cual recae la prioridad en el pago pues señala que constituyen créditos laborales “las remuneraciones, compensación por tiempo de servicios, las indemnizaciones y en general los beneficios establecidos en la Ley que adeuden a los trabajadores. Además, son créditos laborales los aportes impagos más intereses y gastos a los sistemas de jubilación (pública o privados) “.

La Jurisprudencia se ha encargado de determinar que los intereses laborales también son créditos laborales de primer orden, no pudiendo considerarse como provenientes de una deuda común, por cuanto está regulado por una norma especial el Decreto Ley N° 25920, además la referida norma no excluye de la prioridad que asigna a los créditos laborales a los intereses de estos.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto Legislativo 856, los conceptos no remunerativos no estarán comprendidos como créditos laborales de primer orden, pues no califican como remuneración, indemnización ni están establecidos en Leyes. Así, cuando menos, ya ha sido considerado por el tribunal de defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, que ha considerado que los conceptos no remunerativos no tienen primer orden de preferencia en el cobro de los patrimonios de la empresa.<sup>10</sup>

El Decreto Legislativo No.856, amplía la protección constitucional a otros créditos laborales como es el caso de las **indemnizaciones**; aquí podríamos mencionar a la indemnización especial por despido arbitrario, la indemnización por vacaciones no tomadas oportunamente, las

---

<sup>10</sup> Resolución N° 230-2000-TDC y 251-98-TDC, expedidas por dicho Tribunal donde no reconoció como crédito laboral de primer orden, la asignación escolar y las condiciones de trabajo respectivamente.

indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuando corran directamente a cargo del empleador, la indemnización por daños y perjuicios originados por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo y los aportes impagos de los sistemas previsionales y los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran generarse. El responsable de esta omisión es el empleador toda vez que constituye su obligación retener de la remuneración del trabajador los aportes señalados por ley y abonarlas oportunamente a la entidad correspondiente.

Sin embargo, le pone una limitación al fijar que solo los beneficios sociales previstos por ley gozan del privilegio, lo que resulta discutible y daría lugar a que un juez, haciendo uso del control difuso, prefiera la norma constitucional a la norma legal, y ampare los beneficios sociales provenientes de pactos colectivos o individuales o fruto de la decisión unilateral del empleador, dentro de la prioridad consagrada por la carta magna.

### **3.2. PRIORIDAD DE LOS CRÉDITOS LABORALES**

La Constitución en el artículo 24 segundo párrafo señala: “El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador”.

Como podemos apreciar nuestra norma suprema utiliza el término “**prioridad**”, de igual forma lo emplea el Decreto Legislativo N° 856, sin embargo también se emplean el de *preferencia* o *privilegio*, al margen de la cuestión terminología y conceptual, nos estamos refiriendo a que dada la naturaleza o causa del crédito o más claramente, el índole del interés que este crédito tiene, se prefiere a su acreedor frente a otros acreedores de condición distinta o de otras clases de crédito.

El artículo 2º, repitiendo la norma constitucional establece que los créditos laborales tienen prioridad sobre cualquier otra obligación de la empresa o empleador. Sin embargo, efectúa una precisión al referirse a la **empresa** y no sólo al empleador. Entendemos que el legislador ha querido precisar o distinguir en caso estemos frente a una persona natural o una persona jurídica, y que los bienes de éste o aquélla, según corresponda, se encuentran afectos al pago del integro de los créditos laborales adeudados.

Como podrá desprenderse, la norma constitucional regula el supuesto en que un empleador tenga varias deudas, dentro de las cuales está una de carácter laboral, en cuyo caso la norma impone que el crédito laboral se pague en primer término, y luego las demás, cualesquiera que fueran, sean de carácter tributario, respaldado con una garantía real, o simplemente quirografario<sup>11</sup>.

Para algunos haciendo una interpretación de la norma constitucional y legal, llegan a conclusión que estas normas, en principio, regulan un supuesto de concurrencia de acreedores frente a un mismo empleador, por tanto solo y únicamente resulta aplicable la preferencia del crédito laboral en caso de concurrencia de acreedores.

Solo puede recurrirse al carácter preferente de los créditos laborales señalan Avalos Jara y Llontop Cassina ( 2006:263) en el escenario de un concurso de acreedores, supuesto que no se presento en este caso ya que al haberse transferido los vehículos cuando no había impedimento judicial para ello y el adquirente inscribió su derecho, no había pluralidad de acreedores. Por tanto, resulta equivocado valerse del carácter preferente o prioritario de los créditos laborales.

---

<sup>11</sup> Se refiere al acreedor común quienes no tiene preferencia ni legal ni contractual, los mismos que deberán ser pagados, a prorrata del saldo que resulte del pago de otros acreedores preferenciales.

Comparte la misma opinión que la prioridad en el pago de obligaciones siempre se tiene que dar en el caso de concurso de acreedores (Valdivieso. 2010:259 ss).

*“...es decir, un trabajador no puede alegar este principio de no existir más acreedores del empleador; o –aun cuando el empleador tenga otras obligaciones– si el empleador cuenta con los bienes suficientes como para garantizar el pago de su obligación laboral. Sin embargo, bajo este supuesto **se plantea el problema para el trabajador de conocer si su empleador tiene otras obligaciones** (y que dado su carácter privado son difíciles de conocer); siendo mucho más sencillo poder determinar si su empleador tiene bienes suficientes para garantizar su obligación. Eventualmente en un proceso judicial le corresponde al empleador demostrar la no concurrencia de acreedores “.*

Como vemos es una interpretación muy restrictiva tanto de la norma Constitucional y Legal, puesto que en ninguna de ellas se emplea el término **concurrencia de acreedores**, que podría limitar el alcance de la preferencia de los créditos laborales a la existencia previa de dos o más acreedores, además de la dificultad procesal para el trabajador de acreditar que su empleador tiene otras obligaciones; bajo esta interpretación no podríamos aplicar la preferencia de los créditos laborales si solo existiera una deuda laboral como única obligación del empleador deudor sin la concurrencia de otras obligaciones u otros acreedores a los cuales también el empleador les tenga una deuda pendiente de pago de distinta naturaleza a la laboral.

- **BIENES AFECTADOS**

Este artículo es el que concreta la forma en que la deuda laboral se encuentra garantizada, es decir, con los bienes de este, los bienes tienen que haber sido de propiedad del empleador deudor.

Así el artículo 2 del Decreto Legislativo 856, con referencia a la preferencia del crédito laboral nos habla que los *“bienes de este se encuentran afectos”* al pago directo de tales obligaciones; siendo que al referirse al carácter persecutorio regulado en el artículo 3 alude a los *“bienes del negocio”*, termino que tendría un concepto más amplio, que no solo abarcaría la propiedad de los bienes, sino también su **posesión**. También se supone que si el empleador está organizado como persona jurídica, con responsabilidad limitada<sup>12</sup>, los bienes deben pertenecer o ser de la sociedad. En cambio si el empleador es persona natural responderá con todos sus bienes, incluidos los personales.

El mismo dispositivo indica que si los bienes no alcanzan para satisfacer toda la deuda laboral, el pago se efectuará a prorrata, es decir en proporción a la deuda correspondiente a cada trabajador.

### 3.2.1. SUSTITUCION DEL EMPLEADOR

Con referencia al último párrafo del artículo 2 referente a la sustitución en el pago directo a los trabajadores por un tercero en reemplazo del empleador

Morales Corrales (2001:99 ss.) refieren que el segundo párrafo del artículo 2º contiene un error de redacción, sin embargo, debe entenderse que el sentido es que, si una tercera persona o empresa asume el pago de los créditos laborales adeudados por el empleador cancelándolos, entonces sustituye a los trabajadores en la preferencia.

---

<sup>12</sup> Hay que tomar en cuenta que en las Sociedades Colectivas y en las Sociedades en Comanditas, esta última con Socios Colectivos; los socios responden en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales; artículos 265 y 278 de la Ley General De Sociedades N° 26887.

Con respecto a la Transmisión de los créditos laborales, en la Revista Análisis Laboral, Pedro Morales Corrales, concordando con Dolorier Torres (2003:77), refieren:

*“...en caso un tercero adquiriera créditos laborales, ellos no perderán su carácter privilegiado, debido a que este privilegio se otorga por la naturaleza jurídica del crédito y no por las características de su titular. Haciendo la salvedad que los acreedores laborales que pretendan transmitir su crédito laboral tan solo podrán hacerlo por un monto igual o mayor al reconocido por la Secretaría Técnica o la Comisión correspondiente del INDECOPI, ya que en caso contrario, existiría una renuncia a sus derechos laborales...”*

Debemos señalar que la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal no regula el tema de la transmisión de créditos concursales, limitándose a indicar los requisitos y el procedimiento a seguir para su reconocimiento por parte del Servicio Técnico del INDECOPI.

Se discute si la protección es al crédito laboral o la protección es al trabajador, si fuera a éste en el caso de la transferencia del crédito, la protección especial ya no tendría razón de ser, porque no sobreviviría el privilegio. Sin embargo, si se sostiene que la protección es al crédito laboral, el privilegio debería mantenerse para el adquirente del crédito.

En caso que un tercero adquiera créditos laborales, ellos no perderán su carácter de privilegiado, debido a que este privilegio se otorga por la naturaleza jurídica del crédito y no por las características de su titular.

Cortes Carcelén (2002:65 ss.) refiere que esta discusión resulta de mucha importancia porque en el caso que se permita la transmisión



del privilegio, los trabajadores podrán tener mayores posibilidades de ver su acreencia satisfecha con prontitud.

No hay que olvidar que en la legislación española el Fondo de Garantía Salarial FOGASA, asume el pago de los crédito laborales del empleador insolvente, para el reembolso de las cantidades satisfechas se **subroga** obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores conservando el carácter de crédito privilegiado que les confiere el artículo 32 del Estatuto.

### **3.2.2. CESION DE CREDITO LABORAL FUERA DE LA PLATAFORMA DE UNA RELACION LABORAL.**

Con referencia ha que es lo que se protege: Al crédito laboral o al trabajador, nos puede aclarar el panorama un pronunciamiento del Supremo Interprete de la Constitución, donde unos trabajadores y el Sindicato tenía un proceso laboral en tramite sobre incumplimiento de disposiciones legales con una empresa, estando el proceso en trámite suscribieron un contrato de cesión de sus derechos con otra empresa donde percibieron solo la cantidad de S/. 656,000, que está muy por debajo del adeudo total de S/. 5 745.200.62; lo que constituye una renuncia aproximada del 80% del valor real de los créditos adeudados.

El Tribunal Constitucional<sup>13</sup> indico que la cesión de derechos efectuada no tiene como plataforma una relación laboral, es decir, no se celebra en el contexto de una relación laboral en el que el objeto constituya una cesión de derechos laborales; muy por el contrario,

---

<sup>13</sup> Expediente N° 00529-2010/PA/TC, 19 de octubre del 2010, la cesión de derechos laborales no contraviene ni infringe el principio de irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores toda vez que dicho acto jurídico no tiene como plataforma una relación laboral, siendo que la irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se sujeta al ámbito de las normas taxativas que, por tales, son de orden público y con vocación tuitiva a la parte más débil de la relación laboral. Pero el Tribunal deja a salvo el derecho de los recurrentes de recurrir a la vía civil a efectos de que se declare la nulidad de dicho acto jurídico por supuesto vicio de la voluntad.

dicho acto jurídico **no tiene como plataforma una relación laboral**, es decir, no se celebra en el contexto de una relación laboral en el que las partes de dicho acto coinciden con las calidades de empleador y empleado, y en el que el objeto constituya una cesión de derechos laborales; muy por el contrario, dicho acto jurídico tiene como plataforma la autonomía de la voluntad de las personas para ceder y adquirir un derecho litigioso cuyo contenido, al intervenir un tercero ajeno a la relación laboral (cesionario) se convierte en uno de índole netamente civil.

Con esta resolución se colige que se estaría dando luz verde a la venta o cesión de créditos laboral efectuada por los trabajadores que se encuentren en un proceso ante el INDECOPI<sup>14</sup>, es más, incluso procesos que se vienen tramitando ante los Órganos Jurisdiccionales, como en el presente caso entre trabajadores o sindicatos contra sus empleadores, pueden ser objeto de cesión de derechos efectuada a un precio menor al que realmente corresponde a favor de un tercero, quien indudablemente sabiendo de lo engorroso, dilatorio y de la necesidad que tienen los trabajadores de contar en el más breve tiempo con el dinero fruto de su trabajo, transferirían, cederán o venderán sus créditos, aunque ello conlleve una pérdida económica, no pudiendo alegar el principio de irrenunciabilidad de sus derechos laborales al no tener dicho acto jurídico según lo expresado por el Tribunal Constitucional “como plataforma una relación laboral”.

Esto podría generar un mercado negro de compra de créditos laborales al ser posible la compra de deudas laborales como en el presente caso, donde resulta evidente que los trabajadores y su

---

<sup>14</sup> Resolución N° 1588-2006/TDC-INDECOPI, en materia de cesión de créditos laborales, concluyo que: I) el pago de un monto menor no limita o restringe los alcances de la cesión, y II) cualquier cuestionamiento a una cesión así efectuada tendrían que canalizarse a través de las acciones legales pertinentes, pues mantendrá su eficacia como acto jurídico en tanto no exista pronunciamiento jurisdiccional en sentido contrario.

sindicato se vieron en la necesidad de transmitir al cesionario sus derechos laborales con la pérdida del 80% de su valor real

### 3.3. PERSECUTORIEDAD

Menciona Toyama Miyagusuku, citando a Pla Rodríguez (1976: 576), que como consecuencia del privilegio salarial de los créditos laborales, los sistemas jurídicos suelen contar con un ordenamiento que busque prevenir, fiscalizar o afrontar las eventuales maniobras de ciertos empleadores que suscriben una serie de contratos y operaciones para transferir bienes a terceros que podrían haber servido de sustento para el cobro de los adeudos de los trabajadores.

El típico mecanismo de “evasión” del privilegio laboral es que el empleador proceda con la transferencia de sus bienes a un tercero para evitar que el crédito laboral privilegiado pueda ser ejecutado. Para ello, o se suele establecer un periodo en el cual se presume que toda transferencia es calificada como evasión en el cumplimiento de las obligaciones laborales “*fuero de atracción*” o se analiza simplemente las actitudes-conductas dolosas o culposas- del empleador de no abonar las remuneraciones y beneficios sociales de sus trabajadores.

El Decreto Legislativo 856 establece que la preferencia o prioridad de los créditos laborales se ejerce, con carácter persecutorio de los bienes del negocio **solo** en los siguientes casos:

#### 3.3.1. BIENES DEL NEGOCIO

Antes de ver los dos supuestos contemplados en la norma para ejercer el principio de persecutoriedad, resulta necesario determinar sobre que bienes recae:

I) Los bienes del empleador y

## II) Los bienes del negocio

En el primer supuesto, queda claro que se trata de los bienes que tiene como titular al empleador, por lo que no cabe diferenciar entre aquellos que se encuentran destinados a la explotación de la empresa y los que no. Bastaría con demostrar que pertenecen al empleador, lo cual no reviste mayor complejidad si estos se encuentran dentro del dominio del empleador, pues no se aplica aún el principio persecutorio.

En el segundo supuesto, es el más complejo, debe entenderse que los bienes se encuentran fuera de la esfera de dominio del empleador, de ahí la necesidad de la aplicación del principio persecutorio. Por otro lado, la norma al consignar “**negocio**” y no simplemente “bienes del empleador” como en el primer supuesto, está utilizando un concepto más amplio, dado que el negocio es la actividad que desarrolla el empleador empresario a través de la empresa y que bien puede realizarse sin que la propiedad de todos los bienes sea del empleador<sup>15</sup>.

### 3.3.2. INSOLVENCIA

Cuando un empleador haya sido declarado insolvente y como consecuencia de ello se ha procedido a la disolución y liquidación de la empresa o su declaración judicial de quiebra.

Es necesario precisar que cuando la citada ley refiere que el empleador haya sido “declarado insolvente”, nos remite al Decreto Ley 26116 “Ley de Reestructuración Patrimonial” norma vigente al momento de promulgarse el Decreto Legislativo 856; siendo que

---

<sup>15</sup> VALDIVIEZO L. Erika J. Contenido del Principio de Persecutoriedad de los Créditos laborales en el caso de empresas vinculadas, Revista Dialogo con la Jurisprudencia N° 144 Setiembre 2010Pagi. 259 al 270.

actualmente la vigente la Ley N° 27809 que en su artículo 3 hace referencia a la declaración de insolvencia del deudor.

No siendo por tanto de aplicación a la presente norma las causales de disolución, Liquidación y extinción de Sociedades, establecidas en el artículo 407 de la Ley General de Sociedades.

Entonces los créditos laborales estarán amparados de acuerdo al Decreto Legislativo 856 artículo 3 inciso a) siempre que se haya producido dentro del procedimiento establecido en la “Ley General del Sistema Concursal”.

De producirse la Disolución y Liquidación dentro del marco de la Ley General de Sociedades N° 26887, y especialmente el Reglamento de las normas para el pago preferencial de los derechos sociales de los trabajadores (aprobado por Decreto Supremo 007-86-TR, publicado el 30 de enero de 1986), que establece en su artículo 8° que los liquidadores de la sociedad no podrán vender los bienes sociales si previamente no han constituido garantía para el pago de los beneficios sociales de los trabajadores o efectuado la consignación de los mismos. Los artículos 420°, 422° de la Ley General de Sociedades, establecen que los liquidadores no pueden distribuir entre los socios el haber social sin que hayan satisfecho las obligaciones con los acreedores

La insolvencia del empleador atiende a una situación económica de crisis en la que se encuentra, en la que cualquier acreedor e incluso el propio deudor puede solicitar el inicio del procedimiento concursal; en este último caso debe de acreditar encontrarse en algunos de estos casos: a) Que más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas por un período mayor a treinta (30) días calendario; b) Que tenga pérdidas acumuladas deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al tercio del capital social

pagado; iniciándose el procedimiento a solicitud de los acreedores: cuando uno o varios acreedores impagos cuyos créditos exigibles se encuentren vencidos, no hayan sido pagados dentro de los treinta (30) días siguientes a su vencimiento y que, en conjunto, superen el equivalente a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de presentación, podrán solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario de su deudor. El desistimiento de alguno de los acreedores que presentó la solicitud, luego de emplazado el deudor, no impedirá la continuación del procedimiento.

Esta causal, responde a un hecho de carácter involuntario por parte del empleador y este es declarado insolvente, por lo que se puede verificar que el empleador no persigue evadirse de sus obligaciones laborales, sino que es la gestión empresarial negativa la que obliga a someterse a la legislación concursal; así lo ha señalado Huertas Rodríguez (2003:40).

No compartimos del todo lo señalado en el párrafo precedente puesto que no son pocos los empresarios que usan la figura de la insolvencia, la reestructuración o la liquidación como una forma de evadir sus obligaciones contraídas con sus proveedores y trabajadores, para ello basta observar la cantidad de empresas con solicitudes para su declaratoria de insolvencia. Para eso, se apuran en presentar a INDECOPI estados financieros auditados por empresas que ellos mismos contratan, y con información que responde a sus intereses; así señala el Presidente de la Sociedad Peruana de Pymes, Panizo Fernández, en el Diario Oficial El Peruano (2006:11), que como se trata de documentos auditados, INDECOPI considera que la información entregada es de buena fe y no pide el sustento de las cifras que justifican la supuesta insolvencia. Conseguida la declaración de insolvencia la empresa entra en reestructuración por dos años, y en vez de aprovechar este

tiempo para recuperar su capital, los dueños se dedican a saquear los bienes inmuebles y lo que les queda de capital y patrimonio, para luego declararse automáticamente en liquidación.<sup>16</sup>

En los últimos tiempos, para muchas empresas ingresar al sistema concursal ha sido un gran negocio, puesto que de un lado han obtenido préstamos por doquier, mal utilizados en la mayoría de los casos y al ingresar al sistema concursal, adicionalmente han colocado como trabajadores a muchas personas que jamás han obtenido tal condición y finalmente se han puesto nuevamente en la cola para, esta vez, como cualquier otro trabajador; Gómez Valdez. (2004: 559). indica como otro de los cuestionamientos al sistema concursal, la actividad libérrima de las empresas liquidadoras, a quienes presentan gastos excesivos que éstas presentan en su análisis contables, así como el excesivo tiempo para liquidar la empresa, malformaciones todas éstas que merecen un análisis y balance general a fin de poder establecer las rectificaciones, muchas de esas empresas han realizado tropelías afectando la masa concursal que ellos iban a cautelar al suscribir el convenio de liquidación.

La Ley General del Sistema Concursal califica a los créditos laborales como de “primer Orden” respecto al cobro de las

---

<sup>16</sup> Entre Enero y Julio del 2006, INDECOPI recibió 308 expedientes para la declaratoria de insolvencia y en el 2005, fueron 403 casos. Más aún entre el 2000 y 2006 recibió 5,950 .00 expedientes.

La Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) es el órgano responsable de la tramitación de los procedimientos a través de los cuales se busca generar un ambiente adecuado para la negociación entre acreedores y deudores. Estos procedimientos buscan alcanzar soluciones eficientes destinadas a la recuperación del crédito. En el periodo mayo 2010 - abril 2011, se iniciaron 274 procesos concursales (expedientes principales iniciados/publicados). El 90,5% fue iniciado por mandato del Poder Judicial en aplicación de los artículos 692-A o 703 del Código Procesal Civil; mientras que 5,5% y 4,0% a pedido de los acreedores y a solicitud de los deudores, respectivamente. En ese mismo periodo, el 98,4% de las decisiones tomadas en Junta de Acreedores sobre el patrimonio de las empresas derivó en liquidación y solo 1,6%, en reestructuración. Con respecto al monto total de los créditos reconocidos, se observó que ascendió a S/.289,6 millones. (<http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/bol/bolest/Abr11Estad2.pdf> f)

acreencias producto de la situación concursal. En este caso no queda duda alguna respecto a la persecutoriedad de los bienes del negocio; los trabajadores no deberían verse de forma alguna afectados por la situación económica crítica del empleador producto de su negligencia en el manejo del negocio o impericia en efectuar trato comerciales, etc.; actividades en las cuales no han tenido injerencia; cabe que los bienes transferidos a terceros puedan ser rematados por los trabajadores a efectos de la cobranza de adeudos laborales.

Es importante precisar que la referida norma permite que se declare judicialmente la ineficacia y en consecuencia inoponible frente a los acreedores del concurso los gravámenes, transferencias, contratos y demás actos jurídicos, sean a título gratuito u oneroso, que no se refieren al **desarrollo normal** de la actividad del deudor, que perjudiquen su patrimonio y que hayan sido realizados o celebrados por éste dentro del año anterior a la fecha en que presentó su solicitud para acogerse a alguno de los procedimientos concursales, fue notificado de la resolución de emplazamiento o fue notificado del inicio de la disolución y liquidación.<sup>17</sup>

El concepto de “transferencia” esbozado en el Decreto Legislativo 856 incluye a cualquier tipo de relación jurídica patrimonial a través de la cual se transfiere la propiedad (compra venta, donación, permuta, etc.) y como la misma norma señala, siempre que esté sujeto a una posterior declaración de insolvencia

---

<sup>17</sup> Artículo 19.- Ineficacia de actos del deudor:

El juez declarará ineficaces y, en consecuencia, inoponibles frente a los acreedores del concurso, los gravámenes, transferencias, contratos y demás actos jurídicos, sean a título gratuito u oneroso, que no se refieran al desarrollo normal de la actividad del deudor, que perjudiquen su patrimonio y que hayan sido realizados o celebrados por éste **dentro del año** anterior a la fecha en que presentó su solicitud para acogerse a alguno de los procedimientos concursales, fue notificado de la resolución de emplazamiento o fue notificado del inicio de la disolución y liquidación (..)



Como podemos apreciar el “*tiempo de sospecha*” establecido en el Decreto Legislativo 856 alcanza a la transferencia de activos fijos o de negocios efectuados dentro de los **seis meses anteriores** a la declaración de insolvencia del acreedor sin condición alguna, basta que se haya efectuado dentro de dicho periodo para el “*fuero de atracción*” para que la afectación de los bienes del deudor se ejerza con carácter persecutorio; en cambio la Ley General del Sistema Concursal establece la ineficacia de los actos del deudor dentro de los doce meses anteriores a la solicitud para acogerse algunos de los procedimientos concursales, pero condicionada a que los actos realizados por el deudor no se refieran al desarrollo normal de la actividad del deudor y que perjudique su patrimonio; aquí no basta que la transferencia se haya realizado dentro del tiempo de sospecha para que el Juez declare su ineficacia, sino que además deben cumplirse con los supuesto condicionados en la norma.

Por ello coincidimos con los que señalan que ambas acciones- La contenida en el Decreto Legislativo 856 y la de la Ley General del Sistema Concursal Ley N° 27809, son distintas y alternativas, resaltando el hecho que esta ultima protege al tercero registral, en tanto que la persecutoriedad laboral no respeta el derecho de terceros, y es más, en este supuesto concreto ni siquiera se detiene a analizar si este actuó con fraude o en vinculación sospechosa con el empleador-deudor, lo que hace que la persecutoriedad tenga un carácter más real que personal, en tanto se opone a todo tipo de transferencia siempre y cuando el empleador se encuentre en esta particular situación..

Vemos que el en Decreto Legislativo N° 856 Inciso 3 a), no se hace mención respecto de la conducta del tercero adquiriente de buena fe a título oneroso, que podría resultar afectado por este efecto persecutorio; situación que sí se encuentra contemplada en La Ley

General del Sistema Concursal, en el artículo 19.4 ineficacia de los actos del deudor: *“El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho del deudor que en el Registro pertinente aparece con facultades para otorgarlo, no resultará afectado con la ineficacia a que se refiere el presente artículo, una vez inscrito su derecho “; en tanto que la persecutoriedad laboral no respeta el derecho de ese tercero y, es más, en este supuesto concreto ni siquiera se detiene a analizar si este actúo con fraude o en vinculación sospechosa con el empleador-deudor, lo que hace como reiteramos que la persecutoriedad laboral tenga un matiz más real que personal, en tanto que se opone a todo tipo de transferencias siempre y cuando el empleador se encuentre en esta particular situación jurídica. Además, refuerza el matiz real en tanto la persecutoriedad permite incluso desconocer el derecho de los terceros “subadquiriente”, es decir, toda la cadena de transferencias que se pudo haber realizado con un determinado bien del empleador-deudor puede ser inoponible frente al acreedor laboral, pues en ello descansa el fundamento de la persecutoriedad.*

## **EL CREDITO LABORAL EN EL SISTEMA CONCURSAL**

Generalmente las empresas recurren al sistema concursal cuando las posibilidades de su subsistencia en el mercado resultan casi nulas y ordinariamente la mayoría de sus activos ya no se encuentran en su poder, puesto que han sido transferidos, pasando por una situación de “crisis” que muchas veces son desconocidas por los trabajadores, los cuales una vez declarada en insolvencia tienen que solicitar el reconocimiento de su crédito laboral, proveniente de una relación laboral que también tiene que ser acreditada de ser el caso.

Para muchos de los acreedores del deudor-empresario, los trabajadores laborales son considerados como “actores secundarios”

dado que las instituciones del estado o grupos de poder económico, como el conglomerado bancario, piensan y en la realidad ocupan el rol de “actores de reparto”; ante esta situación proponen que el rol protagónico lo debe ocupar el generador de la propia crisis económica, no importando la calidad de factores. Agregan que su papel es importante para lograr maximizar los costos de la transacción y con el objeto de poder otorgarle un verdadero valor a la empresa. Quien mejor que él: El deudor<sup>18</sup>.

Por nuestra parte, hemos señalado que muchos empleadores con la finalidad de eludir sus compromisos asumidos frente a sus acreedores, recurren a la reestructuración y luego a la insolvencia como un medio de lograr beneficios económicos a costa de los trabajadores y demás acreedores; por ello, no creemos que la persona más indicada para poder llevara adelante el proceso de reestructuración empresarial sea la persona que coloco a la empresa en estado de insolvencia, de ahí que en la practica es la Junta de Acreedores los que asumen la dirección y ponen a la persona que se encargara de su administración.

Cabria preguntarnos que tan eficaz resulta para los trabajadores esta Ley de Reestructuración Empresarial; si realmente al final de un largo proceso de Liquidación por insolvencia del empresario deudor, los trabajadores llegan a cobrar la totalidad de su crédito laboral; y en que tiempo se llega hacer efectivo dicho cobro de ser el caso.

Si el proceso de insolvencia de una empresa debe ser seguido por un organismo como el INDECOPÍ o por el contrario que dicho proceso sea de conocimiento de los Juzgados Comerciales, quienes contarían con el conocimiento y la especialización para poder llevar a cabo, estando que en otras legislaciones como la Española, esta a cargo del Juez Mercantil, resulta indudable que la intervención de los órganos

---

<sup>18</sup> CARBONEL OBRIEN, Estevan, Revista de la Biblioteca del Colegio de Abogados de Lima, Edición N° 8-Octubre 2009, pagina 130-132.

jurisdiccionales le otorgaría una mayor garantía al proceso y un mejor<sup>19</sup> resguardo de los intereses de los trabajadores.

### 3.3.2. SIMULACION O FRAUDE

Antes que nada resulta necesario precisar que entendemos por fraude, y las clases de fraude contemplados en nuestra legislación y específicamente el fraude en la legislación laboral, donde se nos habla de: fraude en el despido<sup>20</sup>, fraude en la contratación, fraude en las modalidades formativas, fraude en los créditos laborales, etc.

Resulta indudable que el fraude al que se hace referencia en la norma que regula el Decreto Legislativo N° 856, no es el que contempla nuestro ordenamiento civil, conocido como la acción pauliana o revocatoria, puesto que de ser así, hubiese sido suficiente que la norma laboral mencione que el fraude al que se refiere es el contemplado en el artículo 195° del Código Civil.

#### FRAUDE A LA LEY

El fraude a la Ley, según Francesco Santero Passarelli señala: *“Aquel por medio del cual se intenta eludir una norma imperativa que prohíbe conseguir con el negocio un resultado determinado, percibiendo un resultado análogo. Dos son por tanto, los rasgos*

---

<sup>20</sup> Al respecto el Tribunal Constitucional nos habla del despido fraudulento en el fundamento 15 del Expediente 0976-2001-AA/TC, cuando “Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, como lo ha señalado, en este último caso, la jurisprudencia de este Tribunal (Exp. N.° 415-987-AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-2000-AA/TC); o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad (Exp. N.° 628-2001-AA/TC) o mediante la “fabricación de pruebas”.

*característicos del negocio en fraude a la ley: un elemento objetivo, consistente en la idoneidad del negocio realizado para conseguir un resultado análogo al prohibido, y un elemento subjetivo, consistente en el propósito de eludir la norma imperativa*<sup>21</sup>.

## **FRAUDE EN EL CREDITO LABORAL**

Pero cuando hablamos de fraude tratándose de créditos laborales, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 856 artículo 3 inciso b), cuando se comprueba que el empleador injustificadamente disminuye o distorsiona la producción para originar el cierre del centro de trabajo o transfiere activos fijos a terceros o los aporta para la constitución de nuevas empresas, o cuando abandona el centro de trabajo; se configurará una simulación o fraude a la ley, con la correspondiente persecutoriedad de los bienes del empleador.

### **Presupuestos.**

Para estar dentro del alcance del citado dispositivo, tiene que cumplirse determinados supuestos como son:

1. Que, se haya producido la extinción de la relación laboral.

Debemos entender que la extinción a la que alude la norma debe darse dentro de las causales de extinción del contrato de trabajo, contempladas en el artículo 16° del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por D.S. N° 003-97-TR.

---

<sup>21</sup> Santos Passarelli, Francesco, Doctrinas Generales del Derecho Civil, en Revista de derecho privado, Madrid, 2001, p.225, citado por Raúl Samame Morante, Revista Jus, editorial Grijley, Diciembre 2007, pagina 293 al 299.

Este requisito para algunos constituye uno de los presupuestos necesarios para que el trabajador pueda ejercitar la preferencia de su crédito con carácter persecutorio, criterio con el cual discrepamos puesto que nos parece que la vigencia o no del vínculo laboral, además de no estar contemplado en la norma Constitucional ni en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 856, en nada debe impedir que ante la existencia de una deuda laboral impaga el trabajador pueda solicitar al órgano Jurisdiccional que su preferencia se ejercite con carácter persecutorio sobre los bienes del empleador sin que para ello tenga que haberse puesto término a la relación laboral que pudiera existir en esos momentos, siendo suficiente la existencia de una deuda laboral impaga.

2. Que, exista adeudos de carácter laboral no abonados al trabajador.

Con lo cual se le estaría causando un gran perjuicio reflejado en el incumplimiento de las obligaciones laborales para con él.

Al margen del aspecto probatorio de quien le corresponde acreditar el perjuicio creemos que basta que el trabajador tenga una deuda laboral pendiente de pago para que pueda ejercitar la acción persecutoria de darse en estos casos, estando al incumplimiento de su pago.

3. Que, la extinción de la relación laboral y el no pago al trabajador, se haya producido por **simulación o fraude a la Ley**.

#### **Casos de fraude:**

Pasaremos a los análisis de cada uno de los cinco casos en que nos encontramos frente a comportamientos o conductas fraudulentas pudiendo apreciarse como veremos de las dos primeras un elemento

subjetivo como el de la “injustificación”, en tal sentido de incurrir el empleador en forma justificada en cualquiera de los dos primeros casos, no estaría cometiendo fraude alguno. Pero veamos los casos:

.

- a) Disminución injustificada de la producción que origina el cierre del centro del trabajo: Se configura cuando la disminución, de la producción se realiza con la intención de que la empresa incurra en una causal de cierre, y de esa manera se encuentre justificado el cese de los trabajadores, sin la consecuente obligación de responder por el pago de sus derechos económicos laborales.
- b) Distorsión injustificada de la producción que origina el cierre del centro de trabajo: La intención del empleador es la misma que fuera mencionada en el supuesto anterior, con la precisión de que ya no se trata de disminución sino de desviar la producción; la intención evasiva de la ley laboral por parte del empleador ya no se basa en la disminución de la producción, sino en el empeoramiento de la calidad de los bienes producidos, lo cual deberá conllevar indefectiblemente al cierre del centro de trabajo eximiendo al empleador, de manera aparentemente legal, del incumplimiento de sus obligaciones económicas para con sus trabajadores.

También podría comprender la figura contraria a la señalada anteriormente, puesto que el empleador efectúa una sobreproducción con relación a la demanda, con la intención de originar el cierre del centro del trabajo y no pagar sus deudas laborales.

- c) Transferencia de activos fijos a un tercero; El concepto de transferencia incluye cualquier tipo de relación jurídica

patrimonial a través de la cual se transfieren la propiedad (compra venta, donación, permuta, etc.).

De acuerdo en este caso el empleador traslada los activos de la empresa a un tercero sin cumplir debidamente con sus adeudos de carácter laboral, en este caso el empleador no recurre a una norma laboral (aparente) que lo “proteja” del fraude que pretende efectuar contra la Ley, así como tampoco oculta el real negocio jurídico (simulación propiamente dicha) que pueda encubrirse en la venta u otro tipo de negocio de los activos de la empresa, refiere Huerta Rodríguez (2003:40).

Dolorier Torres, Rivera Ugarte y Gonzáles Cevallos (2005:100) señalan, que en este supuesto no se requiere que la transferencia de activos se efectúe para la constitución de nuevas empresas, como erróneamente algunos mencionan; siendo suficiente que los activos fijos se transfieran a otra u otras empresas, constituidas.

- d) Aporte de activos para la constitución de nuevas empresas: El supuesto es similar al anterior, en este caso los activos serían mucho más fáciles de ser realizados para cumplir con el pago de las obligaciones laborales.
- e) Abandono del centro de trabajo: El abandono del centro de trabajo, que tiene como antecedente el cierre ilegal del centro de trabajo; en esta figura el empleador deja de concurrir al centro de trabajo con la intención de no asumir sus obligaciones laborales u de otra índole.

Pero estos casos son los únicos donde el empleador puede incurrir en fraude, creemos que no, más aún en un mundo tan cambiante



donde la forma de organización, administración, producción de las empresas es tan variable que la legislación laboral muchas veces queda rezagada.

Para algunos la aplicación del carácter persecutorio de los bienes del empleador en el segundo supuesto contemplado en el artículo 3 inciso b) del Decreto Legislativo 856, no bastará con demostrar la simulación o el fraude a la ley a través de cualquiera de las cinco modalidades reguladas, sino además será necesario que con ese acto fraudulento se ocasione un perjuicio al trabajador reflejado en el incumplimiento de las obligaciones para con él; es lógico, sin perjuicio no cabe hablar de daño, y sin daño no se justifica una sanción como la persecución de los bienes del negocio<sup>22</sup>.

Ante la dificultad probatoria para acreditar el fraude es que la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema (Casación N° 281-2001-Lima), señalo:

*“Sí existe extinción laboral e incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales, al verificar estos supuestos previos, la conducta injustificada del empleador prevista en el artículo 3° inciso b) será fraudulenta. Si por el contrario, se han satisfecho las exigencias laborales y no existe incumplimiento en la conducta del empleador no contendrá el elemento de fraude “...”*

Aunque abordaremos este tema con mayor profundidad. En este supuesto la norma laboral tampoco hace mención al tercero adquirente de buena fe, ni mucho menos de los sub adquirentes, lo

---

<sup>22</sup> RICARDO DOLORIER TORRES, Javier La responsabilidad solidaria en el pago de créditos laborales. Análisis y crítica jurisprudencial, Revista Dialogo con la Jurisprudencia N° 90 pagina 29 al 34.

que permite pensar que solo se exige que se compruebe el fraude del empleador, más no del adquirente del patrimonio, esto a diferencia de la acción pauliana en materia civil.

Conforme al Decreto Legislativo N° 856 fuera de los dos casos establecidos en el artículo 3-excluimos el artículo 4 dado que se refiere a la preferencia- ¿no genera una acción persecutoria? Para la norma al ser esta excepcional no habría más supuestos; sin embargo para la Corte Suprema, el derecho persecutorio sobre los bienes transferidos por el empleador debe tener una formula abierta y no taxativa, de modo que cualquier transferencia de bienes a un tercero puede ser pasible de una acción persecutoria cuando el empleador no cumple con el pago de los beneficios.

## **GRUPOS DE EMPRESAS**

La figura del grupo de empresas no cuenta con una definición expresa en nuestro orden jurídico laboral, no solo entre nosotros, sino también en parte del derecho comparado, ante lo cual debemos buscar su significado en otras áreas del derecho, la doctrina y en la jurisprudencia.

El tema de definir un grupo de empresas tiene como finalidad atribuir responsabilidad solidaria a cualquiera de las empresas que pertenecen al grupo, por lo que determinar cuando nos encontramos frente a un grupo empresarial debe ser un proceso muy riguroso, en razón que, una vez hecho esto, nos encontramos ante un “único empleador” quien responde por todas las obligaciones laborales asumidas por una o más empresas del grupo.

El grupo de empresas no es otra cosa que varias empresas jurídicamente independientes, sometidas a una estrategia general común, esto supone una serie de empresas que gozan de total autonomía interna, en uso de la cual son ellas quienes dictan o instruyen al trabajador en la forma en que

desean que el trabajo sea prestado, así como la retribución que pagaran a cambio de ese trabajo.<sup>23</sup>

De esta forma encontramos actualmente dentro de un mismo sector de la actividad económica, varias empresas que operen orientadas a satisfacer las necesidades de dicho mercado. Es decir, de esta forma buscan una mejor administración y adecuación a las necesidades del mercado, pero estas empresas del grupo estarán siempre dirigidas por una entidad matriz, la cual fija el rumbo de todas en conjunto.

El hecho de haber determinado la existencia del grupo de empresas, las empresas que lo conforman se hacen responsables solidarios o si es que mantienen su independencia, siendo el hecho que la vinculación económica no afecta su independencia jurídica y económica.

Dado la amplitud del tema queda pendiente por estudiar la posibilidad de establecer cuando se podría proyectar la responsabilidad individual de una empresa por obligaciones laborales a todo el grupo de empresas; estando que el solo hecho de poder establecer que nos encontramos frente a un grupo empresarial implica tener en cuenta una variedad de criterios como: confusión patrimonial, movimiento de trabajadores y dirección unitaria, para luego analizarlos con los datos objetivos como: Personería independiente, operaciones distintas, etc., de ahí poder determinar si la responsabilidad alcanza a todo el grupo o solo a la empresa individual frente a las obligaciones laborales todavía es un tema por resolver adecuadamente.

## **TRANSMISION DE EMPRESAS**

La transmisión de empresas puede darse de diversas maneras: por fusión, absorción, escisión, por compra de acciones, en la bolsa, de manera

---

<sup>23</sup> ARCE ORTIZ, Elmer, "El concepto jurídico de empresas en el Derecho del Trabajo. Aspectos individuales de la cuestión ". Revista Asesoría Laboral, Lima, abril 2003. Pagina 13.

pública o privada. Lo que en el fondo se busca es tener el control de la empresa, para lo cual basta que se cuente con la mayoría de acciones. Una vez hecho esto, el comprador adquiere mediante las acciones el control del activo como la responsabilidad del pasivo de la empresa, dentro de ese pasivo se encuentra las obligaciones laborales que no se pueden desatender, estando que los trabajadores se encuentran protegidos en estos casos por el principio de continuidad

### **3.4. PROCESO LABORAL PREVIO**

El artículo 4º del D. Leg. N° 856, prescribe:

*“La preferencia o prioridad también se ejerce cuando en un proceso judicial el empleador no ponga a disposición del juzgado bien o bienes libres suficientes para responder por los créditos laborales adeudados materia de demanda”.*

En los casos en que se refiere el artículo 3º de la citada norma, la prioridad se ejerce con carácter persecutorio de los bienes del empleador; es decir en estos supuestos incluso el nuevo adquiriente de los bienes del empleador en todo caso deberá asumir la deuda laboral de su vendedor (empleador deudor) de lo contrario se vera afectado en el bien adquirido.

Pero en este artículo la preferencia o prioridad de los créditos laborales se ejerce, sin carácter persecutorio de los bienes de la empresa, siempre y cuando previamente al empleador se le haya requerido que señale bienes libres suficientes para responder por los créditos laborales adeudados, materia de demanda.

Para Zavaleta Rodríguez (2005: 96 s.s.), la exigencia de demostrar que el empleador ha incumplido con señalar bienes libres de gravamen, pese al requerimiento judicial, cautela que el trabajador no obstaculice el pago oportuno o la prioridad en el pago de los créditos de otros acreedores a través del inicio de un proceso de tercería, sin que siquiera haya agotado la

posibilidad de verificar la existencia de otros bienes que puedan ser afectados en el mismo proceso laboral. Por ello el incumplimiento de este requisito implica la manifiesta **carencia de interés para obrar** del tercerista, razón por la cual debe de declararse improcedente la demanda, de acuerdo con el artículo 427, inciso 2 del Código Procesal Civil; así comenta

En este supuesto para la procedencia de la demanda de tercería de derecho preferente, el trabajador debe acreditar el incumplimiento del empleador del mandato judicial expedido en el proceso laboral, mediante el cual se le requirió para que señale bienes libres de gravamen.

Montoya Mendoza (2004:23) refiere que la norma evidentemente lo que pretendió fue limitar el ejercicio de la preferencia laboral al supuesto en que el trabajador debía previamente entablar demanda contra su empleador, y, luego de ello, requerirlo a través del proceso laboral para que presente bienes libres que respondan por sus créditos laborales, bajo apercibimiento de hacer uso del carácter privilegiado.

Haciendo una interpretación literal de la citada norma, también podemos afirmar que no necesariamente tiene que haber un requerimiento previo al empleador dentro del proceso laboral para que señale bienes libres; puesto que bastaría que se entable un proceso laboral y este sólo hecho sea suficiente para que se vea obligado el empleador en poner a disposición del juzgado bienes libres de todo gravamen y de esta forma podría no ser procedente una futura demanda de tercería; sin embargo existe resoluciones de algunos órganos jurisdiccionales que interpretan la norma en el sentido de que es *el trabajador el que tiene que acreditar haber **requerido** a su empleador para que señala bienes libres que garanticen el pago de los créditos laborales que sustentan su pretensión* (véase Casaciones N° 1218-2003-Chimbote), así la carga de probar que el empleador tiene otros bienes con que garantizar la deuda laboral la han

transferido erróneamente al trabajador; cuando en todo caso tendría que acreditar el empleador deudor o el otro acreedor, más le corresponde al trabajador quien desconoce de su existencia.

Dependiendo mucho de la posición que tengamos sobre el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución, en cuanto sí es de carácter programático o auto aplicativa, dependerá si dicha norma es o no incompatible con la constitución; situación que como veremos más adelante para las Salas de la Corte Suprema se encuentra claramente precisada que es una norma autoaplicativa en tanto que la Constitución no establece límites o condiciones para la aplicación y extensión del privilegio salarial a determinados supuestos; además de entrar en contradicción con el artículo segundo de la misma ley, como lo hemos anotado anteriormente.

## **SUB - CAPITULO 4**

### **LA PREFERENCIA Y LA PERSECUCION SON DISTINTAS O SE COMPLEMENTAN**

#### **4.1. LA PREFERENCIA Y PERSECUCIÓN**

El Decreto Legislativo N° 856 emplea indistintamente el término preferencia o prioridad para referirse a lo mismo, en ello no hay discusión; es decir frente a cualquier otra obligación del empleador se debe pagar primero al trabajador.

Por la persecutoriedad debemos entender, a decir de Avalos Jara y Llontop Cassina (2006:263 ss.), es el beneficio de cobro que tienen los trabajadores sobre el patrimonio del deudor, el cual se extiende, en algunos casos, incluso, sobre los bienes que ya no pertenecen al empleador pero que pertenecían al momento de contraer la deuda, siempre y cuando se acredite la existencia de fraude.

Sin embargo, no podemos referirnos a la persecución de los bienes del empleador contemplado en el artículo 3º de la Ley, sin antes hacer mención a lo señalado en el artículo 2 cuando refiere que los bienes del empleador se encuentran afectos al pago íntegro de los créditos laborales, ello nos quiere decir que están garantizando que con esos bienes se pagarán las deudas laborales pendientes a los trabajadores.

Para algunos, entre ellos, Montoya Mendoza (2005:53), son dos cosas muy diferentes el “derecho preferente” y el “derecho a la persecución”, por lo que no existe mayor colisión entre el “privilegio” absoluto a nivel constitucional y la “persecutoriedad” limitada a nivel legal; por ello señalan que la Corte Suprema no ha realizado el mayor estudio de estas cuestiones

conceptuales, así concuerdan Zavaleta Rodríguez; Avalos jara; Mesinas Montero y Morales Corrales.

Señalan que al establecer el carácter persecutorio a favor de los créditos laborales, lo que esta haciendo la norma es agregar un derecho a favor del trabajador no previsto constitucionalmente; es decir, constitucionalmente los créditos laborales solo tienen derecho a un privilegio en el cobro en caso de concurrencia de acreedores, sin embargo, a nivel legal, además, dichos créditos cuentan con efecto persecutorio del negocio del empleador-deudor, siempre y cuando se den los requisitos que establece la correspondiente ley. Por tanto, la persecución es un derecho que, a nivel legal, se adiciona o se anexa al privilegio absoluto del crédito laboral, que está a nivel constitucional, y de allí que no pueda existir colisión entre ambas normas.

Agregan que la confusión proviene de la propia norma que desarrolla la prioridad del crédito laboral que se refiere la Constitución, al decir que esa preferencia se **“ejerce”** con carácter persecutorio en tales casos.

Por último se indica que La preferencia de cobro de derechos laborales alcanza sólo a los acreedores del deudor y, por tanto, no puede perjudicar al adquirente de buena fe y menos al que registro su bien, pues este no sería un “acreedor”<sup>24</sup>, debemos colegir por tanto que ya no hablamos que el adquirente de buena fe tenga el titulo de acreedor sino de “comprador” y por ende, ya no seria aplicable la preferencia del crédito laboral al no haber concurrencia de acreedores.

---

<sup>24</sup> Mesinas Montero, (2009:51 ss.), señala que se desnaturaliza la preferencia del crédito laboral, al aplicarla frente al tercero adquirente de buena fe, como si se tratase de un mecanismo de oponibilidad real y que lleva al adquirente a perder lo adquirido.



#### **4.2. PREFERENCIA Y PERSECUCIÓN NO SON DESLIGABLES**

Para la justicia laboral Peruana, antes de la vigencia del Decreto Legislativo N° 856, como lo señaló Morales Corrales, aplicaban la preferencia ligándola a la persecución de los bienes del empleador; teniendo como fundamentos: la despersonalización del empleador, la prioridad en el pago del trabajador y la irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Entonces habría que repreguntarse ¿Por que el Ejecutivo vía Decreto Legislativo busco establecer el contenido y alcance de la preferencia de los créditos laborales regulando los únicos casos de persecución de los bienes del empleador?; persecución que en todo caso no tendría que haberse incorporado puesto que solo se trataba de regular la preferencia del crédito laboral, pero como hemos indicado anteriormente la Ley N° 15485 establecía la persecución de los bienes del empleador en caso de existir un crédito laboral pendiente de pago teniendo el carácter de “superprivilegio” puesto que doctrinariamente ambos términos están muy vinculados entre sí, siendo muy poco consistente en la práctica que el trabajador sólo tenga el derecho de preferencia sobre los bienes del empleador sin que pueda perseguirlos, por los fundamentos ya expuestos; es por ello, que la preferencia y persecución, son instituciones que están tan ligadas o complementadas que no se puedan separar o en todo caso son consecuencias una de otra o su extensión.

Al respecto Toyama Miyagusuku (2005:185 ss.), indica que el derecho de persecutoriedad es consecuencia del privilegio salarial de los créditos laborales, lo cual significa que dicho derecho es una manifestación del derecho constitucional del súper privilegio del crédito laboral.

Se sostiene que la persecución de los bienes del empleador es un término relativamente nuevo en nuestro ordenamiento laboral, puesto que recién

podemos hablar del carácter persecutorio de los bienes del empleador con la Ley N° 15485; que data de 1960; pero no olvidemos que nuestra disciplina no tiene muchos años de formación en nuestro país, basta decir que el Código Civil de 1924, regulaba el Contrato de Trabajo como una las forma contractuales de carácter civil; además no podemos dejar de mencionar que la Ley 4916 del 07-02-1924 y especialmente su Reglamento aprobado por Resolución Suprema del 22 de Junio de 1928, en su artículo 49° señalaba que en caso de venta, fusión de negocios, traspaso o cambio de giro del negocio, conservarán los empleados todos los derechos que la ley les acuerda y no podrán ser despedidos; agregando el artículo 69° que en caso de fusión de negocios o transferencias de una principal a otro, el nuevo patrón calculara para efectos de la ley como servicios prestados al antiguo principal(...); normas estas últimas que si bien nos hablaban de la despersonalización del empleador pero nos recuerda el carácter protector del derecho laboral a fin de no verse afectado en sus beneficios sociales.

Ambos términos: prioridad y persecución; han estado muy vinculados o interrelacionados en nuestra legislación laboral como en las resoluciones expedidas por los órganos judiciales, tanto que podemos decir también que pierden independencia como sucede con muchas instituciones del derecho que se emplean indistintamente. En tal sentido viene a colación lo señalado por Rubio Correa (2005:241); así sucede cuando el Tribunal Constitucional emplea el término razonabilidad y la proporcionalidad y, por ello, es difícil obtener una definición precisa y un criterio de aplicación certero de ambos principios a partir de las sentencias, probablemente estos principios pasarán a ser inseparables y terminarán significando conjuntamente la misma cosa, como ha llegado a ocurrir con “necesidad y utilidad pública” o “caso fortuito y fuerza mayor”, entre otros. Cada uno de estos conceptos tuvo un significado propio, pero la costumbre de mencionarlos siempre en pares ha determinado que pierdan sus bordes conceptuales dentro de cada par.

El carácter persecutorio de los créditos laborales se enmarca en dos conceptos previos: la irrenunciabilidad y su carácter preferente o prioritario; así se ha pronunciado la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema en la Casación N° 128-2001 donde define los presupuestos bajo los cuales opera la persecutoriedad de los beneficios sociales, al señalar: “Que la acción persecutoria de los beneficios se enmarca necesariamente a partir de dos presupuestos (i) la irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores, (ii) su abono con carácter prioritario. Que estos dos presupuestos dan fundamento o fuerza a la acción persecutoria tendiente al cobro de las acreencias laborales”.

Hay que anotar, sin embargo, que la invocación al principio de irrenunciabilidad de derechos, prohíbe precisamente que los actos de disposición del titular de un derecho recaigan sobre derechos originados en normas imperativas, y sanciona con la invalidez la trasgresión de esta regla, como señala Neves Mujica (2000:103); así la irrenunciabilidad solamente será procedente si existe un acto de disposición del trabajador con relación al cobro de sus beneficios sociales o al derecho persecutorio mismo, de tal suerte que, en ambos casos, se considera nulo el respectivo acto de disposición del trabajador, aunque esto último en la práctica es poco probable.

De lo contrario no podemos invocar el principio de irrenunciabilidad, cuando nos referimos al carácter persecutorio de los créditos laborales, por ello creemos que el presupuesto de la persecutoriedad tiene como fundamento y descansa sobre todo en la preferencia de los créditos laborales, puesto que la figura de la renuncia a la persecutoriedad es muy poco factible que se de bajo los términos antes mencionados.

Sucede que muchos de los que sostienen que el carácter persecutorio no tiene rango constitucional sino legal; hacen una interpretación de la Constitución a partir del Decreto Legislativo N° 856, porque según refieren

la norma legal señala textualmente que precisa los alcances y prioridad de los créditos laborales, en tal sentido que cualquier interpretación que hagamos de la norma Constitucional debe de tener como referente el marco legal establecido; criterio interpretativo que como veremos más adelante no es compartido no sólo por la Justicia Ordinaria ni Constitucional sino sobre todo por un gran parte de la Doctrina, la cual hace una interpretación teniendo como punto de partida la propia Constitución.

En la practica o en la realidad mejor dicho, muy poco le valdría al trabajador tener una preferencia de sus créditos laborales ante las muchas maniobras que puede utilizar su empleador para evadir el pago de los beneficios sociales de ser el caso, sino tuviera como complemento u extensión la persecución de sus bienes ¿Que se le debe establecer límites de tiempo y monto? Ello es otro tema muy distinto que en todo caso también merece ser materia de comentario.

#### **4.3. RANGO Y LÍMITES A LOS CREDITOS LABORALES**

##### **EL RANGO: SUPERPRIVILEGIO**

El rango inferior del crédito de los trabajadores con respecto a otros créditos, o su concurrencia respecto de otros, limitaría por cierto, y de una manera considerable sus posibilidades de cobro.

Por ese motivo la legislación de ciertos números de países ha conferido al crédito salarial (o a una fracción de éste) una protección especial, la que según los casos es oponible no sólo a otros acreedores dotados de privilegios generales, sino inclusive de privilegios especiales, y aún de prendas o hipotecas. Se trata del llamado “*superprivilegio*” que según indica Lasarte (2001. 58) “que son preferencias de carácter general, en

cuanto no recaen sobre bienes concretos, pero que se imponen sobre cualquiera de otras preferencias, incluso preferencias especiales, frente al criterio general que pospone siempre la preferencia general a las especiales en relación al valor del bien concreto sobre que éstas recaen” ; pero esta institución atípica dentro de los sistemas de los privilegios, cuya razón de ser solamente se puede fundar en la naturaleza, también particular, de los créditos laborales que tiende a proteger.

### **LEGISLACION COMPARADA**

La protección de los créditos laborales mediante un “súper privilegio” ha sido consagrada en los países, España y Francia, en el continente Europeo, y Brasil, Ecuador, México y Perú, en América Latina, además de Filipinas. Probablemente el primer país que lo regulo fue México, en la fracción XXIII del artículo 123 de la Constitución de 1917. El Súper privilegio en España ha sido introducido por el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 32, y en Ecuador por el Código del Trabajo, en su artículo 87, mientras que en el Perú tiene sustento Constitucional.

Distintas formulas han sido adoptadas en los diferentes países en lo concerniente al alcance del súper privilegio. Un primer enfoque lo considera como un “privilegio en el interior de otro privilegio “, por lo que queda limitada a una “fracción de fracción” del crédito del trabajador cubierto por el privilegio. Esta solución prevalece en España y Francia. Así, en España la fracción súper privilegiada del crédito laboral está limitada a los salarios de los últimos 30 días de trabajo, a concurrencia de un tope igual al doble del salario mínimo interprofesional. En Francia dicha fracción comprende los salarios de los últimos sesenta días de trabajo, más la indemnización por vacaciones no gozadas a la que agrega eventualmente la indemnización sustitutiva de preaviso.

Un segundo enfoque, que se pudiera llamar “del todo o nada” es el de la Ley Federal de Trabajo, de México, en que el crédito laboral, hasta concurrencia de los doce últimos meses de trabajo (además de las indemnizaciones, sin limitación), está protegida por un súper privilegio, mientras que los créditos no cubiertos por el súper privilegio son simplemente quirografarios.

El tercer enfoque, en Brasil, Ecuador y Perú, consiste en conferir el súper privilegio a la totalidad del crédito laboral, sin limitación de naturaleza del crédito, de fecha o de monto.

A menudo, la protección no ampara a la totalidad de los créditos del trabajador, sino a una fracción de estos, hasta concurrencia de un determinado tope, el que se puede expresar de dos maneras. La primera consiste en que el privilegio se limita a un determinado periodo de servicios, anteriores a la apertura del concurso, por ejemplo dos meses en la India, tres en los Estados Unidos y Canadá, cuatro en el Reino Unido y Trinidad y Tobago, seis en Francia, Portugal, Suiza y Uruguay, doce meses en México. La segunda esta representado por un tope en dinero, por ejemplo, \$ 2,00.00 en los Estados Unidos. CS 500 en Canadá, 300 francos en Bélgica. En otros países dichos topes no se expresa en un tope salarial sino que se fija en relación al salario mínimo interprofesional, de esta forma la suma protegida no corre el riesgo de desvalorizarse debido a la inflación.

### **CONNIVENCIA DEL TRABAJADOR CON EL EMPLEADOR**

Otros de los cuestionamientos a la preferencia de los créditos laborales frente a la hipoteca, señalando una serie de argumentos pasando por lo económico hasta lo jurídico; sostienen que se vienen suscitando una gran magnitud de conflictos en donde, por ejemplo, cuando una entidad financiera está en plena ejecución de una garantía real, se presenta una tercería preferente de pago

interpuesta por un trabajador de la empresa ejecutada, quien invocando el privilegio laboral y su carácter persecutorio solicita cobrarse con el producto de la ejecución iniciada por la entidad financiera, con lo que al declararse fundada la tercería laboral, la garantía real queda ineficaz, y por tanto la entidad financiera pierde el respaldo de crédito.

Ahora, las tercerías preferentes de pago son solo uno de los ejemplos de cómo se pueden perjudicar en la práctica los procesos de ejecución de garantías reales y por ende de la eficacia misma de esta garantía. Aunque a decir verdad, la praxis judicial ha dado cuenta de otras formas de interferencias en las ejecuciones de garantías reales. Así tenemos el caso en que el Juez Laboral que tramita el proceso de un trabajador contra su empleador y oficia al juez civil que conoce del proceso de ejecución de garantías contra ese mismo empleador, informándole de la existencia del juicio laboral para que así el juez civil reserve el producto de la ejecución para el posterior pago del crédito laboral. Otro caso, es el de los trabajadores que siguen juicio laboral a su empleador y en dicho juicio solicitan embargo sobre los bienes de propiedad de la entidad financiera que previamente habían sido adquiridos al empleador mediante adjudicación en proceso de ejecución de garantías reales, daciones en pago otorgadas por el empleador o en adjudicaciones dispuestas en procesos concursales.

También se indica que en los procedimientos concursales, algunos acreedores inesperadamente aparecen con montos muy altos, los propios gerentes, directivos u otras personas allegadas al control de la empresa concursada, aparecen con reconocimiento de montos voluminosos, que en buena cuenta distorsionan el propio el fundamento de los créditos laborales, rebalsando de manera evidente su “límite alimentario”, llegando a constituirse verdaderas

utilidades o ventajas sospechosas, fomentando de esta manera el fraude, además de involucrar conductas delictuosas, al tenerse que utilizar documentación falsa, que no refleja la realidad.

En los ejemplos mencionados se habla del muchas veces de la connivencia entre el trabajador y el empleador para sacar o imposibilitar el cobro por parte del ejecutante, llegando a señalar que existe un acuerdo entre el trabajador y su empleador para simular deudas de carácter laboral con la única finalidad de desplazar a la entidad bancaria o ejecutante en el cobro; pero no dicen nada respecto del empleador que con la finalidad de eludir sus obligaciones laborales puede simular haber efectuado préstamos con garantías hipotecarias que en la realidad no han existido, ello con la finalidad de eludir de desplazar a los trabajadores en el pago, de otorgarse a las garantías reales preferencia como propone EZCURRA RIVERO Huáscar<sup>25</sup>.

De no darse preferencia a los créditos laborales frente a otras obligaciones del empleador incluidas las garantías reales, tendríamos más casos donde el trabajador se vería casi imposible cobrar sus acreencias laborales con graves consecuencias sociales.

Siendo que muchos de los créditos laborales son reconocidos vía conciliación, tanto ante la Autoridad Administrativa de Trabajo como ante los Órganos Jurisdiccionales, donde se reconocen adeudos laborales, sin que exista realmente ninguna documentación o indicios de que haya existido una relación de carácter laboral entre las partes; por ello, resulta necesario que se muestren escépticos o tengan plena facultad para solicitar medios de prueba de ser el caso que corrobore los acuerdos en que piensan llegar las partes, a fin de

---

<sup>25</sup> "Derecho Concursal "Palestra Editores. 1ra. Edición 2002. Paginas 163 y siguientes.



evitar un abuso de derecho, simulación o fraude, debiendo facultárseles expresamente el poder remitir copias al Ministerio Público, para la denuncia correspondiente de ser el caso para de esta forma persuadir ha que se cometan conductas delictivas.

Aunque cuando se encuentran los Magistrados frente a un proceso de ejecución, donde se acompañan dichos acuerdos celebrados en sede administrativa la capacidad de solicitar pruebas que acrediten la relación laboral o el monto adeudado resulta limitada por la naturaleza del proceso de ejecución.

Tampoco podemos dejar de mencionar que la gran informalidad en que se llevan a cabo las relaciones laborales, así como la gran corrida que se viene produciendo del derecho laboral a otras áreas como el comercial, civil, Marketing, etc.; hace que se encubran relaciones que tienen los elementos propios del contrato de trabajo, teniendo el trabajador que demandar el pago de sus beneficios sociales al termino de la relación que lo vinculaba a su empleador, de ahí que cuando se produce la insolvencia del empleador se les adeude el pago de todos sus beneficios sociales; situación que no se presentaría o se reduciría con la oportuna intervención de los Inspectores de trabajo.

### **¿SE DEBE PONER LÍMITES A LOS CRÉDITOS LABORALES?**

Sobre este punto se han publicado diversos argumentos con el objeto de ofrecer una explicación. Por ejemplo, se ha dicho que la protección debe amparar a la fracción alimenticia del crédito salarial, y por consiguiente tiende a garantizar únicamente el cobro de las sumas verdaderamente indispensables para que el trabajador pueda subsistir. Otro argumento ha hecho hincapié que el procedimiento concursal, además de los trabajadores, hay también otros acreedores cuyo crédito merecen

igualmente consideración y que corren el riesgo de sufrir mayores perjuicios cuanto mayor sea la porción del crédito de los trabajadores protegida por un privilegio. Un tercer argumento puntualiza que tanto en el derecho civil como el de quiebras, los privilegios no son el principio sino la excepción, y que por consiguiente se les tiene que considerar con criterio restrictivo.

La susodicha limitación nos parece injusta, puesto que ignora que si bien en la quiebra algunos acreedores llegarán a cobrar su crédito es porque ha habido trabajadores que han hecho producir a la empresa. La injusticia es aún mayor cuando se observa que la limitación no existe con respecto de otros créditos privilegiados, como los del fisco o la Seguridad Social, y ya pudiera considerarse como doloroso cuando se advierte que otros acreedores (como los bancos) no corren ningún riesgo, porque sus créditos se encuentran suficientemente garantizados con fianzas personales o garantías reales, que ningún trabajador está en condiciones de poder exigir de su patrón. Señalamos que en algunos países como: Brasil, Italia, Panamá y el Perú, no se establece limitación alguna a los créditos laborales protegidos por el privilegio; así lo ha mencionado Bronstein (año :173 ss.).

Entonces al establecerle límites a los créditos laborales en cuanto al tiempo que debe abarcar las deudas laborales sea por el último año, seis meses o menos; así como considerar tan sólo determinados beneficios sociales y hasta un monto específico el cual podría comprender algunas remuneraciones con un tope máximo; con ello estaríamos haciendo un trato diferenciado que otros créditos cuya naturaleza distinta a la laboral no contemplan, sin considerar además que en nuestro país existe un **gran informalidad** en las relaciones laborales situación que se agrava con el constante incumplimiento de las normas laborales, así como por la falta de Inspectores de Trabajo, cuya función es justamente cautelar su cumplimiento.

Además, sí con poner límites a los créditos laborales en cuanto a montos o tiempo buscando con ello que surjan créditos simulados o ficticios con montos altos, podríamos conseguir una dispersión de créditos pequeños igualmente simulados o fraudulentos de créditos pequeños, afectando de igual forma a los otros acreedores no privilegiados con un crédito laboral.

## SUB - CAPITULO 5

### LOS CREDITOS LABORALES CONTRA LA GARANTIA HIPOTECARIA

#### 5.2. GARANTIAS Y CLASES

Antes de pasar a ver lo referente al crédito hipotecario, resulta necesario tener previamente un concepto de garantía. Así, se dice que es el medio de reforzar el derecho del acreedor en la hipótesis que el deudor no cumpla con la prestación por él debida. Garantizar significa asegurar el cumplimiento de una obligación, de lo que se desprende dos observaciones: **no toda obligación tiene que ser garantizada**, pues hay muchas obligaciones que no son respaldadas por una garantía específica y, en segundo término, es derecho accesorio a uno principal, puesto que lo principal es la obligación y la garantía sólo tiene existencia para asegurar el cumplimiento de ésta. Las obligaciones que no tienen garantía específica no están desamparadas, pues todo el patrimonio del deudor es prenda del acreedor, salvo los bienes inembargables.

Existen tres clases de garantía: a) Privilegios, que son preferencias, de orden y fuente exclusivamente legal, para ser pagadas antes de los demás acreedores, en razón de la naturaleza de sus créditos; b) Garantías Personales, por los cuales una persona es la que se obliga a pagar la obligación de su garantizado, en caso de incumplimiento de éste, ejemplo: la fianza; C) Garantías reales, por las cuales se asegura una obligación, afectando un bien determinado a su cumplimiento.

Lo normal y deseable es que todos los acreedores puedan cobrar la totalidad de sus acreencias, pero lamentablemente no es el caso, la ley establece una prelación entre ellos a saber; a) Los acreedores privilegiados, es decir los que por ley expresa pueden cobrar antes, tal, los sueldos y beneficios sociales impagos, los impuestos adeudados, los

gastos de los funerales y los gastos de justicia; b) Los acreedores preferenciales, que son quienes tienen un derecho real emanado de un contrato, como los acreedores hipotecarios, los prendarios y los anticréticos, los que cobran sus acreencias del producto del respectivo remate del bien afectado en garantía real; c) los quirografarios o comunes, quienes no tiene preferencia ni legal ni contractual, los mismos que deberán ser pagados, a prorrata del saldo que resulte del pago de las dos especies de acreedores citados.

Maisch Von Humboldt (1984: 121 ss.), en su libro “Los Derechos Reales” nos habla ya del privilegio de los créditos laborales, libro desarrollado en concordancia con la Constitución de 1979, que ya establecía dicho privilegio y mucho antes de la vigencia del Decreto Legislativo N° 856.

El fenómeno de la persecutoriedad es una de las características asignadas sobre todo a las garantías reales, las que mediante la afectación pública de determinado bien, admite la posibilidad de “perseguirlos”, es decir que la garantía puede hacerse valer no importando si el deudor u otra persona es la que actualmente se encuentra en posesión o propiedad del bien. La persecutoriedad pues, permite considerar como inoponibles o ineficaces, frente al acreedor garantizado, los actos de disposición que sobre el respectivo bien haya realizado el deudor.

Al respecto resulta importante lo señalado por la Doctora Humbolt cuando refiere a la facultad que tiene el acreedor hipotecario de perseguir una cosa inmueble sea cual fuere su poseedor; “(...) es la más importante facultad del acreedor hipotecario, pues sin ella no podría **efectivizar su derecho de preferencia**”; de ahí, como ya lo hemos indicado anteriormente no podemos separar la preferencia de la persecución puesto que ambos se encuentran muy ligados uno de otro, conforme lo hemos anotado anteriormente, lo que nos lleva a decir que no puede existir una garantía hipotecaria, sin que el acreedor hipotecario tenga la facultad de perseguir

el bien inmueble sea cual fuere su poseedor. En ese orden de ideas la preferencia del crédito laboral nos trae como correlato a la persecución de los bienes del empleador.

El artículo 1097 del Código Civil, establece que por la Hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier otra obligación, propia o de un tercero. Nótese que también se emplea el término “**afecta**” al igual que en artículo 2 del Decreto Legislativo 856 “.... Los bienes de éste se encuentran **afectos** al pago del íntegro de los créditos laborales adeudados...”.

## LA HIPOTECA

La propiedad es un derecho real que vincula una cosa con una persona, quien goza de los atributos clásicos que aún se le reconoce y del que se derivan como desmembraciones todos los otros derecho reales, siendo uno de estos el de la hipoteca.

Modernamente la hipoteca se puede definir como “derecho real registral de garantía concreta, en cosa inmueble determinada, cuya posesión conserva el propietario y que faculta al titular a exigir, si no se cumple la obligación garantizada, la venta publica de aquella, resarciéndose con su precio”<sup>26</sup>.

Entre sus principales características podemos mencionar: a) es un derecho real, pues se establece un vínculo entre el acreedor y el inmueble hipotecado, con prescindencia de su propietario; b) Es un derecho registral, porque nace cuando se inscribe. La inscripción en este caso es **constitutiva**, c) es de garantía concreta, porque respalda una obligación determinada o determinable; d) es normalmente accesorio, la excepción lo constituye la auto hipoteca en nuestra legislación; y d) registralmente, es inseparable de la cosa gravada, pues sujeta directamente el bien sobre el

---

<sup>26</sup> Ignacio de Casso, Madrid, 1951, Pagina 588, citado en la Revista Oficial del Poder Judicial 1/1 2007. Lima Perú, 47 al 66.

cual recae, aún cuando cambie de propietario, siendo publica, ya que es necesario su inscripción en el Registro Público.

Al respecto resulta importante señalar lo manifestado Beltran Pacheco (2006:pag. 112) “Si bien es cierto el derecho de hipoteca tiene carácter real, no es cierto que la pretensión de ejecución de garantía reales tenga naturaleza real como de modo equivoco se establece en la jurisprudencia nacional, puesto que “la ejecución de la garantía hipotecaria” tiene por fundamento permitir la satisfacción del crédito, es decir, la ejecución de la prestación, por lo que es una “pretensión personal”.

En la práctica diaria sucede que en una hipoteca se constituye para asegurar el cumplimiento de obligaciones personales, de tal manera que si se ejecuta la garantía y su valor no cubre la deuda, el acreedor siempre tendrá la acción personal contra su deudor por el saldo no cubierto.

Esto se corrobora con lo establecido en el artículo 724 del Código Procesal Civil, ejercitada la acción real, si el remate del bien no cubre la deuda, el acreedor tiene todavía una acción personal para cobrar su acreencia.

#### **NO TODA GARANTIA REAL CUENTA CON SIGNO DE RECOGNOCIBILIDAD.**

En efecto, se sostiene que aparte de las características de los derechos reales de garantía expuesto por la sala, existen otras no menos importantes que se desprende de un estudio sistemático de las normas del Código Civil (artículos 1055 a 1131) entre las cuales destaca el hecho de que toda garantía real debe contar con un signo de reconocibilidad que la haga en cierto modo pública y, por tanto, oponible a terceros.

No es casualidad pues, que nuestro Código Civil haya establecido para los cuatro derechos reales de garantía que regula, algún signo de reconocibilidad.

Así tenemos, en el caso de la prenda con entrega física es la posesión de la cosa adquirida mediante la tradición (artículo 1055); la prenda con entrega jurídica, el signo sería la publicidad lograda a través de su inscripción en el registro (artículo 1059º); En el caso de la anticresis se considera los mismo signos que los de la prenda (artículo 1096º). En el caso de la hipoteca el signo es la publicidad lograda a través de su inscripción en los registros (artículo 1099), y en el caso del derecho de retención el signo es la posesión (artículo 1123), refiere Montoya Mendoza , (2004.a:21 ss.).

Por ello la característica innata de todo derecho real de garantía sea el hecho de que tenga algún signo de **reconocibilidad**, que la haga pública, lo que resulta importante en la medida en que no se puede exigir el respeto de una garantía real si no está en la posibilidad de poder saber de ella de manera relativamente sencilla; en tal sentido, el carácter persecutorio a favor de los acreedores laborales no es absoluto y por tanto se dice que no se puede hacer valer indiscriminadamente frente a terceros adquirientes, a diferencia de los derechos reales de garantía donde la persecución es absoluta.

Situación muy diferente a las garantías reales sucede con los créditos laborales, los cuales permanecen ocultos sin que los terceros adquirientes de los bienes del empleador puedan, a bajo costos, tomar conocimiento de la existencia de los mismos, y en su caso evaluar la posible afectación de su adquisición. Esta falta de signo de reconocibilidad si bien es peligrosa, sin embargo, es una diferencia más que distingue el carácter persecutorio del crédito laboral de la garantía real del Código Civil.



Al respecto debemos señalar que si bien existe alguno signo de reconocibilidad en las garantías reales, pero este no siempre se da en todos los casos como se afirma, cabría preguntarse ¿Cuál es el signo de reconocibilidad de la prenda física? Que mejor que un caso de tercería de propiedad donde se solicita que se suspenda la medida cautelar sobre un vehiculo adquirido mediante contrato de compra venta (10.12.99) con firmas certificadas ante Notario, pero que no se Registro; siendo objeto de de la medida cautelar ( enero .2000), que fue registrada ha raíz de una deuda de su vendedor; la Corte Suprema, resolvió de conformidad con el artículo 2022 al enfrentarse dos derechos de distinta naturaleza, el real y el personal; lo que supone una excepción al **principio de prioridad en el rango** del artículo 2016 del Código Civil, recurriendo al derecho común , la preferencia se determina sólo por la certeza y la fecha en que se constituye los derechos sin referencia a la fecha de la inscripción registral, en tal sentido se fallo a favor del tercerista que no tenía su derecho de propiedad inscrito<sup>27</sup>.

Lo que queremos resaltar es que no podemos afirmar como señalan algunos, que toda garantía tiene un signo de reconocibilidad como se afirma y que el hecho de registrar algún acto no necesariamente te asegura el derecho; siendo que en el caso de la transferencia de propiedad de un mueble, esta se perfecciona con la tradición, por lo que la inscripción ante los Registros Públicos no tiene efectos Constitutivos, sirviendo para darle formalidad y perfeccionamiento para así adelante oponerlos a terceros; por tanto, podemos colegir que en la prenda física los terceros no cuentan en realidad con algún signo de reconocibilidad que les acredite que su deudor sea realmente propietario del bien que da en prenda.

La prenda Jurídica como lo establece nuestro Código Civil, si tiene un signo de reconocibilidad - entregado jurídicamente el bien al acreedor cuando

---

<sup>27</sup> Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la República, Año judicial 2005 Tomo XCIV Publicación Oficial, Lima-Perú, 237-241.

queda en poder del deudor, surtiendo efecto desde su inscripción en el registro respectivo, pero como hemos señalado el hecho de Registrar algún derecho no le asegura la propiedad o preferencia sobre el mismo, menos tratándose de transferencia de propiedad de bienes muebles e inmuebles al ser la inscripción declarativa más no constitutiva del derecho de propiedad.

Aunque al expedirse la nueva Ley N° 28677 “Ley de la Garantía Mobiliaria” se han derogado los artículos 1055 al 1090 del Código Civil. Es decir todo lo referente a la Garantía Prendaria<sup>28</sup>, pero en el fondo se mantiene la existencia de una prenda con entrega física o real y la jurídica o sin desposesión, sin desplazamiento del bien mueble.

No podemos negar que efectivamente el crédito laboral carece de esa publicidad que tienen las garantías reales- hemos visto que no siempre es así-; pero este argumento realmente puede ser el sustento para no otorgarle la preferencia al crédito laboral ante una garantía real y menos frente a una transferencia efectuada a un tercero, que es la forma más recurrida para evadir el pago de los beneficios sociales por parte del empleador-, más aún, en un país como el nuestro donde la transferencia de propiedad que es el derecho real por excelencia su inscripción en el registro no es constitutiva ..

Ahora pasaremos a ver que tan relevante sería que el crédito laboral cuente con un signo de reconocibilidad como sería su inscripción en los registros públicos.

---

<sup>28</sup> Artículo 3° “La garantía mobiliaria es la afectación de un bien mueble mediante un acto jurídico, destinada a asegurar el cumplimiento de un obligación. La garantía mobiliaria puede darse con o sin desposesión del bien mueble. En caso de desposesión, puede pactarse la entrega del bien mueble afectado en garantía al acreedor garantizado o a un tercero depositario”.

## **EL CREDITO LABORAL FRENTE AL DERECHO REAL**

La distinción comienza en el derecho Romano, a partir de la clasificación de las acciones según Las Instituciones: 1) La acción es personal cuando lo ejercitamos contra alguno que está obligado por razón de un contrato o de un delito, esto es, cuando sostenemos en juicio que una persona está obligada a dar, hacer o prestar una cosa. 2) Y es real la acción cuando pretendemos que una cosa corporal nos pertenece, o que nos compete alguna servidumbre como la de uso, usufructo, etc. Siendo las acciones reales absolutas en tanto se podían dirigir contra cualquier persona que tenía el bien; mientras las personales serían relativas pues tenían un destinatario determinado.

Merino Acuña (2006:177), señala que el problema quizá en las Teorías que tratan de diferenciar ambas instituciones se debe a la poca evolución dogmática que había al momento en que fueron elaboradas. El derecho real y el derecho de crédito no son pues las únicas situaciones jurídicas y las únicas instituciones de derecho privado.

En cuanto al derecho común nació como concepto en la edad media y estaba referido a la aplicación del derecho romano a los ordenamientos particulares. Así el derecho común era un derecho residual que se aplicaba a todas las relaciones, salvo las derogaciones constituidas por cualquier ley particular. Además las normas de derecho común en todo caso, no se ocupan de otorgar preferencia a un derecho sobre otro, siendo necesario desechar el segundo párrafo del artículo 2022 para resolver el problema planteado.

Ante ello se sostiene que la interpretación del artículo 2022 del Código Civil, debería ser que cuando se contraponen dos situaciones jurídicas sobre un mismo bien, debe de prevalecer aquella primeramente inscrita de buena fe, sea cual fuere su naturaleza jurídica.

Hemos creído necesario haber abordado esta parte concerniente a la aplicación e interpretación del artículo 2022 del Código Civil, para poder demostrar que en nuestro ordenamiento el hecho de registrar algún acto no necesariamente asegura el derecho, como vemos se presentan situaciones en nuestro ordenamiento donde los principios de buena fe pública registral, prioridad Registral, entre otros, quedan de lado cuando se trata de transferencias de propiedad aunque no estén inscritas, que mayor inseguridad jurídica si lo comparamos con los créditos laborales a los cuales le imputamos su falta de reconocibilidad como causante de la inseguridad jurídica..

## **SUB - CAPITULO 6**

### **LA PERSECUTORIEDAD LABORAL VERSUS LA ACCION PAULINA**

#### **6.1. LA ACCION PAULIANA O REVOCATORIA**

A decir de Torres Vásquez (1998:495), la acción pauliana, conocida también como restitutoria o de ineficacia, puede ser definida como el derecho que compete a los acreedores para solicitar judicialmente que se declare ineficaces (inoponibles) con respecto de ellos los actos de disposición o gravamen realizado por sus deudores con los cuales puedan sufrir un perjuicio, imposibilitando o dificultando la recuperación de sus créditos. Declarado el acto ineficaz, el acreedor accionante podrá ejecutar su crédito sobre los bienes objeto del acto fraudulento, no obstante que ya no pertenecen al deudor.

La acción pauliana, tiene por objeto proteger el crédito de un determinado acreedor, declarando la ineficacia del acto por el cual el deudor dispone de su patrimonio, de manera que lo disminuya, o no acepte que ingresen en el bienes o derechos que lo incrementan, buscando perjudicar el cobro eventual que con ellos se pudiera hacerse aquel.

Sus efectos se materializan revocando todos los actos a fin de que no subsistan los negocios jurídicos impugnados y las cosas se restituyan al deudor en el mismo estado en que se hallaban antes de los actos inválidos. Declarado el acto ineficaz, el acreedor accionante podrá ejecutar su crédito sobre los bienes objeto del acto fraudulento, no obstante que ya no pertenecen al deudor.

Algunos señalan que resulta cuestionable que se haya previsto a nivel legal un derecho persecutorio especial para los créditos laborales, ya que

en nuestro ordenamiento jurídico se han establecido diversas reglas que protegen al acreedor frente a las disposiciones fraudulentas del deudor. Tal es el caso de la acción pauliana contemplada en el artículo 195 del Código Civil, o la acción de ineficacia concursal prevista en el artículo 19 de la Ley General del Sistema Concursal. Donde no se afecta el derecho de terceros adquirentes de buena fe a título oneroso, pues la seguridad jurídica es tomada como un valor supremo.

## **6.2. LA PERSECUTORIEDAD LABORAL VERSUS LA ACCION PAULIANA**

Pero veamos cuales son los requisitos para declarar la ineficacia de los actos jurídicos onerosos que realice el deudor con el fin de que disminuya su patrimonio conocido y perjudique el cobro del crédito; tratándose de un título oneroso debe tenerse presente si el crédito es anterior al acto de disminución del patrimonio, que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que, según las circunstancias, haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos; y si el acto cuya ineficacia se solicita fuere anterior al surgimiento del crédito, que el deudor y el tercero lo hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito futuro acreedor, que en cualquiera de los casos antes mencionados corresponde al acreedor acreditar que el comprador sabia o conocía del perjuicio que iba a realizar al adquirir el bien, y en el segundo caso la “concertación” entre vendedor y comprador.

Entonces cabe resaltar que la acción pauliana no se puede aplicar cuando no existe un derecho de crédito que vaya a ser lesionado, pues no habría un derecho por lesionarse; sin embargo es posible y de ahí la excepción a la regla, que el futuro deudor antes de que se constituya el derecho de crédito acuerde o no con un tercero la disminución de su patrimonio, para así también perjudicar la futura satisfacción del crédito del acreedor y dejar de alguna manera menos evidente su accionar, siendo que en el presente

caso es el único supuesto en el cual las disminuciones patrimoniales se producen de manera anterior a la constitución del crédito.

Lo señalado en el párrafo precedente resulta de suma importancia puesto que el empleador a sabiendas del surgimiento de una obligación de carácter patrimonial que originaría un crédito laboral para sus trabajadores, antes que ello ocurra puede transferir o disponer de los bienes de la empresa que se encuentran afectos al pago integro de los créditos laborales, con el único propósito de evadir el pago.

En tal sentido, antes del surgimiento del crédito laboral- el cual depende del derecho petitionado- el empleador puede disponer de sus bienes , por tal motivo no es suficiente tener como criterio para declarar la ineficacia que el crédito laboral **deba generarse antes de la transferencia de los bienes por parte del empleador**; es por dicho motivo como veremos más adelante que tanto los órganos jurisdiccionales como el Supremo interprete de la Constitución no consideran la fecha en que se produce la transferencia o del resurgimiento de la obligación laboral para declarar el fraude.

El gran problema que se presenta para el trabajador si recurriera a la acción pauliana en lo referente a la carga de la prueba, no solo seria probar la mala fe con la que actuó su empleador al disponer de los bienes que constituían garantía de su crédito, sino que además tendría que acreditar que el tercero adquirente tenía conocimiento del perjuicio que se le estaba ocasionando como trabajador del deudor o que estaba en razonable situación de conocer o de no ignorar y el perjuicio eventual de los mismos.

Y en caso de que el acto de disminución sea anterior al crédito, que el tercero y el deudor (empleador) concertaron o mejor dicho se pusieron de

acuerdo para de esta forma hacer imposible la satisfacción del crédito del futuro acreedor (trabajador).

Qué pasaría si el trabajador vía acción pauliana logra acreditar el fraude, pero solo de su empleador-vendedor, no obstante la dificultad que acarrea probar en la vía civil que su empleador actuó fraudulentamente, ello no implica que podrá recuperar el bien o los bienes que pertenecieron a su empleador, puesto que además tendría que probar la mala fe del tercero adquirente, dificultando aún más la carga de la prueba del trabajador.

Sí ha todo lo antes mencionado le agregamos que la declaración de ineficacia que puede conseguir el trabajador de la transferencia realizada por su empleador al tercero adquirente del bien, el hecho de que **la ineficacia no perjudica los derechos adquiridos a título oneroso por los terceros sub adquirentes de buena fe**; tendremos que la posibilidad de que el trabajador cobre su crédito laboral resulte casi imposible<sup>29</sup>.

En cambio la persecutoriedad laboral solo le basta que la transferencia se haya efectuado dentro del “tiempo de sospecha” y en el otro supuesto que “el empleador haya actuado de mala fe”, es decir con el ánimo de no honrar su deuda con sus trabajadores; así la ineficacia surtirá todos sus efectos y de esta forma el trabajador puede ver satisfecho su crédito.

Ahora bien los defensores de que no era necesario esta persecutoriedad laboral, al existir la acción pauliana, reconocen la dificultad probatoria que tendría el trabajador de recurrir a dicha acción y para superar el problema probatorio para acreditar el fraude, proponen recurrir a las presunciones que pueden ser desarrolladas por la ley o la jurisprudencia. Así, pueden presumirse fraudulentas las ventas o constituciones de garantías entre

---

<sup>29</sup> El artículo 197 del Código Civil Protección de los sub adquirentes de buena fe “La declaratoria de ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a título oneroso por los terceros sub adquirentes de buena fe.



familiares o vinculados, o aquellas que se efectúen en determinados periodos vinculados al surgimiento de la obligación laboral, estableciéndose una inversión de la carga de la prueba. Esto, por lo demás, es perfectamente extensible a los créditos concursales, existiendo, incluso, una regla por el cual dentro de cierto periodo legal previo a la insolvencia resultan ineficaces (y hasta nulas) las transferencias efectuadas. De ahí que sea equivocado fijar una regla de persecutoriedad también en estos casos; conforme señala Mesina Montero (2004:34).

Es más, Avalos Jara (2006: 269) refiere que otros sostienen que respecto al carácter persecutorio de los créditos laborales, puede apelarse a esta figura laboral hasta antes del momento de que el tercero se hace propietario del bien, sea mueble o inmueble. Después sólo podrá dejarse sin efecto la transferencia de bienes mediante la acción pauliana. Es decir hace una distinción donde la ley no distingue, lo que indudablemente perjudica al trabajador, puesto que éste acciona generalmente cuando el empleador transfirió el bien; siendo así, tendría que recurrir casi siempre a la acción paulina con sus efectos y la dificultad probatoria que ello acarrea, sin perjuicio de su prescripción; en comentario de la Doctora Ariano Deho (2004:161 ss.).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Artículo 2001° inciso 4) del Código Civil. “Prescriben a los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que proviene de pensión alimenticia, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivada del ejercicio del cargo”.

Lo que no señala la norma cual es el momento inicial para el computo del plazo de prescripción de dos años, ante este vacío tendremos que recurrir a la regla general del artículo 1993° que como bien se sabe establece: “la prescripción comienza a correr desde el día en que se puede ejercitar la acción...”. Lo que ha llevado a considerar que no es otro que cuando: el acreedor toma conocimiento de la disposición fraudulenta de bienes de su deudor, quedando claro, por cierto que se presume conocido si la transferencia ha sido objeto de inscripción registral”. Al respecto se puede leer “Sobre la Prescripción de la Revocatoria Ex artículo 195° CC

## **LA FALTA DE ALGUN SIGNO DE RECOGNOCIBILIDAD ES EXCLUSIVA DEL CREDITO LABORAL**

Nuestro ordenamiento sustantivo civil establece en su artículo 2022:

Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquél a quien se opone.

Si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las disposiciones del derecho común.

Como se podrá apreciar, la norma contiene dos supuestos normativos diferentes:

- 1) Cuando existe un conflicto de derechos de igual naturaleza (reales), prima aquel que fue inscrito primero.<sup>31</sup>
- 2) Cuando existe un conflicto de dos derechos, sobre un mismo bien inmueble, y estos derechos sean de distinta naturaleza, se aplican las disposiciones del derecho común.

Si se enfrentan dos titulares del derecho real, quien tendrá preferencia en virtud del principio de prioridad será aquel que se inscribió primero (...) pero si se tratara de un enfrentamiento entre un derecho personal y uno real (...) tendrá preferencia el titular del

---

<sup>31</sup> Sin embargo en la Casación N° 789-2005-Cajamarca, sobre Nulidad de Hipoteca constituida por quien ya no era el propietario pero seguía apareciendo en los Registros como tal, habiendo hipotecado luego a favor de un Banco; la Corte Suprema, declara Nula la resolución de la Sala Superior que le daba la razón al banco amparado en la fe pública registral y la concurrencia de acreedores respecto del mismo bien a que se refiere los artículos 2014, 2013 y 1135 y 2022, para concluir que debe prevalecer la inscripción del título de propiedad a favor del banco demandado y no del tercerista. Revista JUS Junio 2007, pagina 97-1001.

derecho real, porque goza de oponibilidad erga omnes, que no tiene el derecho personal, y además porque el real goza de lo que se llama energía persecutoria, de la que también carece el derecho personal<sup>32</sup>.

### **DERECHO DE PROPIEDAD NO INSCRITA VERSUS HIPOTECA**

Es paradójico que cuando se trata de enfrentar dos derechos reales: el derecho real por antonomasia, la propiedad (no registrada), versus un derecho real de garantía como la hipoteca, la mayoría no duda en darle el privilegio a la hipoteca primeramente inscrita, y esto es paradójico porque en el fondo la función del derecho real “de garantía” es simplemente tutelar (y buscar efectivizar) el derecho de crédito tan igual como el embargo,

Por tanto, en una tercería de propiedad no inscrita contra una hipoteca, la jurisprudencia incluso aplica la improcedencia in límite de la tercería, pues la propiedad no inscrita no podría vencer a una hipoteca basada en la buena fe pública registral.

### **DERECHO DE PROPIEDAD NO INSCRITA VERSUS EMBARGO**

Por el contrario, cuando una tercería de propiedad no inscrita se opone a un embargo inscrito también bajo el tamiz de la buena fe, buena parte de la jurisprudencia no duda en otorgarle preferencia a la propiedad no registrada, aunque tampoco no son pocos los fallos en sentido contrario, donde se falla a favor del embargo inscrito contra el de propiedad no inscrita, puesto que cuando se inscribió

---

<sup>32</sup> Exposición de Motivos Oficial del Código Civil: Hipoteca, pago, Derecho de Retracto y Registros Públicos; Jack Biggio Chrem; citado en la Casación 3800-2002-Arequipa, El Peruano (2003).

la medida cautelar no se apareció inscrito el título de la tercerista, sustentándose en el principio de prioridad registral, quien entra primero al registro es el primero en el derecho, además de los principios de Legalidad, impenetrabilidad, publicidad<sup>33</sup>.

En la Casación N° 661-2010-Lima<sup>34</sup>, sobre tercería de propiedad la compra venta del inmueble se efectuó por un minuta un año antes de la inscripción del embargo, se resolvió conforme al segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil, prevaleciendo el consenso entre el vendedor y acreedor para transmitir la propiedad, con lo cual se descarta el elemento constitutivo de la inscripción en registros públicos. De esta forma queda nuevamente de lado la fe pública registral,

La controversia se señala también en estos casos, que se debe resolver conforme al artículo 2022 del Código Civil, segundo párrafo, por el derecho común en la que la preferencia se determina solo por la certeza y la fecha en que se constituyeron los derechos, sin referencia a la fecha de inscripción registral; pues de lo contrario se desembocaría en un argumento **circular**, siendo que el citado artículo esta compuesto de dos situaciones diferentes, de no ser así, tanto para el primer como para el segundo párrafo valdría el criterio de registro contemplado también para concurrencia de acreedores de bien inmueble en el artículo 1135 del Código Civil.

Sustentando esta preferencia también se indica que no debe de olvidarse el artículo 1529 del Código Civil, concordado con el 949

---

<sup>33</sup> Casación N° 4325-2006-Arequipa, Publicada en el Peruano, el 29 de febrero de 2006.

<sup>34</sup> La entidad bancaria favorecida con la medida cautelar, alego que por la compra y venta el vendedor se obliga a transferir la propiedad, empero-per se- no la transfiere por la sola existencia del acuerdo. Esto lo lleva a la conclusión de que el derecho del tercerista comprador no sería un derecho real sino personal, por lo que debió aplicarse el artículo 2016 del Código y no el 2022. Dialogo con la Jurisprudencia N° 154, Julio 2011, pagina 70 al 72.

donde el acuerdo resulta suficiente para transferir la propiedad y el artículo 245 inciso 3) del Código Procesal Civil, donde se precisa que un documento privado adquiere fecha cierta desde la presentación del documento ante notario público.

“El derecho de un acreedor embargante no es equiparable a un derecho real de propiedad, a efectos de la oponibilidad establecida en el artículo 2022 para los derechos reales sobre inmuebles, puesto que el primero se sustenta en un derecho de crédito, cuyo objeto es una prestación, ya sea de dar, de hacer o de no hacer; a diferencia del derecho real cuyo objeto es un bien. Es decir, se trata de derechos de distinta naturaleza a los cuales les serán aplicables las reglas del derecho común”.<sup>35</sup>

En este orden de ideas, la prevalencia de un derecho sobre el otro deriva de la relación *directa* de la persona con la cosa (en el caso de los derechos reales); lo que es distinto en los derechos personales donde las relaciones se dan entre personas (derecho de crédito personal), esto es; un acreedor y un deudor, en la que el acreedor puede exigir del deudor una prestación determinada apreciable en dinero<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Al respecto se puede observar las Casación N°3800-2002 y 1025-2004, expedidas por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, en procesos de tercería donde se señala que es una excepción al artículo 2016 del Código Civil, que regula el principio de rango, pero al ser derechos de distinta naturaleza, deben aplicarse las disposiciones del derecho común esto es la preferencia se determina por la certeza y fecha en que se constituyeron los derechos sin tomarse en cuenta la fecha de su inscripción registral.

Criterio que no es compartido en las Casaciones N° 4325-2006 y 2607-2006, al indicar que en caso de anteponerse un derecho real no inscrito a un derecho personal inscrito, se otorga prioridad al segundo en virtud de los principios registrales de buena fe y prioridad en el tiempo. Se agrega que la prevalencia de un derecho real sobre uno personal deriva que en el primero existe una relación directa de la persona con la cosa (en caso de derechos reales) lo que es distinta en caso de los derechos personales donde la relación se da entre personas (derecho de crédito personal), esto es, un acreedor y un deudor, en lo que el acreedor puede exigir del deudor una prestación determinada apreciable en dinero.

Esto ha llevado a señalar que en materia de oponibilidad de derechos de distinta naturaleza, nuestra jurisprudencia presenta contradicciones que deben ser superadas.

<sup>36</sup> VALERA SEIJAS, Erika Andrea, Revista Jurisprudencia JUS, Abril 2008, Pagina 163-169.

## **CUANDO SURGE Y ES OPONIBLE EL CREDITO LABORAL**

La falta de signo de reconocibilidad del crédito laboral es ligado al surgimiento o nacimiento del crédito laboral, si como se ha dicho la acción persecutoria de los beneficios sociales reposa en el hecho de que la relación laboral genera una vinculación de tipo personal y además patrimonial entre el empleador y trabajador, teniendo por finalidad apremiar los bienes del empresario deudor, puesto que estos constituyen garantías de pago de la acreencia laboral; entonces las preguntas que nos hacemos son : ¿cuando surge el crédito laboral? y ¿Cuándo es oponible?

En cuanto a la primera, ya nos hemos mencionado de acuerdo a nuestra legislación que constituye crédito laboral, teniendo en cuenta que los mismos lo conforman las remuneraciones y demás beneficios sociales que percibe el trabajador, como este tema lo hemos tratado anteriormente solo nos cabe señalar que los mismos se van generando desde el inicio de la relación laboral e incluso antes puesto que se pueda dar el caso de una indemnización por discriminación en el acceso al empleo, durante, al termino y posteriormente; esto dependerá de su naturaleza, siendo en algunos casos que la propia norma establece cuando se hace efectivo su pago, por ejemplo: las gratificaciones o las utilidades (de haberlas), se abonan en determinadas fechas que la propia ley establece, pero estas se vienen generando con el transcurso del tiempo.

Con respecto a lo segundo tenemos que establecer en que momento resulta oponible el derecho del acreedor laboral.

Algunos sostienen que debido a esa falta de reconocibilidad del crédito laboral, por parte de terceros, este será oponible cuando los demás tengan conocimiento de su existencia, que se produciría no con la presentación de la demanda sino con la inscripción en el registro correspondiente del crédito laboral, es recién en que puede ser opuesto “ ya que de lo contrario

se estaría dando excesivas prerrogativas al trabajador para que pueda cobrar sus acreencias, mientras que el tercerista puede verse perjudicado al no contar con seguridad jurídica para salvaguardar legalmente un bien que adquirió de buena fe <sup>37</sup>.

Supeditar la oposición del crédito laboral a su registro o a un signo de reconocibilidad, frente a otros créditos resultaría una exigencia que no resulta exigible ni para la compra venta de inmuebles, además no todo crédito tiene que ser necesariamente registrado para que exista, de ahí que la regla sea la no inscripción y la excepción sea el registrar el mismo para que otros tengan conocimiento de su materialización; asimismo hemos visto este hecho tampoco le daría preferencia al crédito laboral ha tenor de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil, dado que se argüiría que al ser de naturaleza personal y no real no sería oponible frente a un derecho real..

Resulta de suma importancia determinar cuando surge el crédito laboral, así veremos como en la Casación N° 1894-2005-Lambayeque, en una demanda de tercería de propiedad con la finalidad de que se deje sin efecto la medida de embargo trabada sobre el inmueble de su propiedad en el proceso de pago de beneficios sociales que habría iniciado un acreedor laboral contra una empresa que transfirió al tercerista el inmueble, alegando este último que lo adquirió de buena fe, es decir, sin conocer que el bien se encontraba afectado y que lo inscribió oportunamente. Se indico que estaba acreditado que la venta realizada al tercero fue **posterior a la notificación de la demanda de cobro de beneficios sociales**, declarando de esta forma la ineficacia de la compra venta efectuada a favor del tercero. A la vez el acto fraudulento queda demostrado con el hecho de que el contrato de compra/venta fue realizado con fecha posterior al inicio de la demanda laboral.

---

<sup>37</sup> Oxal Víctor Ávalos Jara, Precedente de Observancia Obligatoria en materia laboral de la Corte Suprema, pagina 134., Editorial Grijlkey.

Hemos señalado que la acción paulina nos permite ver en cuanto al surgimiento del crédito tratándose a título oneroso, dos momentos: 1) Sí el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que según la circunstancia haya estado en razonable situación de conocerlo; creemos que en esta situación la preferencia del crédito laboral no tendría mucha dificultad de oponerse e incluso como veremos cuando se habla de fraude en el Decreto Legislativo 856, no se hace referencia a la buena o mala fe del tercero; 2) Sí el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que el deudor y el tercero lo hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito futuro (laboral); esta situación resulta importante puesto que en este supuesto aplicado a los créditos laborales este todavía no se habría generado o mejor dicho materializado, sin embargo en materia civil sí sería procedente la interposición de una acción paulina en vista del perjuicio que ocasionaría al futuro acreedor, entonces con mayor razón dicho criterio debe servir tratándose de un crédito laboral, es por ello, que no estamos de acuerdo con los que afirman que el crédito laboral sea oponible desde que se interpone la demanda de pago de benéficos sociales.

De ahí que no resulta relevante que el crédito laboral sea anterior o posterior a una de naturaleza civil (por ejemplo un crédito comercial) o que se encuentre inscrito en un registro público (como ocurre con la hipoteca), lo más importante es que nos encontramos ante un trabajador que tiene un adeudo de carácter laboral.



## **TERCERIAS**

### **TERCERIA DE PROPIEDAD.**

Es aquella acción por el cual se le faculta al propietario de un bien, quien deberá demostrar mediante documento público o privado de fecha cierta, que el mismo esta siendo afectado equivocadamente, ya sea por una medida cautelar o su ejecución, pues la obligación reclamada en el proceso principal no es del titular del bien materia de propiedad.

En cuanto a la Tercería de Propiedad, ya ha quedado establecido que no solo se debe fundarse en la propiedad de los bienes afectados por medida cautelar sino también si se encuentran en ejecución, entendiendo esto ultimo que se esta refiriendo a cualquier tipo de ejecución, dentro de las cuales se encuentra el proceso de ejecución de garantías, teniendo como amparo legal el 535 y 536 del Código Procesal Civil<sup>38</sup>.

### **LA TERCERIA EN LA NUEVA LEY PROCESAL LABORAL**

En la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497<sup>39</sup>, se ha establecido una nueva competencia para los Juzgados de trabajo, cual es la competencia para conocer los procesos de tercerías, sean estas de propiedad o de preferencia de pago, ya que estas se interponen ante el **juez de la causa principal**; es decir, aquel proceso por el cual se ve afectado su bien.

Entonces se colige que si en un proceso de pago de beneficios sociales – proceso principal- se diera que el trabajador a fin de asegurar el pago de sus beneficios sociales o el cumplimiento de una sentencia se afecta un

---

<sup>38</sup> Casación N° 796-2004-Junin, publicada el 30 de setiembre de 2005.

<sup>39</sup> En la Cuarta Disposición Complementaria se establece “Las tercerías de propiedad o de derecho preferente de pago, así como la pretensión de cobro de honorarios de los abogados, se interponen ante el juez de la causa principal y se tramitan conforme a las normas del proceso abreviado laboral”.

bien de propiedad de un tercero, este tendrá que recurrir al proceso laboral a fin de interponer su tercería de propiedad o mejor derecho de ser el caso, la cual será tramitada como un proceso abreviado laboral, debemos entender como un incidente dentro del proceso.

### **CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA**

#### **TERCERIA PREFERENTE DE PAGO**

##### **EXPEDIENTE Nº 747-2001**

**Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria del la Corte Suprema** de la República; el catorce de agosto del dos mil uno; señalo algunos criterios que serán recogidos en los procesos sobre Tercerías en los cuales hay de por medio un crédito laboral.

3. Que, la acción persecutoria de los beneficios sociales se enmarcan necesariamente a partir de dos presupuestos: la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y su abono con carácter prioritario. Que estos dos presupuestos dan fundamento o fuerza a la acción persecutoria tendiente al cobro de las acreencias laborales.
4. Que, en lo concerniente al carácter preferente de los adeudos laborales, su naturaleza reposa en el hecho de que la relación laboral genera una vinculación de tipo personal y además patrimonial entre el trabajador y el empleador. La primera esta referida a las condiciones laborales, mientras que la segunda es una garantía que vincula al patrimonio del deudor y el cumplimiento de las obligaciones convencionales y legales.
5. Que, la acción persecutoria tiene por finalidad apremiar los bienes del empleador o empresario deudor, puesto que estos

constituyen garantía para el pago de las acreencias laborales. No se trata de identificar quien o quienes ejercen actualmente la propiedad de los bienes de la empresa deudora, o si hay algún vínculo familiar o personal de los terceros adquirentes con el empleador, de lo que se trata es de identificar los bienes, tener la certeza que pertenecieron al empleador - deudor.

6. Que, el inciso b) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 856 precisa que para su viabilizarse deben darse dos condiciones previas, para el ejercicio del carácter preferente o prioritario de los adeudos laborales con carácter persecutorio en caso de simulación o fraude a la Ley; (1) que exista extinción de la relación laboral; (2) incumplimiento de las obligaciones con los trabajadores. Si se verifica estos dos supuestos previos, la conducta injustificada del empleador prevista en el artículo tercero inciso b) del Decreto Legislativo N° 856 será fraudulenta. Si por el contrario se han satisfecho las exigencias laborales y no existe incumplimiento en la conducta del empleador, no contendrá el elemento fraude.
7. En cuanto al artículo 4° del Decreto Legislativo N° 856 basta que la demanda esté entablada para que el juez ejerza esta potestad que la ley confiere.

#### **COMENTARIO.**

Hemos querido empezar con esta Casación por que en ella se concentran los fundamentos que se van ha repetir indistintamente en las otras casaciones emitidas tanto por las Salas Civiles y de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema; señalando que aquí no se cuestiona la Constitucionalidad del Decreto Legislativo 856, como veremos posteriormente.

**EXPEDIENTE 1218-2003:**

**Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República.-** 22 de Octubre del 2003. En un proceso sobre Tercería Preferente de Pago, interpuesta por una trabajadora que busca que se le pague en primer orden su crédito proveniente de remuneraciones y beneficios sociales insolutos por considerar que su acreencia tiene preferencia sobre la obligación de su empleadora para con una entidad bancaria, dentro del proceso de ejecución de garantía ventilados entre estos últimos en donde se encuentra pendiente el remate público del inmueble de la deudora, ubicado en la Manzana A lote 17 Jirón Huaylas N° 490 – Pueblo Joven Pensocolo, de la Ciudad del Santa. Dicha Sala Suprema señalo lo siguiente:

1. Las Instancias de mérito declararon improcedente la Tercería Preferente de Pago, por considerar que de acuerdo al artículo 4 del Decreto Legislativo N° 856, la actora debió, en un proceso judicial previo, haber requerido a su empleadora para que señale bienes libres que garanticen el pago de los créditos laborales que sustentan su pretensión.
2. Que, uno de los fines del Decreto Legislativo N° 856, es precisar los alcances del artículo 24 de la Constitución y armonizar la legislación vigente con la constitución; sin embargo en los casos de discrepancia o duda sobre la ejecución y sentido de la norma invocada precedentemente, es aplicable el principio indubio pro operario.
3. Que, la demandante tiene su acreencia reconocida conforme se aprecia de la resolución que declaro fundada su demanda de ejecución de acta de conciliación ante la autoridad administrativa de trabajo, de 24 de octubre del 2001, ordenándose a la

empleadora el pago de la suma adeudada, sentencia que se declaro consentida por resolución del 29 de noviembre del 2001, por lo que el derecho de la actora puede ser opuesto al derecho real de banco ejecutante; además la entidad bancaria **no ha demostrado** en este proceso que su deudora ejecutada tenga otros bienes libres para responder por los créditos laborales del tercerista.

4. No existiendo condicionamiento para la procedencia de la demanda formulada, pues lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 856 no resulta de aplicación para declarar improcedente la acción por la Constitución.

#### **COMENTARIO:**

En este caso la Sala inaplica el artículo 4 del Decreto Legislativo 856 (Control Difuso), puesto que el artículo 24 de la Constitución es una norma autoaplicativa, siendo así, no puede establecerse por Ley condiciones o requisitos que limiten esa preferencia.

Podemos apreciar que se invierte la carga de la prueba, puesto que el ejecutante, en este caso una entidad bancaria es quien tiene que demostrar que su ejecutado – empleador tiene otros bienes con que garantizar la satisfacción del crédito laboral. También se recurre al indubio pro operario, para preferir la Constitución.

#### **EXPEDIENTE: 3235-2002:**

**La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República;** casación del 23 de Junio del 2004; en una Tercería Preferente de Pago interpuesta por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura contra una trabajadora y su ex empleador, hay un crédito laboral que ha sido reconocido judicialmente y que busca oponer su prioridad en el pago a un crédito que se encuentra

respaldado por una garantía hipotecaria registrada antes que el embargo de la recurrente (trabajadora); tanto el crédito garantizado con hipoteca como la deuda laboral respaldada con un embargo, recaen sobre un inmueble en proceso de remate público (en el proceso laboral); la Sala Suprema señaló lo siguiente:

1. Que, la norma constitucional ha sido materia de desarrollo normativo, entre las normas que la desarrollan encontramos al Decreto Legislativo 856, a través del cual se precisan los alcances y prioridades de los créditos laborales.
2. La preferencia en el pago por parte de la demandante es intentada en base a existir un derecho real de hipoteca debidamente inscrito y porque los supuestos previstos en el Decreto Legislativo 856 no se dan en el caso de autos, al no haber requerimiento de señalamiento de bien libre o proceso de liquidación del empleador.
3. Aplicando el **principio de prioridad en el pago** consagrado constitucionalmente, se aprecia que tal decisión constitucional obedece a intereses de protección a los acreedores laborales frente a los demás acreedores de distinto orden, dentro del marco de una economía social de mercado. De manera que dicho principio constitucional debe aplicarse por encima de las preferencias de derechos que se encuentran previstas en el libro IX del Código Civil, referida a los registros públicos.
4. La supremacía de la Constitución estando a lo dispuesto en el en el segundo párrafo del artículo 138°; debe primar el principio de prioridad en el pago consagrado en la constitución sobre lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 856; encontrándose los bienes del deudor afectado al pago íntegro de los créditos

laborales adeudados, incluso sobre los derechos de garantía que tiene el demandante.

5. No resulta aplicable el indubio pro operario, contemplado en el artículo 26 inciso 3) de la Constitución al caso de autos, al no estar frente a una norma jurídica en donde luego de haber aplicado los distintos métodos de interpretación jurídica, se presente una duda insalvable.

#### **COMENTARIO:**

A diferencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, para la Sala Permanente, la norma Constitucional se encuentra por encima del Decreto Legislativo N° 856, siendo tan clara que no resulta de aplicación el principio indubio pro operario y por lo tanto aplica el control difuso; además señala que esta preferencia no puede verse afectada por las inscripciones registrales.

Tampoco se puede soslayar lo referente al principio de Prioridad en el pago de los créditos laborales en la Casación materia de comentario, considerándolo como un Principio Laboral.

#### **EXPEDIENTE 237-2002**

**Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia.** Casación del 15 de julio del 2004, en el Proceso de Tercería Preferente de un inmueble urbano interpuesto por un ex trabajador contra una entidad bancaria y sus empleadores, casación interpuesta por el trabajador; mediante escritura pública de fecha 15 de abril de 1997 se acredita que la sociedad conyugal constituida por los esposos Alfonso y Bartola, adquirieron la propiedad de un inmueble. En el mismo acto la citada sociedad conyugal constituyo una hipoteca sabana sobre el inmueble materia de la Compra Venta a favor del banco por veintidós mil dólares; ante el incumplimiento en el pago el banco inicio un proceso de Ejecución de Garantía(Expediente: 513-2000)

donde se ordena sacar a remate, el inmueble; por su parte, el demandante ha seguido un proceso sobre pago de beneficios sociales (Expediente: 3488-1996) contra la sociedad conyugal codemandada, en el cual se ha ordenado mediante resolución del 10 de abril del 2000, que la sociedad conyugal cumpla con pagar a favor del accionante la suma de ocho mil soles, Habiéndose trabado embargo registrándose el 15 de octubre de 1998; la Sala Suprema señalo lo siguiente:

1. Es aplicable el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, que establece la prioridad de los beneficios de los trabajadores; además los artículos 51 y 138 de la Constitución, prevalece sobre las normas contenidas en el Decreto Legislativo N° 856 (que para la efectividad de la preferencia de los créditos laborales sobre otros créditos de distinta naturaleza establece condiciones y requisitos no previsto por la norma constitucional).
2. Corresponde aplicar el control difuso al haberse constatado la inaplicación de las normas contenidas en los artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Estado, y actuando en sede de instancia declarar fundada la demanda de tercería preferente de pago.

**COMENTARIO:**

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, señalo con claridad que era aplicable la norma Constitucional contenida en el artículo 24 sobre la establecida en el Decreto Legislativo N° 856 en virtud de lo establecido en los artículos 51, que aborda la prevalencia de la Constitución sobre toda norma legal, así como el artículo 138 sobre el control difuso, dado que el Decreto Legislativo N° 856 establece condiciones y requisitos no previstos en la norma Constitucional.



### EXPEDIENTE 2335-2003

**LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA,** Del 10 de Noviembre 2004, sobre Tercería Preferente de Pago. El recurso de casación lo interpone el ex trabajador. En este caso, el empleador tenía un adeudo con el trabajador por concepto de beneficios sociales, y en forma paralela un tercero, inició un proceso de cobro de adeudos no laborales contra el indicado empleador. En este escenario, el trabajador inició una acción de tercería preferente de pago, para tener derecho de preferencia en el cobro de los ingresos del remate del bien en el proceso civil seguido por una entidad bancaria con el empleador deudor, la Sala manifestó lo siguiente:

1. Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 856 establece la persecutoriedad de los bienes del empleador, solo en esos casos. De otro lado, el artículo 4 del citado Decreto Legislativo dispone que la preferencia se da cuando en un proceso judicial el empleador no ponga a disposición del juzgado bien o bienes libres suficientes.
2. No obstante lo antes señalado, resulta aplicable el artículo 51 y 138 de la Constitución, así como la primera parte del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3. Que, el artículo 24 de la Constitución **no establece ningún requisito o condición previa para que los trabajadores sean pagados de manera preferente a otros acreedores.** Sin embargo del Decreto Legislativo 856 en sus artículo 3 y 4 establecen condiciones no previstas por el legislador Constituyente, resultando incompatible con lo normado por la Constitución.
4. Los artículos 3 y 4 del citado Decreto Legislativo viola los principios de jerarquía del ordenamiento jurídico, supremacía de

la constitución y el in dubio pro operario; y haciendo uso del control difuso esta Sala, declara que es inaplicable, en el presente caso.

**COMENTARIO:**

No tiene que existir un proceso donde previamente se tenga que haber requerido al empleador el pago de los beneficios sociales; además la Corte Suprema señala que no se puede separar la preferencia de los créditos laborales con la persecutoriedad de los mismos, por ello habla de la persecución aunque hubiera podido referirse solamente a la preferencia como lo hace en otros casos. La Sala recurre al In dubio pro operario para sustentar su sentencia.

**CASACION Nº 1572-2003**

**Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República**, Casación del 08 de abril 2005; sobre Tercería preferente de pago, interpuesta por un trabajador (hijo) contra su ex empleador (padre) y la entidad bancaria; para que se le pague primero antes que al banco que tiene un proceso de ejecución de garantía con su ex empleador; además el actor ha embargado el inmueble en el proceso de Ejecución de Resolución Administrativa en base al acta de acuerdo sobre pago de beneficios sociales; aunque dicho embargo fue después de la hipoteca.

1. Frente al principio de buena fe registral previsto en el Código Civil artículo 2016, la hipoteca constituida a favor del banco estaría en primer rango y el embargo del demandante en segundo rango; sin embargo el artículo 24 de la Constitución por ser una norma de mayor jerarquía, tiene preeminencia sobre otra, resultando intrascendente discutir sobre la validez del vínculo laboral.

2. Resulta intrascendente discutir la validez del vínculo laboral, que pudiera existir en una relación laboral entre padre e hijo.

VOTO EN DISCORDIA: El voto en discordia de uno de los Vocales Supremos :

1. Que, si bien nuestro ordenamiento en forma excepcional permite que exista una relación laboral entre ascendiente y descendiente, sin embargo, por tratarse de una relación laboral extraordinaria esta no puede desplegar los mismos efectos de una relación laboral ordinaria, sino por el contrario la relación laboral entre parientes únicamente surte efectos entre las partes contratantes, por lo que no es oponible frente a terceros que de buena fe han adquirido derechos sobre los bienes del empleador.
2. Que, el artículo 24 de la Constitución es un precepto abstracto y genérico no puede ser aplicable en forma omnímoda, además agrega que los derechos laborales, considerados como derechos fundamentales de segunda generación, no tienen carácter absoluto sino como todo derecho fundamental debe deben ejercitarse en armonía con el interés social.
3. Además no debe pasar desapercibido que con fecha 21 de enero del 2000; inicio la entidad bancaria el proceso de ejecución de garantía contra los padres del demandante; siendo que con fecha 09 de febrero del 2001, padres e hijo han celebrado una conciliación extrajudicial por lo que los demandados reconocen adeudar a favor del segundo la suma de \$20,000 Dólares por Beneficio Social, situación que además pone en entredicho la existencia efectiva de una relación laboral.

**COMENTARIO.**

Puede resultar poco creíble el valor dado a un acuerdo extrajudicial privado entre las partes donde se reconozca la existencia de una relación de tipo laboral entre padres e hijos y que producto de aquella este pendiente una deuda por pago de beneficios sociales; pero de por medio hay una resolución administrativa que aprueba el acta de conciliación donde el Estado ha intervenido por intermedio de la Autoridad Administrativa de Trabajo, siendo en todo caso en dicha instancia donde en todo caso se debió requerir los medios probatorios que realmente acreditaran la existencia de una relación laboral entre el actor y sus progenitores.

Estamos de acuerdo con la ejecutoria que tratándose de un proceso de tercería, no puede pronunciarse de la verdadera existencia o no de la relación laboral entre el padre y su hijo; ello al haber un proceso de Ejecución de Resolución Administrativa en materia laboral, al cual se ha adjuntado un título ejecutivo cuya validez y/o veracidad no puede ser objeto de pronunciamiento en uno proceso laboral de ejecución, además por ser un tema de fondo y por otra parte se estaría yendo contra el principio de congruencia.

Del voto en discordia podemos decir que el Vocal Supremo hace una distinción de los efectos de una relación laboral entre parientes distinta a la que pudiera existir en una relación laboral entre personas que no guardan ningún grado de parentesco, haciendo una distinción donde la Ley no distingue; puesto que la segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por Decreto Supremo N° 003-97-TR, permite la relación laboral entre consanguíneos de existir acuerdo.

**DESPRENDIMIENTO PATRIMONIAL DE UN EMPLEADOR-DEUDOR.**

**EXPEDIENTE 1303-2003.-**

**Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.** Casación del 08 de Julio del 20004, aquí a diferencia de las otras casaciones donde había concurrencia de crédito laboral e hipoteca; en esta caso, nos encontramos frente a una Tercería de Propiedad, el recurso de Casación es interpuesto por el comprador de los bienes del empleador - deudor laboral; la Sala Suprema señalo lo siguiente:

1. Que, la acción persecutoria de los beneficios sociales reposa en el hecho que la relación laboral genera una vinculación de tipo personal y además patrimonial entre el empleador y trabajador; la primera está referida a las condiciones laborales mientras que la segunda, es una garantía que vincula el patrimonio del deudor al cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales; que la acción persecutoria tiene por finalidad apremiar los bienes del empleador o empresario deudor, pues estos constituyen la garantía para el pago de las acreencias laborales.
2. No se trata de identificar quien o quienes ejercen actualmente la propiedad de los bienes de la empresa deudora, o si hay algún vínculo familiar o personal de los terceros adquirientes con el empleador, de lo que se trata es de identificar los bienes, tener la certeza que pertenecieron al empleador deudor.
3. Que, el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución tiene supremacía respecto del artículo 2014 del Código Civil, norma legal referida a la buena fe del tercero adquirente.

4. Que, en las instancias de mérito ha quedado acreditado que la obligación laboral a favor del ex trabajador (demandado en este proceso), antecede a la transferencia del bien materia de la tercería, por lo que el Colegiado Superior aplicó debidamente la norma constitucional e interpreto correctamente el artículo 2014 del Código Civil.

#### COMENTARIO:

Las dos casaciones anteriores han versado sobre tercerías preferentes de pago, donde coexistieron dos acreencias pendientes de pago, siendo una de carácter laboral; pero en este caso el empleador deudor había transferido la propiedad de sus bienes a un tercero que incluso **registro su propiedad**; la Sala Suprema **no ingreso al análisis de la buena fe o no del tercero**, ya que se trataba de un crédito laboral **anterior a la adquisición por un tercero**, que estaba pendiente de pago; bienes que habían sido del empleador y se encontraban en posesión y propiedad de un tercero; por lo tanto resultaba aplicable la norma Constitucional de la preferencia de los créditos laborales la cual tiene como uno de sus atributos la persecución de los mismos; sin importar como reiteramos sí hubo mala o buena fe del tercero adquirente o sí este lo transfirió a un sub adquirente.

Como veremos más adelante esta posición de la sala cambia en la Casación 2117-20003-La Libertad.

#### EXPEDIENTE: 1894-2005

**Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.** Lima, 25 de Abril de 20006,

En este caso se trata de una demanda de Tercería de Propiedad, en la cual el accionante Enrique Rojas Toro, pretende que se deje sin

efecto la medida de embargo trabada sobre el inmueble de su propiedad en el proceso sobre pago de beneficios sociales, seguidos por el ex trabajador Laureano Reyes contra la empresa Inversiones Pecuniarias, fundamenta que el ejecutado en el proceso laboral le ha vendido el inmueble con fecha 20 de febrero del 2004, elevado a escritura pública el 08 de setiembre del mismo año; y por tanto la propiedad objeto de embargo no es del ejecutado;

La Sala Suprema Señalo lo siguiente:

1)En la sentencia apelada ha quedado determinado que los actos realizados por el empleador demandado entre ellos la compra venta otorgada al tercerista, devienen en ineficaz, pues dicho acto de disposición del bien fue realizado en **fecha posterior al inicio de la demandada laboral de beneficios sociales**, puesto que la sentencia de primera y de vista son de fecha 29 de noviembre del 2002 y 16 de abril de 2003; además la escritura de compra venta es de fecha 20 de 08 de setiembre de 2004 y su inscripción registral se produjo el 20 de setiembre del citado año, titulo de naturaleza civil que no puede oponerse al titulo de naturaleza laboral cuya preferencia y persecutoriedad están garantizados por la Constitución y el Decreto Legislativo N° 856, bajo este contexto legal, no se levanta el embargo trabado mediante resolución de fecha **04 de febrero de 2004** e inscrita el 11 de marzo del mismo año, sobre el inmueble objeto de tercerías.

#### COMENTARIO:

En la presente casación la Instancia Suprema aplica el carácter persecutorio de los créditos laborales respecto del bien inmueble del deudor laboral. Así queda claro que el comprador del inmueble actuó de mala fe, o al menos eso debe de presumirse, ya que este adquirió el bien cuando en el registro de propiedad inmueble existía

inscrito un embargo por acreencias laborales sobre el bien transferido.

Cabe resaltar que el tercero alegaba como argumento de defensa el artículo 2022 del Código Civil.

**LA PERSECUTORIEDAD NO ES OPONIBLE AL TERCERO REGISTRAL COMO PRECEDENTE DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.**

**CASACIÓN NO. 2117-2003**

**Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia;** del 08 de abril del 2005, publicada el 04 de enero pasado, con calidad de **precedente vinculante**; en la Casación interpuesta por el tercero adquirente en un proceso sobre Tercería de Propiedad, señala que compro dos vehículos de su anterior propietaria-deudora laboral, transferencia efectuada el 12 de julio del 2001, siendo que al 03 de mayo del 2002, dichos vehículos no registraban afectación, estando probado con los certificados de gravamen que obran en el expediente, que la medida cautelar fue posterior a la transferencia de los vehículos sub litis por lo que debe aplicarse el artículo 2012 del Código Civil; no obstante que el proceso laboral se inicio en diciembre de 1998 y que la transferencia de los vehículos se efectuó cuando el expediente de beneficios sociales se encontraba para sentenciar.

**FUNDAMENTOS:**

1. Que, el codemandado-trabajador- inicio un proceso laboral a la codemandada –ex empleadora- en el cual se dictaron medidas cautelares que motivan el presente proceso de Tercería; no está acreditado en el proceso como han sostenido las otras instancias, que resulta evidente que la codemandada ha transferido los



vehículos objeto de la medida cautelar con la intención de sustraerse de su obligación laboral.

2. Que, en autos no aparece medios probatorios idóneos y suficientes que demuestren la existencia de la simulación en la compra venta de los vehículos como podría ser el indicio de un conocimiento previo del comprador de la preexistencia del proceso judicial ni tampoco de limitaciones patrimoniales del comprador precedentes a la adquisición de los vehículos, ni de existencia indiciaria de vínculo de parentesco del comprador con la ex empleadora.
3. Que, estando al artículo 2014 del Código Civil (...), al no existir medios probatorios idóneos en autos que determinen la ausencia de la buena fe en el accionar del ahora demandante, además de los artículos 2012, 2013 y 2016 del Código Civil cuya aplicación resulta trascendente para la solución de la presente causa, no obstante han sido inaplicadas por el Colegiado Superior.

#### **COMENTARIO:**

Como podemos apreciar la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, señala que el tercero, comprador de buena fe del deudor laboral no pierde su adquisición, aun cuando el referido deudor pudiera haber efectuado la transferencia con el propósito de eludir su obligación, ni que la deuda laboral sea anterior a la transferencia del bien por parte del empleador deudor; ingresando sólo a ver si el tercero adquirente actuó de buena o mala fe, por ello señala que no hay pruebas o indicios de que el comprador tenía conocimiento previo de que existía un proceso laboral o que existiera un parentesco entre el comprador y el deudor laboral, respetando en el presente caso la buena fe registral, ya que

según se afirma los certificados de gravámenes que obran en el expediente acompañado, la medida cautelar fue posterior a la transferencia de los vehículos.

Este fallo contradice lo antes resuelto en la Casación N° 1303-2003, por la misma Sala transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la cual solo se ingreso al análisis de la existencia de un crédito laboral anterior a la transferencia de la propiedad por el empleador deudor; en este caso como reiteramos sólo se orienta en ver la buena fe registral del tercero adquirente de los bienes del empleador deudor; siendo irrelevante que éste último realice la transferencia con el ánimo de librarse de su obligación de carácter laboral, situación que se encuentra contemplado en todo caso con lo dispuesto en el artículo 3 inciso b) del Decreto Legislativo N° 856, más no la buena o mala fe del tercero adquirente variando de esta forma lo señalado tantas veces por las diferentes Salas de la Corte Suprema: “No se trata de identificar quien o quienes ejercen actualmente la propiedad de los bienes de la empresa deudora, o si hay algún vínculo familiar o personal de los terceros adquirentes con el empleador, de lo que se trata es de identificar los bienes, tener la certeza que pertenecieron al empleador – deudor”; ya que en el presente caso tampoco fue determinante haber quedado acreditado que los bienes transferidos pertenecieron al empleador – deudor.

En virtud de lo expuesto en la presente sentencia para que opere el carácter persecutorio de los créditos laborales debe acreditarse la existencia de **fraude, no solo del deudor sino también del comprador** se evidencia que si el tercero adquirió los bienes del deudor laboral bajo la “buena fe Registral” del tercero adquirente y luego inscribe su derecho, el acreedor laboral solo podrá invocar el carácter persecutorio de los créditos laborales si acredita la mala fe

o una conducta fraudulenta del tercero adquirente, estaríamos frente a una Acción Paulina o Revocatoria hecho que no se encuentra en todo caso contemplado ni siquiera en el artículo 3 del Decreto Legislativo 856.

Pero más adelante veremos si el Supremo Interprete de la Constitución comparte la misma opinión que la Corte Suprema respecto al tercero adquirente de buena fe.

De las Casaciones podemos apreciar que tanto para las Salas Civiles y de Derechos Constitucional de la Corte Suprema de la República, no queda la menor duda respecto de la preferencia de los créditos laborales frente a cualquier otra obligación del empleador, incluso frente a la hipoteca.

El derecho persecutorio sobre los bienes transferidos por el empleador debe tener una formula abierta y no taxativa, de modo tal que cualquier transferencia de bienes a un tercero puede ser pasible de una acción persecutoria cuando el empleador no cumple con el pago de los beneficios sociales o muestra una serie de conductas que denotan una intención de no pagar tales beneficios.

Que, la preferencia de los créditos laborales y la persecución de los mismos, se encuentran muy vinculados de tal forma que no podemos separar una de otra, siendo que la Constitución al referirse a la preferencia de los créditos laborales implícitamente está comprendiendo el carácter persecutorio de los mismos; por tanto no resulta aplicable las normas contenidas en el Decreto Legislativo N° 856.

Entonces, la buena fe registral recogida en el Código Civil no resulta aplicable, pues la Constitución tiene un mayor nivel jerárquico y

confiere prelación al trabajador en la cobranza de adeudos laborales. Así se ha pronunciado la Corte Suprema al señalar que la norma constitucional tiene supremacía respecto al artículo 2014 y 2016 del Código Civil, normas referidas a la buena fe del tercero adquirente y a la prioridad de rango o registral.

En suma siguiendo con el criterio de la Corte Suprema, debería comprenderse a todos los supuestos donde se constate la intención de evasión-aspecto subjetivo- o una situación de riesgo -aspecto objetivo- que impida el pago de los beneficios sociales. El análisis, ciertamente, será casuístico y debe primar, en cada caso, una valoración que suponga asegurar el pago de los beneficios sociales.

Hasta aquí, hemos podido apreciar cuales han sido los fundamentos dados por los Órganos Jurisdiccionales encargados de la administración de justicia en nuestro país, para darle preferencia a los créditos laborales frente a cualquier otra obligación que pudiera tener el empleador y sobre todo la interpretación que han realizado a la norma Constitucional; ahora nos toca ver el contenido y alcance efectuado por el Supremo Interprete de la Constitución a dicha preferencia, teniendo como partida a la propia Constitución, su definición, los métodos de interpretación, sus precedentes y las resoluciones que hasta la fecha han venido expidiendo cuando se han pronunciado sobre los créditos laborales.

## SUB CAPITULO 7

### 7.1. LA CONSTITUCION Y SU INTERPRETACION

#### 7.1.1 LA CONSTITUCION

La Norma Constitucional carece de existencia independiente de la realidad. Su eficacia no puede extrapolarse de las condiciones naturales, históricas y socioeconómicas de cada situación. Pero al propio tiempo, la Constitución es algo más que esas condiciones fácticas, ya que entraña una fuente de “debe ser”, es decir, posee una peculiar fuerza normativa dirigida a ordenar y conformar la realidad política social (Pérez Luño 250 Mendoza Escalante. 2009:)

Al ser la Constitución en esencia un corpus o sistema normativo homogéneo de la vida política y social de una determinada colectividad estatal; lleva que en nuestro país su supremo interprete con referencia a dicha unidad y homogeneidad señale que es un todo y que ese todo está compuesto por cada una de sus partes; así la Constitución es un todo integral, compuesto por su preámbulo, sus normas, sus disposiciones transitorias y la Declaración sobre la Antartida. Ninguna de estas partes puede considerarse un añadido extra constitucional.

“La Constitución, en efecto, no es sólo “una” norma, sino, en realidad, un “ordenamiento”, que está integrado por el preámbulo, sus disposiciones con numeración romana y arábica, así como por la Declaración sobre la Antardida que ella contiene. Toda ella comprende e integra el documento escrito denominado “Constitución Política de la República del Perú” y, desde luego, toda ella posee fuerza normativa (...) (Expediente N° 0005-2003-AI-TC) emitida el 03 de octubre del 2003.

### 7.1.3. LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL

Se denomina así al proceso mediante el cual se determina o se asigna un sentido a las normas contenidas en el texto constitucional en relación con un suceso o conjunto de sucesos frente a los cuales pueden o deben aplicarse.

El papel de los intérpretes constitucionales consiste en declarar el significado y alcance de las normas constitucionales, por ello la Jurisdicción constitucional se orienta a afirmar el principio de soberanía constitucional, la racionalización del ejercicio del poder, la vigencia plena de los derechos fundamentales de la persona y la acción interpretativa e integradora de la Constitución.

Conviene precisar que si bien es posible aplicar a la Norma Fundamental, los criterios de interpretación propiamente aplicables a las normas de rango legal(a saber, métodos literal, sistemático, histórico y sociológico), no es menos cierto que la Constitución posee también un importante contenido político, dado que incorpora no sólo reglas imperativas de exigencia o eficacia inmediata o auto aplicativas sino también un cumulo de disposiciones que propugnan el “programa social” del Estado, en cuyas vertientes principales se sitúa el régimen económico.

En efecto, la interpretación constitucional tiene la responsabilidad de **afirmar los principios y valores contenidos en la Constitución**. En otras palabras, contribuye decididamente en asentar la ideología, la doctrina y el programa político incluidos en dicho texto.

Se trata en buena cuenta, de la distinción a la que alude Rober Alexi (Mendoza Escalante 2009:81) cuando subraya la existencia de normas constitucionales regla y normas constitucionales principios, siendo el punto decisivo para su distinción es que los principios son

normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes, por lo tanto, los principios son mandatos de optimización, que están caracterizados por el hecho que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales sino también jurídicas. El ámbito de las posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas opuestos.

En cambio las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o no. Si una regla es válida, entonces debe (sic) hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctico y jurídicamente posible (Rober Alexi 2002. Mendoza Escalante 2009:81)

#### **7.1.2.1. TIPOS DE INTERPRETACION CONSTITUCIONAL**

Desde un punto de vista doctrinario, es posible distinguir cuatro tipos de interpretación constitucional: la interpretación de la Constitución, la interpretación desde la constitución, la interpretación abstracta y conceptual genérica y, por último, la interpretación específica y concreta.

Al respecto Víctor García Toma (2005: 189) dice:

- a) La interpretación de la Constitución. Consiste en asignar sentido a la Constitución a efectos de coadyuvar a su correcta aplicación de la realidad. Esta asignación requiere que previamente se aprecie y se determine la existencia de los valores y principios constitucionalmente existente en su seno.
- b) **La Interpretación desde la Constitución.** Es la que se efectúa sobre la legislación infraconstitucional a

partir de la respuesta hermenéutica obtenida de la Constitución, para que aquella guarde coherencia y armonía con el texto fundamental.

- c) La interpretación abstracta y conceptual genérica. Consiste en comprender teóricamente el texto constitucional, sin necesidad de ligarlo a una contingencia real de la vida política.
- d) La interpretación específica y concreta. Consiste en comprender la aplicabilidad del texto fundamental a una situación o contingencia real emanada de la vida política.

#### **7.1.2.3. LOS CRITERIOS DE INTERPRETACION CONSTITUCIONAL**

Los criterios de interpretación desde la Constitución globalmente entendida son aproximaciones generales al manejo de las disposiciones constitucionales. Tienen que ver con la manera como entendemos la Constitución en cuanto sistema normativo, y con las consecuencias que esa comprensión tiene para la interpretación.

El sentido y la finalidad de la interpretación de las normas jurídicas de todos los niveles en relación con la Constitución están resumidos en la siguiente cita del Tribunal Constitucional:

“En suma, la interpretación de la ley de conformidad con la Constitución es aquella “que adecua, armoniza la ley a la Constitución (previamente interpretada, se entiende),



escogiendo aquella (o sea, la norma) que evita cualquier contradicción entre ley y Constitución” Expediente N° 0017-2003-AI/TC, fundamento 25 y 26.

Es por ello que yendo a lo que es materia de nuestra Tesis, no podemos hacer una interpretación aislado del segundo parrado del artículo 24 de la Constitución, sin que previamente lleguemos a interpretar la propia Constitución en su conjunto.

### **LA INTERPRETACION SISTEMATICA**

La interpretación sistemática de la Constitución parte del presupuesto de que el ordenamiento jurídico en su conjunto debe ser considerado como un sistema caracterizado por la coherencia del contenido de las diversas normas que lo integran y dotado de una unidad orgánica y finalista.

La interpretación sistemática supone, en este caso que la Constitución es un sistema normativo y un sistema puede definirse como un conjunto de partes que se interrelacionan según ciertos principios, de manera que siempre se puede encontrar respuestas a las necesidades normativas para la vida social dentro de dicho sistema, integrando las partes y aplicando los principios.

La interpretación sistemática trata de mirar íntegramente la Constitución y de dar respuestas normativas constitucionales, no desde un texto normativo específico sino desde el conjunto de reglas y principios constitucionales (Rubio Correa 2005:71).

De ahí que el denominado criterio de interpretación **desde la constitución** de las normas infra constitucionales y la alusión a que tal interpretación se hará no en forma genérica desde o según la Constitución, sino desde los “preceptos” y “principios” constitucionales.

Teniendo como sustento éste método de interpretación (Zavaleta Rodríguez. 2005: 100); Téngase en cuenta que la relación de la parte con el todo constituye un medio de control para la plausibilidad de la interpretación de un precepto particular respecto a la institución que lo contiene o la rama del ordenamiento jurídico al que esta adscrito. Por ello, se indica que entre varias interpretaciones posibles según el sentido literal, debe obtener preferencia aquella que ofrece una sistemática relación con otra norma. Esta es una de las ventajas del método sistemático, ya que a través de él podemos llegar a conclusiones homogéneas, válidas para un determinado grupo de preceptos o un subsistema normativo, porque se trata de conectar y relacionar sin contradicción alguna una constelación de normas, encontrando sus principios rectores y las bases que presiden la regulación”.

De ahí que el referido autor, como veremos más adelante concluya que la norma Constitucional es de carácter programático ya que por sí sola e independientemente resulta insuficiente para establecer en que casos se rompe el equilibrio entre acreedores para preferir al acreedor laboral, debiendo concordarse por ello con el Decreto Legislativo N° 856, el cual precisa los alcances de dicha

preferencia, al establecer los casos *numerus clausus* en que se rompe el equilibrio entre acreedores.

## LOS PRINCIPIOS HERMENEUTICOS

La doctrina admite la existencia de principios interpretativos en materia constitucional, a efectos de orientar y canalizar el proceso de asignación y alcance de los significados contenidos en el texto supremo del Estado:

- 1) El Principio de Unidad de la Constitución. La Constitución debe entenderse de modo integral y no como fórmula de compartimientos estancos. Por ende, no resulta admisible la separación por cirugía-jurídica de una norma constitucional de las demás restantes.
- 2) El principio de concordancia practica. Plantea que los bienes jurídicos consignados en la Constitución deben ser objeto de protección y defensa de manera concomitante, de modo que en la solución de un problema político-jurídico todos conserven su identidad e indemnidad, para tal efecto se privilegia su ponderación proporcional, para conseguir que se respete el núcleo de cada bien en particular.
- 3) El Principio de corrección funcional. Plantea que el intérprete está impedido para establecer determinaciones que de algún modo interfieran con las competencias y funciones que la Constitución ha asignado a los diferentes órganos del estado.

- 4) El principio de eficacia integradora.- La actividad hermenéutica debe promover, reforzar y vigorizar la determinación política-jurídica que hagan más operativa y potente la unidad axiológica y teleológica de la Constitución.
- 5) El principio de adaptación. Las distintas instituciones, categorías y conceptos contemplados en el texto constitucional pueden ser objeto de valoración en un sentido significativo, de conformidad con los cambios y mutaciones que sufre la realidad política del Estado.
- 6) El Principio de Constancia Las distintas instituciones, categorías y conceptos contemplados en el texto constitucional deben observarse a la luz de los postulados o proposiciones de naturaleza ético-política o técnico-jurídica que proyectan una aplicabilidad permanente, y debe restar valor extremo a aquellos que meramente atiendan a situaciones provisionales.
- 7) El principio de Utilidad. Los distintos instrumentos, categorías y conceptos contemplados en el texto constitucional deben someterse a una interpretación que propenda hacia algo constructivo y conveniente.
- 8) El principio de conservación de la ley. La actividad interpretativa exige, hasta donde sea razonable, la constitucionalidad de una ley impugnada en aras de afirmar la seguridad jurídica y la gobernabilidad del Estado.

## **7.2. LA PREFERENCIA DEL CREDITO LABORAL NORMA PROGRAMATICA O AUTOAPLICATIVA**

En cuanto a que la norma contenida en el artículo 24 segundo párrafo de nuestra Constitución, es de carácter programático o auto aplicativa, se han sostenido posiciones contrapuestas las cuales resulta necesario mencionarlas, por ser de suma importancia para determinar si el Decreto Legislativo N° 856 “Créditos Laborales”, resulta acorde con la norma Constitucional, ya que según refiere en ella se “Precisan alcances y prioridades de los créditos laborales “:

La Justificación antes mencionada por la preferencia del crédito laboral hace que la correspondiente norma constitucional tenga carácter auto aplicativa, a pesar de estar dentro del catálogo de los derechos sociales previstos en la Constitución, que por lo general contienen sólo normas programáticas.

Las razones son muy simples: Las normas programáticas son aquellas que requieren para su eficacia de una previa reglamentación infra constitucional, ya que por lo general las mismas demandan para su plena implementación del soporte presupuestal necesario, o de ciertas condiciones político-sociales, lo que hace que su aplicación sea por lo general de manera gradual, tomando en cuenta las posibilidades económicas o sociales en determinado momento. Sin embargo, en el caso de la norma que consagra la preferencia de los créditos laborales, ¿acaso necesita de algún soporte presupuestal para que pueda ser implementada?, o acaso ¿necesita de alguna condición especial de carácter social o político que pueda aplicarse? Evidentemente que no; (Montoya Mendoza. 2005:54).

No obstante lo señalado al considerarse que las normas laborales se encuentran dentro de los llamados derechos sociales, estas carecen o

están privados de las acciones de garantía (amparo) para exigir su cumplimiento.

Esto porque históricamente, los derechos sociales han sido entendidos como derechos de preceptividad aplazada o programáticos, cuya estructura y forma de ejercicio depende del legislador, y luego del correspondiente desarrollo normativo, del ejecutivo, a quien mediante su estructura administrativa le corresponde efectivizar las prestaciones. En esa medida, la posibilidad de reclamar su tutela ante la jurisdicción constitucional – ampliamente aceptada en el caso de los derechos fundamentales de contenido liberal – ha sido negada o, en el mejor de los casos, restringida, por las propias constituciones.

Los Derechos Sociales fundamentalmente se relacionan directamente con las condiciones de existencia de las personas; dicho de otro modo buscan superar la inseguridad material satisfaciendo las necesidades básicas de los seres humanos, a través de la prestación de bienes y servicios, se trata de derechos que se concretan en acciones que se orientan a modificar las estructuras económicas, sociales y culturales de una comunidad, en consecuencia la conducta activa del Estado es necesaria para su realización, a diferencia de los derechos fundamentales o clásicos o de la libertad, debido a que estos se consideran que no requieren la actuación del Estado para su realización y que al contrario se ven satisfecho con la mera abstención del Estado.

Los Argumentos contra la exigibilidad de los derechos sociales, son diversos pasando de que son un grupo muy heterogéneo, por lo que son indeterminados y requiere de la actuación del legislador para que se concrete sus contenidos, pero ésta no es una característica exclusiva de los derechos sociales, también lo es de los derechos fundamentales, por ejemplo: la Libertad tiene que ser regulada además de la Constitución por Leyes especiales; el carácter prestacional de los derechos sociales es el

segundo y, tal vez, el principal argumento para negar la posibilidad de que sean tutelables jurisdiccionalmente, señalan que se necesita de una estructura y organización estatal previa que los realice, así como de recursos económicos públicos suficientes para cumplir con las prestaciones, se dicen que la diferencia significativa con los derechos fundamentales, es que no suponen el desembolso significativo de dinero y solo imponen al estado obligaciones negativas, los derechos sociales son caros, porque reclaman el cumplimiento de obligaciones positivas por parte del Estado, las cuales no pueden ser exigibles jurisdiccionalmente porque estas se ubican en el ámbito del diseño de políticas públicas y gasto social, propio de todo órgano político del Estado.

Pero, los derechos fundamentales también requieren de políticas de Estado para hacerse realidad, tienen que hacer acciones positivas para la promoción o garantía de los distintos derechos, Ejemplo los gastos que supone la función jurisdiccional del Estado, los gastos que requieren para mantener las fuerzas policiales encargadas de garantizar el derecho a la seguridad personal.

Por tanto, indica Alvites Alvites (2005: 45), los derechos sociales y los derechos individuales de contenido liberal pueden ser caracterizados como un conjunto de obligaciones positivas y negativas a cargo del Estado.

Al respecto cabe mencionar que la Ley 23506 (Ley de Habeas Corpus y Amparo) en su artículo 25 precisaba: “No dan lugar a la acción de amparo los derechos a que se refiere la Sexta Disposición Final y Transitoria de la Constitución del 1979”, la misma que establecía que las disposiciones de la constitución que exijan nuevos y mayores gastos públicos se aplican progresivamente y que la Ley Anual de Presupuesto debía contemplar el cumplimiento gradual de la misma. No obstante, que dicha disposición transitoria no se refería expresamente a ningún derecho, sino que hablaba de disposiciones constitucionales en general. Sin embargo, a pesar de tal

imprecisión el artículo 25° fue interpretado como una restricción a la efectividad inmediata y, por ende, justiciabilidad de los derechos sociales. La Undécima disposición final y transitoria de la Constitución 1993, establece que las disposiciones de la constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos se aplican progresivamente, ha recibido una interpretación similar a la que en su momento mereció la sexta disposición final y transitoria de la Constitución de 1979.

El criterio de la urgencia o inminencia de daño al individuo, que por las especiales circunstancias que lo rodean podría ver perjudicada su dignidad o libre desarrollo de su personalidad, ha sido considerado un elemento determinante para habilitar la actuación de la jurisdicción constitucional en defensa de los derechos sociales. De igual modo, los supuestos de conexión existentes entre los contenidos de un derecho fundamental individual y un derecho social, pues esta relación permite brindar protección jurisdiccional al último; ello, porque la falta de satisfacción de un derecho social afecta los contenidos del derecho individual, como sucede con la relación que se establece entre el derecho a la salud y los derechos a la vida y a la integridad personal.

El Tribunal Constitucional respecto de los derechos fundamentales sociales, a pesar de aceptar su condición de derechos fundamentales, ha señalado que serían derechos de “preceptividad diferida, prestacionales, o también denominados programáticos o progresivos (...) no se trata de derechos auto aplicativos; su vigencia y exigibilidad requieren de una participación protagónica del Estado en su desarrollo”. Esta interpretación fue reformulada en los casos de atención médica gratuita que el Estado debe brindar a los enfermos del SIDA; pero, ha sido nuevamente retomada.

El citado Tribunal señaló en el Exp. 2945-2003-AA/TC en su fundamento once:



*“No se trata, sin embargo, de meras normas programáticas de eficacia mediata, como tradicionalmente se ha señalado para diferenciarlos de los denominados derechos civiles y políticos de eficacia inmediata, pues su mínima satisfacción representa una garantía indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos. De este modo, sin educación, salud y calidad de vida digna en general, mal podría hablarse de libertad e igualdad social, lo que hace que tanto el legislador como la administración de justicia deban pensar en el reconocimiento de los mismos en forma conjunta e interdependiente”<sup>40</sup>.*

La Constitución de 1993, distingue formalmente entre derechos fundamentales de la persona y derechos sociales y económicos. Sin embargo, dicha concepción formal de los derechos fundamentales es desvirtuada por el artículo 3º de la misma Carta Fundamental<sup>41</sup>, que establece una norma de apertura para el catálogo de los derechos fundamentales. En esa medida, al amparo de dicha cláusula constitucional es posible incorporar a dicho catálogo de derechos reconocidos en el capítulo II del título I de nuestra constitución, denominado “De los derechos sociales y económicos”.

Rubio Correa (1999:220) comentado este párrafo de la Constitución señala que el segundo párrafo del artículo 24º de la Constitución, establece lo que se llama pago preferente de deudas de remuneraciones y beneficios sociales al trabajador y quiere decir lo siguiente: normalmente durante el funcionamiento de la empresa, los primeros pagos que debe hacer el

---

<sup>40</sup> Caso Azanca Alheli Meza García contra el Estado Peruano-Ministerio de Salud- se señala que la moderna concepción de los derechos sociales implica que no solo constituyen obligaciones de hacer del Estado, sino de toda la sociedad en su conjunto; por ello la doctrina ha empezado a denominarlos **deberes de solidaridad**. Agregando que la exigencia judicial de un derecho social dependerá de factores tales como la gravedad y razonabilidad del caso, su vínculo o afectación de otros derechos y la disponibilidad presupuestal del Estado, siempre y cuando pueda comprobarse acciones concretas de su parte para la ejecución de políticas sociales.

<sup>41</sup> Artículo 3º.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

empleador son los de sus trabajadores. Si no ocurre así, ellos pueden recurrir a la autoridad para que fuerce el cumplimiento de la norma.

Resulta claro que de tener carácter programático no podrían recurrir a la autoridad para su cumplimiento, por la falta de reglamentación.

Siendo más preciso Bernal Ballesteros (1996:220), indica que el trabajador es acreedor privilegiado frente a todo otro acreedor de su empleador. No hay otros derechos por sobre los de él, aunque estén respaldados por derechos reales de garantía. Desde luego, esta preferencia opera siempre, pero en particular, cuando se liquida un negocio y los activos no cubren los pasivos. En este caso, los primeros que cobran son los trabajadores hasta donde alcancen sus derechos. Esto quiere decir que, dado el caso, sólo ellos y nadie más podrá cobrar de los activos del empleador cuando no alcancen para más.

En ese sentido, el establecer una prioridad en el cobro a favor de los créditos laborales no importa una política de estado a largo o mediano plazo, ni un objetivo o meta a cargo de la entidad estatal que requiera un respaldo presupuestario; lo que resulta de esta norma es una forma de protección del trabajador.

No es casualidad por ello que prácticamente las normas de nivel infra constitucional que establecen prelaciones en el pago de los créditos se limiten a repetir y muchas veces a recalcar con mayor fuerza, que los créditos laborales son preferentes, no imponiendo condiciones para que dicha preferencia se haga efectiva.

Zavaleta Rodríguez (2005:96 ss.) sosteniendo una posición contraria respecto del carácter de norma auto aplicativo del segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución, menciona: “Es una norma de carácter programático que establece de manera general la prioridad o preferencia

de los créditos laborales frente a otra obligación del empleador”. Las normas programáticas añade, citando a Sagues, “Son reglas constitucionales no auto aplicativas o no auto operativas, ya que requieren del dictado de Leyes o reglas ordinarias complementarias o reglamentarias para entrar en funcionamiento (por eso, Goldschmidt las llama imperfectas o incompletas)”. Según este autor algunas veces, la constitución define claramente a la norma programática, ya que subordina su eficacia al dictado de una norma ordinaria (como sucede en nuestro caso con el artículo 27° de la Constitución). En otros casos -continúa el mencionado constitucionalista –el carácter programático deriva de la generalidad de los términos que emplea la constitución, que se da en el segundo párrafo del artículo 24° de la Constitución.

Fundamentando más su posición, agrega que aunque del texto de esta norma constitucional pareciera que esta prioridad es absoluta, la preferencia de los créditos laborales solo debe declararse ante casos excepcionales, justificados en razón que determinen soslayar, no solo la igualdad entre acreedores, sino el carácter persecutorio y de preferencia que otorga una garantía real, así, como el principio de prioridad registral. Dada la naturaleza programática del segundo párrafo del artículo 24° de la Constitución, requiere de una ley que determine su alcance y establezca sus limitaciones. Esa es la función del Decreto Legislativo 856, el cual - como expresamente se indica en el texto- precisa los alcances del “privilegio de los créditos laborales”. Así desde una interpretación sistemática, ambas normas deben ser asociadas para realizar el principio de “unidad y coherencia del ordenamiento jurídico” y obtener una norma jurídica completa”.

Por su posibilidad de ejecución, Rendón Vásquez (1988:205 ss), señala que las normas constitucionales de trabajo son: imperativas *per se*; declarativas de derechos u obligaciones con la prescripción expresa de que deben ejercerse en la forma que señale la ley; declarativas de derechos en

general cuyo contenido y alcance se halla tácitamente derivado a la Ley; y en delegatorias, en general al estado para dar las normas de aplicación o para intervenir.

En su libro “Derecho del Trabajo” Introducción, con referencia a la constitución de 1979, sostiene que son normas constitucionales imperativas por sí mismas, es decir que tienen vigencia sin necesidad de ley de aplicación, entre otras: El artículo 49, “El pago de las remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores es en todo caso preferente a cualquier otra obligación del empleador (...). Norma que como vemos se repite en igual o similar término en la actual Constitución de 1993.

Por su parte, Javier Mujica (2000:50 ss), manifiesta que en cuanto a la regulación de los derechos laborales, debemos efectuar el análisis de acuerdo a los modelos que pueden identificarse en las Constituciones modernas en esta materia. Encontramos cuatro modalidades de referencia a un derecho por una constitución: lo reconoce y detalla sus características centrales; lo reconoce, pero remite la precisión de sus características a la ley; no lo reconoce; y lo prohíbe.

En el primer tipo la Constitución tiene el mayor interés en el respeto de su derecho, porque lo considera específicamente relevante. Deja, por tanto al legislador un margen de desarrollo menor que los otros tipos. Esta modalidad se aplica para el núcleo de los derechos de un área. El segundo tipo, corresponde a los derechos de importancia intermedia. Aquí el legislador tiene un campo de acción más amplio para regular el derecho. En el tercero, la libertad del legislador es total para decidir si reconoce o no el derecho y de qué manera. Esta modalidad solo cabe, entonces, respecto de los derechos periféricos. Por último, el cuarto tipo se emplea por excepción para excluir de un derecho a algunos sujetos o limitarlo en ciertas circunstancias (por ejemplo los miembros de las Fuerzas Armadas y

la Policía respecto de la sindicación y la huelga, y esta misma cuando puede afectar la provisión de los servicios esenciales respectivamente).

Muy vinculada a la anterior se encuentra la distinción entre los grados de preceptividad con que la Constitución puede reconocer un derecho. Aquí la doctrina identifica básicamente dos: la inmediata, cuando el texto constitucional es suficiente para accionar en defensa del derecho ante el organismo jurisdiccional, y la aplazada, cuando se requiere del desarrollo del derecho por el legislador o la adopción de políticas de gobierno. La primera se da fundamentalmente en el primero de los modelos señalados antes, mientras que la segunda coincide más bien con el segundo tipo.

En todo caso, un concepto indispensable para el posterior desarrollo del derecho constitucionalmente consagrado es el del contenido esencial. En virtud de este, hay que determinar los aspectos que permiten reconocer un derecho y los intereses para los que se ha establecido.

El proyecto de reforma constitucional del 2002 precisa: “El pago de las remuneraciones, beneficios sociales y otros créditos laborales de los trabajadores es preferente a cualquier otra obligación del empleador conforme a Ley”.

Al margen de los fundamentos antes glosados por el cual también consideramos que no estamos ante una norma de carácter programático, un hecho que reafirmaría dicha posición es que el citado proyecto no tendría por qué remitirnos a la Ley, como la encargada de regular como se aplicara dicha preferencia, es decir delega al legislador la regulación de dicha preferencia. Que, como bien sabemos, dicha institución parlamentaria no ha sido muy generosa por decirlo de algún modo cuando ha tenido que desarrollar las normas laborales contenidas en la Constitución.

## SUB CAPITULO 8

### PRECEDENTES VINCULANTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL PODER JUDICIAL

#### 8.1. PRECEDENTES DEL TC

No podemos ingresar al comentario o análisis de las sentencias expedidas por el Supremo Intérprete de la Constitución sin que previamente tengamos en claro que efectos tiene en nuestro ordenamiento jurídico, en la magistratura nacional y en la población en general la jurisprudencia y los precedentes vinculantes que el Tribunal Constitucional expide en sus resoluciones.

Al respecto la Constitución, en su artículo 204° indica:

*“La Sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de su publicación, dicha norma queda sin efecto (...)”.*

Es en tal sentido que la referida norma declarada inconstitucional queda sin efecto, es decir invalida o expulsada de nuestro ordenamiento jurídico la norma impugnada.<sup>42</sup>

Es más el Tribunal Constitucional ha sostenido, además, que sus sentencias tienen **valor de ley**, lo que ha decir de Rubio Correa (2005: 380 y ss.); es correcto, porque el hecho de que tenga valor de ley no implica que se conviertan en ley: solo quiere decir que tienen el poder de una ley, y eso es cierto dado que pueden expulsar a las normas con rango de ley del sistema normativo y además efectuar control difuso de estas.

---

<sup>42</sup> STC Expediente N° 004-2001-I/TC.

Aunque a decir del referido autor tal vez hubiera sido más correcto que el tribunal dijera que sus sentencias tienen **fuerza de ley**, ya que el propio interprete de la Constitución ha dicho que la fuerza de ley no es igual al rango de ley, porque ésta últimas están expresamente indicadas por la Constitución en el artículo 204 inciso 4; así de una manera didáctica indica que los contratos – leyes es “un acuerdo de voluntades entre dos partes, que rige para un caso en concreto, sólo que está revestido de una protección especial, a fin de que no pueda ser modificado o dejado sin efecto unilateralmente por el Estado, siendo que dicho blindaje de ninguna manera lo convierte en ley; únicamente obliga a las partes que lo acordaron, en ejercicio de su libertad contractual y dentro de una relación jurídico patrimonial.”<sup>43</sup>

A raíz de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, se ha introducido en nuestro sistema jurídico el concepto de precedente Constitucional vinculante o precedente vinculante. Ello comporta que el Tribunal Constitucional tiene dos funciones básicas: por un lado resuelve conflictos, es decir es un tribunal de casos concretos; y, por otro, es un Tribunal de precedentes, es decir, establece, a través de su jurisprudencia, la política jurisdiccional para la aplicación del derecho por parte de los jueces del poder judicial y del propio Tribunal Constitucional para casos futuros.

El precedente constitucional, por su fuerza vinculante, tiene efectos similares al de una ley, esto es, que las reglas establecidas en él son de obligatorio e ineludible cumplimiento por parte de las personas y entidades de la administración pública, sin importar si han sido parte o terceros en el proceso en que se emitió.

---

<sup>43</sup> STC. Expediente N° 005-2003-AI/TC

Ha sido el propio Tribunal Constitucional quien ha determinado que la incorporación del precedente constitucional vinculante en el Código Procesal Constitucional, genera la necesidad de distinguirlo de la Jurisprudencia que emite este Tribunal<sup>44</sup>, puesto que el artículo VI del Código Procesal Constitucional y la Primera disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional N° 28301, los Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y reglamentos conforme a las disposiciones de la Constitución y a la interpretación que de ellas realice el Tribunal Constitucional a través de su Jurisprudencia en todo tipo de procesos. La Jurisprudencia constituye por lo tanto, la **doctrina** que desarrolla el Tribunal en los distintos ámbitos del derecho, a consecuencia de su labor frente a cada caso que va resolviendo.

Por otro lado, con el objeto de conferir mayor predictibilidad a la justicia constitucional, el legislador del Código Procesal Constitucional también ha introducido la técnica del precedente, en su artículo VII del Título Preliminar, al establecer “Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieran la autoridad de cosa juzgada constituye precedentes vinculantes cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo (...)”. De este modo, si bien tanto la jurisprudencia como el precedente constitucional tienen en común la característica de su efecto vinculante, en el sentido de que ninguna autoridad, funcionario o particular puede resistirse a su cumplimiento obligatorio, el Tribunal, a través del precedente constitucional, ejerce un poder normativo general, extrayendo **una norma** a partir de un caso concreto. En ese sentido, el precedente es una técnica para la ordenación de la jurisprudencia, permitiendo al mismo tiempo, que el Tribunal ejerza un verdadero poder normativo con las restricciones que su propia jurisprudencia deberá ir delimitando paulatinamente.

---

<sup>44</sup> Expedientes N° 03741-2004-AA/TC y STC 01333-2006-PA/TC.



### **8.1.1. PRESUPUESTOS PARA EXPEDIR UN PRECEDENTE VINCULANTE POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

En la sentencia N° 3741-2004-AA/TC-mencionado anteriormente- el Tribunal Constitucional ha considerado que constituye supuestos para la emisión de un precedente vinculante lo siguiente:

- a) La Constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la existencia de divergencias o contradicciones latentes en la interpretación de los derechos, principios o normas constitucionales, o de relevancia constitucional.
- b) La Constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de que los operadores jurisdiccionales o administrativos, vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de una norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida aplicación de la misma.
- c) Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, el Tribunal constata la Inconstitucionalidad manifiesta de una disposición normativa que no solo afecta al reclamante, sino que tiene efectos generales que suponen una amenaza latente para los derechos fundamentales. En este supuesto, al momento de establecer el precedente vinculante, el Tribunal puede proscribir la aplicación a futuros supuestos, de parte o del total de la disposición o de determinado sentidos interpretativos derivados del mismo; o puede también establecer aquellos sentidos interpretativos que son compatibles con la Constitución.

- d) Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante.

### **8.1.2. LOS PRECEDENTES VINCULANTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

Teniendo como fuente la Información General del Tribunal Constitucional, señalamos los precedentes vinculantes que hasta la fecha viene emitiendo el Supremo Interprete de la Constitución<sup>45</sup>.

1. STC N.º 3771-2004-HC, Caso Miguel Cornelio Sánchez Calderón (Plazo Razonable de la prisión preventiva)
2. STC N.º 3760-2004-AA, Caso Gastón Ortiz Acha (Inhabilitación Política)
3. STC N.º 1150-2004-AA, Caso Banco de la Nación (Procesos Constitucionales entre entidades de derecho público. Derecho de defensa)
4. STC N.º 2496-2005-HC, Caso Eva Valencia Gutiérrez (Libertad Personal. Detención Preventiva. Principio tempus regit actum)
5. STC N.º 2791-2005-AA, Caso Julio Soberon Márquez (Inhabilitación Política. Acceso a los medios de comunicación del Estado. Partidos Políticos)
6. STC N.º 2302-2003-AA, Caso Inversiones Dreams S.A. (Agotamiento de la vía previa en materia tributaria)
7. STC N.º 1417-2005-PA, Caso Manuel Anicama Hernández (Amparo Provisional. Contenido esencial del derecho a la pensión)
8. STC N.º 349-2004-PA, Caso Maria Contrina Aguilar (Libertad de Transito. Bien jurídico seguridad ciudadana)
9. STC N.º 1966-2005-HC, Caso César Augusto Lozano Ormeño (Responsabilidad del ente administrador)
10. STC N.º 0168-2005-PC, Caso Maximiliano Villanueva Valverde (Procedencia del proceso de cumplimiento)

---

<sup>45</sup> <http://www.tc.gob.pe/precedentesX.html>

11. STC N.º 2616-2004-AC Caso Amado Santillán Tuesta (Decreto Supremo N° 019-94-PCM y Decreto de Urgencia N° 037-94)
12. STC N.º 3482-2005-HC, Caso Augusto Brain Delgado (Libertad de transito. Bien Jurídico seguridad ciudadana)
13. STC N.º 5854-2005-PA, Caso Pedro Lizana Puelles (Amparo Electoral)
14. STC N.º 2802-2005-PA, Caso Julia Benavides García (Libertad de empresa. Amparo en materia municipal)
15. STC N.º 0206-2005-PA, Caso César Baylón Flores (Procedencia de amparo electoral)
16. STC N.º 3361-2004-AA, Caso Jaime Amado Álvarez Guillén (Ratificación de magistrados. Tutela procesal efectiva)
17. STC N.º 4677-2004-PA, Caso Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP (Derecho de reunión)
18. STC N.º 4227-2005-PA, Caso Royal Gaming S.A.C. (Impuesto casinos y tragamonedas)
19. STC N° 0030-2005-AI, Caso ley de la Barrera Electoral (limites a la s sentencias manipulativas)
20. STC N.º 4635-2004-PA, Caso Sindicato de Trabajadores de Toquepala (Jornada trabajadores mineros. Jornadas atípicas)
21. STC N.º 1257-2005-HC, Caso Enrique José Benavides Morales (Plazo del proceso y de detención en relación a la conducta obstruccionista del procesado)
22. STC N.º 2877-2005-PA, Caso Luis Lagomarcino Ramírez (Recurso de Agravio Constitucional) (Ley 23098. Pensión mínima o inicial)
23. STC N.º 5189-2005-PA, Caso Jacinto Gabriel Angulo (Ley 23098. Pensión mínima o inicial)
24. STC N.º 3075-2006-PA, Caso Escuela Internacional de Gerencia High School of Management – Eiger (Medidas preventivas o cautelares en sede administrativa)
25. STC N.º 3362-2004-PA, Caso Prudencio Estrada Salvador (Derecho de rectificación)
26. STC N.º 3741-2004-AA, Caso Ramón Salazar Yarlenque (Control difuso administrativo. Precedente vinculante y doctrina jurisprudencial)

27. STC N.º 1333-2006-PA, Caso Jacobo Romero Quispe (Ratificación de magistrados – reingreso a la carrera judicial)
28. STC N.º 9381-2006-PA, Caso Félix Vasi Zevallos (ONP – Bono de reconocimiento)
29. STC N.º 7281-2006-PA, Caso Santiago Terrones Cubas (Desafiliación de las AFP's)
30. STC N.º 4853-2004-PA, Caso Dirección General de Pesquería de La Libertad (Amparo contra amparo. Recurso de Agravio Constitucional)
31. STC N.º 6612-2005-AA, Caso Onofre Vilcarima Palomino (Pensión Vitalicia. Pensión de invalidez. Enfermedad profesional)
32. STC N.º 10087-2005-AA, Caso Alipio Landa Herrera (Pensión vitalicia. Pensión de invalidez. Enfermedad profesional. Decreto Ley 18846. Ley 26790)
33. STC N.º 0061-2008-PA, Caso Rímac Internacional (Arbitraje voluntario y obligatorio del D.S. 003-98-SA. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo)
34. STC N.º 5430-2006-PA, Caso Alfredo de la Cruz Curasma (Pago de devengados e intereses)
35. STC N.º 4762-2007-AA, Caso Alejandro Tarazona Valverde (Acreditación de Aportaciones)
36. STC N.º 2513-2007-PA, Caso Ernesto Casimiro Hernández Hernández
37. STC N.º 04650-2007-AA, Caso Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub-Oficiales de la Policía Nacional del Perú “Santa Rosa de Lima LTDA.” (Amparo contra amparo)
38. STC N.º 05961-2009-AA, Caso Transportes Vicente, Eusebio, Andrea S.A.C. (autos usados)
39. STC N.º 03052-2009-PA, Cobro de Beneficios Sociales y Reposición

## **8.2. INTERPRETACION DEL AGUNOS CASOS EFECTUADAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN MATERIA LABORAL**

Para nadie que este imbuido en el derecho e incluso para el ciudadano lego del que hacer jurídico de nuestro país, pude desconocer al margen de las

discrepancias que se pueda tener con los fundamentos de algunos de sus fallos e incluso con lo resuelto, el gran aporte del Tribunal Constitucional en nuestro que hacer jurídico, siendo quizás en materia laboral donde su contribución resulta más significativa; basta señalar algunos casos donde el Supremo interprete de la Constitución ha tenido que efectuar la interpretación de normas laborales de contenido constitucional no sin antes hacer una interpretación sistemática con otras normas constitucionales, para después efectuar una interpretación de las normas infra constitucionales desde o en armonía con la Constitución, para ello mencionaremos dada su amplitud algunos casos más saltantes: el de Telefónica <sup>46</sup> donde haciendo una interpretación no sólo de los artículos 22 y 27 de la Constitución, se amplió los supuestos de reposición al centro de trabajo, específicamente a los casos de despido sin expresión de causa o encausados, señalándose que la protección contra el despido arbitrario que se establece en el artículo 27 de la Constitución debe de considerarse como un mandato constitucional al legislador que no puede interpretarse como un encargo absolutamente abierto y que habilite al legislador a efectuar una regulación legal que llegue al extremo de **vaciar de contenido** el núcleo duro del citado derecho constitucional. Si bien el legislador tiene en sus manos la potestad de libre configuración de los mandatos constitucionales, también lo es que dicha potestad se debe ejercer respetando el contenido esencial del derecho constitucional. Una opción interpretativa diferente solo conducirá a vaciar de contenido los derechos constitucionales y convertiría a la ley que la acogiera en constitucionalmente inadmisibles.

Con esta interpretación dada por el Supremo Interprete de la Constitución, concluye que el segundo párrafo del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR, el cual establece que frente a un despido arbitrario corresponde una indemnización como única reparación era incompatible con la

---

<sup>46</sup> STC Expediente N° 1124-2001-AA/TC.

Constitución porque vaciaba de contenido el derecho al trabajo que implica acceder a un puesto de trabajo y por otra lado a no ser despedido una vez conseguido dicho puesto sin que medie causa justa de despido.

Cabía también mencionar su pronunciamiento en cuanto al artículo 25 de la Constitución Política de 1993, que dispone que la jornada máxima legal de 8 horas diarias o 48 semanales, en el caso de las Jornadas Atípicas<sup>47</sup> o acumulativas practicadas en el sector de la Minería.

Donde también se hace una interpretación desde la Constitución es el caso de Serpost<sup>48</sup>, donde el tribunal señaló en uno de sus considerandos que es claro que se trataba de determinar que el trabajador utilizó su correo electrónico para fines opuestos a los que le imponían sus obligaciones laborales, la única forma de acreditarlo era iniciando una investigación de tipo judicial, habida cuenta que tal configuración procedimental la imponía, para estos casos, la propia Constitución. Sin embargo, la demandada, lejos de iniciar una investigación como la señalada, ha pretendido sustentarse en su sola facultad fiscalizadora para **acceder a los correos personales** de los trabajadores, lo que evidentemente no está permitido por la Constitución, por tratarse de la reserva elemental a la que se encuentran sujetas las comunicaciones y documentos privados y la garantía de que tal reserva solo puede verse limitada por mandatos judiciales y dentro de las garantías predeterminadas por la ley.

Por último no podíamos dejar de mencionar el caso de la objeción de conciencia de un trabajador-médico-de Essalud, que en virtud a una resolución administrativa tenía que laborar los sábados, no obstante que sus creencias religiosas se lo impedía; el Tribunal Constitucional analiza la distinción entre libertad de conciencia y la libertad de culto, señalando que la libertad de conciencia está vinculada a la libertad de ideas; mientras que la

---

<sup>47</sup> STC Expediente N° 4635-2004-AA/TC de fecha 2 de mayo de 2006, aclarada al mes siguiente.

<sup>48</sup> STC Expediente N° 1058-2004-AA/TC.

libertad de religión , a la libertad de creencias; siendo que la libertad de conciencia toda persona tiene el derecho de formar su propia conciencia, no resultando descabellado afirmar que uno de los contenidos nuevos es la objeción de conciencia, que permite al individuo objetar el cumplimiento de un determinado deber jurídico, por considerar que tal cumplimiento vulnera aquellas convicciones personales generadas a partir de criterio de conciencia y que pueden provenir, desde luego, de profesar determinadas confesiones religiosas<sup>49</sup>.

### 8.3.- EL PRECEDENTE JUDICIAL

El sistema del Common law se ha desarrollado como precedente vinculante en sentido vertical; es decir, aplicable desde la Corte Suprema (caso norteamericano) hacia las Cortes y Juzgados inferiores del todo el Sistema Judicial. O sea, el efecto vinculante se establece aquí básicamente respecto de los Jueces. Cualquiera que invoque un precedente, para que éste logre sus efectos, deberá acudir ante un Juez, quien deberá aplicarlo en un caso concreto.

Nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-93-JUS, en su artículo 22 establece, lo que denomina doctrina Jurisprudencial, mediante la cual en forma trimestral se publican las resoluciones expedidas por las Salas Especializadas de Justicia de la Corte Suprema de la República, cuyas Ejecutorias fijan **principios jurisprudenciales** que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales.

Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como **precedente de obligatorio cumplimiento**. En caso que por

---

<sup>49</sup> STC Expediente N° 0895-2001-AA/TC.

excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.

Vemos que tratándose de precedentes judiciales también son de obligatorio cumplimiento por todos los órganos jurisdiccionales con la **salvedad** que un magistrado se puede apartar de dicho precedente de carácter obligatorio efectuando una debida motivación o fundamentación del porque de su discrepancia y por tanto de su apartamiento del precedente.

Es más, la norma permite que la propia Sala Suprema que estableció el precedente judicial vinculante pueda apartarse excepcionalmente de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial "El Peruano", en cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan.

## **PRECEDENTE LABORAL DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO LABORAL**

¿Que, tan vinculante es un Precedente de observación obligatoria Expedido por una de las Salas Laborales?

Si nos fijamos en nuestro ordenamiento no existe amparo legal alguno para que una de las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, pueda emitir precedentes de observaría obligatoria, puesto que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que las Salas Especializadas de la Suprema, publican trimestralmente las ejecutorias que fijan principios



jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento por todas las instancias judiciales. Pudiendo el magistrado apartarse del criterio, siempre que motive su resolución; entonces podemos decir que su cumplimiento obligatorio por los órganos jurisdiccionales es relativo.

Ni que decir que se ampara en el artículo 400 del Código Procesal Civil, dado que en el nos habla de un Pleno que es conformado por todos los integrantes de la Corte Suprema de la Replic, que establecerá doctrina jurisprudencial.

En cambio el precedente del Tribunal Constitucional tiene como característica en prima facie, los mismos efectos de una ley. Es decir, que el Tribunal externaliza como precedente a partir de un caso en concreto, es una regla para todos y frente a todos los poderes públicos siendo que los magistrados no se pueden apartar de los mismos aunque discrepen del precedente vinculante que también resulta aplicable por los particulares.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Es por ello, que el propio Tribunal Constitucional expidiera una sentencia (expediente 00006-2006-PC/TC), declarando “nulas” a un conjunto de resoluciones judiciales que habían incumplido y desconocido los precedentes vinculantes del mismo, poniendo posteriormente en conocimiento de la OCMA del Poder Judicial, para que proceda de conformidad con la resolución de Jefatura 021-2006-JOCMA/PJ, publicada en el diario El Peruano el 04 de abril del 2006 que dispone que: “(...) todos los Órganos Jurisdiccionales de la República, bajo responsabilidad funcional, den cabal cumplimiento a los Precedentes Vinculantes señalados por el Tribunal Constitucional”. Esto fue materia de crítica por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que manifestó que se estaría violando la independencia y la garantía de la cosa Juzgada.

Respaldando la posición del Tribunal Constitucional y de la OCMA, la Fiscalía de la Nación, en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 041-2010-MP-FN, publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de enero 2010, preciso “ que los jueces que emitan resoluciones judiciales contrarias al precedente vinculante cometen el delito de prevaricato porque fallan en contra el texto expreso y claro del artículo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y de la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional “.

Pero como bien sabemos también el Supremo Interprete de la Constitución con el devenir del tiempo efectúa lo que se denomina el Overruling, es decir un cambio de orientación jurisprudencial de igual forma lo puede efectuar el Poder Judicial.

### **PRECEDENTES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN MATERIA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA**

Entre los precedentes de observancia obligatoria emitidos por el Poder Judicial – Corte Suprema<sup>51</sup>, en materia Laboral y de Seguridad Social, tenemos:

1. Cas N° 173-04-LAMBAYEQUE. Aceptación de puesta de disposición de cargo.
2. Cas. N° 1524-2004-LAMBAYEQUE. Asignación por concepto de vivienda.
3. Cas N° 221-2006-LIMA. Aumento de remuneración: Inexigibilidad del acuerdo de la junta general de accionista.
4. Cas N° 090-2066-LIMA. Beneficios sociales: Retención.
5. Cas N° 1457-2004-PUNO. Bonificación diferencial: No se requiere resolución administrativa.
6. Cas N° 1871-2005-LMABAYEQUE. Bonificación especial para servidores públicos: servidores comprendidos.
7. Cas N° 871-2005-AMAZONAS. Bonificaciones otorgada por el Poder Ejecutivo: Implicancia para los servidores de Gobiernos Locales.
8. Cas N° 2308-2005-LAMBAYEQUE. Carrera Administrativa. Necesidad de cumplimiento de formalidad de incorporación.
9. Cas N° 603-2004-LIMA. Compensación graciosa e inventiva económicos: Diferencias.

---

<sup>51</sup> <http://127.0.0.1:2201/CLPLocal/contenidos.dll?f=templates&fn=default.html>

10. Cas N° 149-2005—PIURA. Contratación para Labores permanentes del Estado: Protección contra el despido.
11. Cas N° 1370-2005-LIMA, Contrato de trabajo bajo el régimen de exportación no tradicional: Plazo de duración.
12. Cas N° 1809-2004-LIMA. Contrato de trabajo para obra o servicio específico: Plazo máximo.
13. Cas N° 1004-2004-TACNA MOQUEGUA. Contrato de trabajo para obra o servicio específico.
14. Cas N° 1346-2006-LMABAYEQUE. Contrato de trabajo para obra o servicio específico.
15. Cas N° 1817-2004-PUNO. Contrato sujeto a modalidad: no desnaturalización por la naturaleza temporal del contrato.
16. Cas N° 1381-2005-CONO NORTE – LIMA. Convenio Colectivo: Favorece a los afiliados incorporados con posterioridad a su celebración.
17. Cas N° 1667-2004-LIMA. Convenio Colectivo: Modificación de contrato privado.
18. Cas N° 650-2005-PIURA. Validez y eficacia.
19. Cas N° 1876-2006-ICA. Despido de gerente antes de vencimiento de contrato: indemnización por despido arbitrario.
20. Cas N° 780-2005-LIMA. Despido por falta flagrante. Análisis restrictivo.
21. Cas N° 1887-2006-LIMA. Despido nulo, queja o participación del trabajador en proceso por el empleador.
22. Cas N° 874-2004-JUNIN. Despido nulo requisitos de la queja.
23. Cas N° 2313-2006-LA LIBERTAD. Despido nulo: trabajadora en evidente estado de gestación.
24. Cas N° 137-2005-SANTA. Despido nulo: tramitación de reclamo ante Es salud no lo configura.
25. Cas N° 602-2004-LIMA. Despido por representantes de la SBS en banco en liquidación: Integración en la SBS en la relación procesal.

26. Cas N° 1364-2005—LIMA. Determinación de régimen laboral: relación laboral con el Estado.
27. Cas N° 1364-2005-LIMA. Determinación del régimen laboral: Relación laboral con el Estado.
28. Cas N° 775-2005-LIMA. Falta grave: Indemnización por daños y perjuicios a favor del empleador.
29. Cas N° 1210-2005-LAMBAYEQUE. Falta grave: Omisión de control por parte del supervisor.
30. Cas N° 1465-2004-JUNIN. Incentivo para renunciar: aceptación tacita.
31. Cas N° 460-2006-LIMA. Indemnización por despido arbitrario: Computo de cálculo.
32. Cas N° 2306-2004-LIMA. Indemnización por el no goce vacacional: Para los gerentes.
33. Cas N° 2076-2005-LA LIBERTAD. Indemnización por el no goce de vacaciones: Para los gerentes.
34. Cas N° 2147-2004-LIMA. Información falsa proporcionada por el trabajador. Necesidad del ánimo de perjudicar al empleador.
35. Cas N° 476-2005-LIMA. Irrenunciabilidad de los derechos laborales: Inaplicabilidad.
36. Cas N° 1363-2005-LIMA. Inspección a solicitud de los trabajadores: Causal de despido nulo.
37. Cas N° 076-2005-LAMBAYEQUE. Locación de servicios en Empresa en Liquidación. Inaplicación del principio de primacía de la realidad.
38. Cas N° 1739-2003-PUNO. Locación de servicios fraudulento: Nulidad de contrato.
39. Cas N° 726-2002-CAJAMARCA. Nepotismo: Configuración en comité formado por entidades públicas y privadas.
40. Cas N° 2386-2005-CALLAO. Nulidad de despido: Diferencia de trato de trabajadores.

41. Cas N° 673-2006-JUNIN. Nulidad de despido. Necesidad de acreditar el nexo causal entre el despido y la causa alegada.
42. Cas N° 1128-2005-LALIBERTAD. No pago de pensión: Intereses.
43. Cas N° 1191-2005-LA LIBERTAD. Pago de pensión: Momento efectivo de devengamiento de los intereses.
44. Cas N° 1467-2006-LIMA. Pago de pensión: criterio uniforme de pago de intereses.
- 45. Cas N° 2117-2003-LA LIBERTAD: Persecutoriedad de créditos laborales: No es oponible al tercero registral.**
46. Cas N° 677-2006-LA LIBERTAD. Principio de inmediatez: aplicación conjunta con el principio de razonabilidad.
47. Cas N° 2169-2003-LIMA. Principio de primacía de la realidad: aplicación de contratos celebrados por la administración pública.
48. Cas N° 339-2005-PUNO. Principio de primacía de la realidad: Relación laboral indeterminada en proyecto especial estatal.
49. Cas N° 1917-2003-LIMA. Procedimiento de despido: Plazo de duración.
50. Cas N° 2031-2004-CONO NORTE –LIMA. Puesta a disposición del cargo: Alcances.
51. Cas N° 1440-2004-LIMA. Relación entre el trabajador y sindicato: Naturaleza asociativa.
52. Cas N° 135-2004-DEL SANTA. Reducción de derechos laborales por convenio colectivo.
53. Cas N° 2224-2005-LIMA. Reducción de remuneración: Tiene que constar en acuerdo expreso.
54. Cas N° 1781-2005-LIMA. Reducción de remuneración por acuerdo entre trabajador y empleador no es válido.
55. Cas N° 951-2005-LIMA. Relación laboral: novación subjetiva por cambio de empleador.
56. Cas N° 495-2005-LIMA. Remuneración integral: calculo de la liquidación.

57. Cas N° 1724-2004-LIMA. Remuneraciones devengadas: Para trabajadores repuestos vía acción de amparo.
58. Cas N° 729-2006-DEL SANTA. Representación sindical: Autorización anticipada para modificación de acuerdo, convenio o laudo arbitral.
59. Cas N° 1211-2006-ICA. Sanciones laborales: Acto de los trabajadores público que no constituye falta tipificada.
60. Cas N° 932-2002-LIMA. Solidaridad de empresas vinculadas en el pago de beneficios sociales.
61. Cas N° 306-2006-LIMA. Trabajador Comisionista: Calculo de remuneración vacacional.
62. Cas N° 1875-2005-PIURA. Trabajador de confianza de sector público: Efectos de la pérdida de confianza.
63. Cas N° 1130-2006-CAJAMARCA. Trabajador de confianza de sector público: percepción simultanea de remuneración y pensión del estado.
64. Cas N° 2046-2005-LIMA. Utilidades: Porcentaje distribuible para empresas de extracción petrolera.
65. Cas N° 1740-2006-HUAURA. Causal casatoria de contradicción de resoluciones: Necesidad de pluralidad de resoluciones.
66. Cas N° 2018-2006-CUSCO. Aplicación indebida de normas.
67. Cas N° 1428-2006-LAMBAYAQUE. Obligación de señalar claramente las causales.
68. Cas N° 639-2006-CUSCO. Contravención al debido proceso como causal.
69. Cas N° 210-2006-JUNIN. Contravención al debido proceso como causal.
70. Cas N° 08-2004-LA LIBERTAD. Incorporación de la causal por contravención al debido proceso.
71. Cas N° 1672-2006-PIURA. Debido proceso: motivación suficiente y falta de apelación.

- 72. Cas N° 1725-2005-PIURA. Debido proceso: Contravención por motivación genérica.
- 73. Cas N° 890-2005-AREQUIPA. Derecho de petición administrativa: No limitación a los recursos administrativos
- 74. Cas N° 718-2006-ICA. Motivación de resoluciones: necesidad de justificar la falta de eficacia de resolución judicial.
- 75. Cas N° 2166-2003-LIMA. Potestad nulificante: Ejercida por la Corte Suprema vía casación.
- 76. Cas N° 1408-2005-PIURA. Plazos procesales: no afectación por vacaciones del personal del poder judicial.
- 77. Cas N° 2278-2004-HUAURA. Presentación de medios probatorios en apelación: Examen de pertinencia y oportunidad.
- 78. Cas N° 784-2006-CALLAO. Prueba de la relación laboral: Necesidad de determinar grado de subordinación y dependencia.

#### **8.4. LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO Y LOS PRECEDENTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL PODER JUDICIAL**

Como bien sabemos el Recurso de Casación en nuestro país es un medio impugnatorio extraordinario que no solo busca la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas sino que además busca unificar los criterios jurisprudenciales.

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, en su artículo 34 se contempla como causales para interponer el recurso de casación: La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia de la

República, siendo el sustento de la norma el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

La nueva Ley Procesal del Trabajo ha optado por establecer como una de las causales de este recurso que la resolución impugnada por esta vía haya sido emitida sin considerar los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o por la propia Corte Suprema de la República, todo con la finalidad de unificar criterios que permitan una adecuada tutela Jurisdiccional; resulta claro que bastaría que la resolución expedida por cualquiera de estos dos órganos indique expresamente su carácter de precedente vinculante (Tribunal Constitucional) o Precedente de obligatorio Cumplimiento (Poder Judicial) para que habilite a una de las partes a interponer el recurso de casación siempre y cuando en la resolución materia de casación no haya sido tomado en cuenta.

Uno de los problemas que se pueden presentar ésta vinculada con la primera de las causal para interponer el recurso de casación que se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; al abordar la referida causal (Toyama. b : 199 y ss.) dice que “está sustentada en el análisis que deberá realizar la Sala Suprema de la Infracción Normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada a través del recurso de casación, dejándose de lado el análisis relacionado a la interpretación errónea, inaplicación o aplicación indebida de una norma de derecho material exigida por la normatividad anterior”.

Hemos señalado o establecido la distinción entre la Jurisprudencia o Doctrina Jurisprudencial y el Precedente Vinculante, mediante los cuales el Supremo Interprete de la Constitución expande o extiende el carácter vinculante de sus resoluciones, solo a los magistrados que



sería en caso de la primera y además de estos a la administración y ciudadanía en general en el caso del segundo; por lo que podemos colegir que si el Tribunal Constitucional indica que determinado supuesto constituye un precedente vinculante, todos los órganos judiciales, administrativos y la ciudadanía en general tendría que interpretar y aplicar la norma bajo esos mismos términos, de lo contrario se estaría entre una de las causales para interponer el recurso de casación respectivo.

Pero que sucede con la Jurisprudencia o Doctrina Jurisprudencial Vinculante que se encuentra contemplada en el artículo VI de Código Procesal Constitucional, a simple vista diríamos que al no haberse indicado expresamente que constituye precedente vinculante no estaría dentro de una de las causales para interponer recurso de casación; pero cabría analizar si una “infracción normativa” podría configurarse si el Tribunal Constitucional señalara a través de su Jurisprudencia o doctrina Jurisprudencial como se debe interpretar o aplicar determinada norma laboral y no obstante ello, dicha interpretación no es secundada por órganos judiciales pese a su incidencia en el caso concreto; veamos un ejemplo aunque no es estrictamente de carácter laboral nos permite advertir ciertas interrogantes: Hasta hace poco el Tribunal Constitucional venía considerando en su jurisprudencia que el computo del plazo de 30 días para la prescripción de los amparos interpuestos contra resoluciones judiciales se iniciaba desde la notificación cuestionada o , en el mejor de los casos, desde que adquiría y concluía luego de treinta días de notificada esta; pero últimamente con el Expediente N° 002-252-2009-PA/TC-LIMA, analizando el contenido literal del artículo 44 del Código Procesal Constitucional ha cambiado el sentido de su interpretación al respecto, indicando que la conclusión en realidad se produce luego de treinta días hábiles de notificada la resolución que ordena se cumpla lo decidido y no a los treinta días en que la

resolución en cuestionamiento queda firme o es notificada esta. Así en aplicación del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional ha decidido reconocer tal interpretación expresamente como parte de su **doctrina jurisprudencial vinculante** y por lo tanto, obligatoria para todos los jueces y tribunales del país.<sup>52</sup>

¿Cabría la posibilidad de ser el caso interponer recurso de casación por la causal de Infracción Normativa frente a una Doctrina Jurisprudencial? La respuesta a esta interrogante seguramente se despejará con el devenir de los casos que se presenten.

Resulta sumamente importante analizar cuáles han sido los fundamentos que han servido como sustento al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL al momento de expedir sus resoluciones cuando existe de por medio un crédito laboral, para ello necesitamos previamente conocer o conceptualizar algunas instituciones que si bien no son todas de carácter netamente laboral, pero nos permiten tener una mejor comprensión de la importancia que para el Supremo Interprete de la Constitución tienen los créditos laborales.

## 1. DEL PRINCIPIO PERSECUTORIO

Vemos de las resoluciones del Tribunal Constitucional, que en varias de ellas se emplea el término principio persecutorio como también se refieren a la acción persecutoria del crédito laboral.

Como bien sabemos la definición que recoge y que tiene mayor aceptación en la doctrina es la formulada por Pla Rodríguez

---

<sup>52</sup> Al respecto se puede ver la Revista Dialogo con la Jurisprudencia N° 143, paginas 87-92, donde en atención al problema producido por el lapso que puede pasar entre la fecha de emisión de una resolución firme que pone fin a un proceso judicial (que adquiere autoridad de cosa juzgada) y la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido, es que el Tribunal Constitucional invoca a los jueces y salas de la República a que actúen con la debida diligencia de modo que los plazos no se extiendan irrazonablemente.

(1978:9), Según este autor, los principios son líneas directrices que informan a las normas e inspiran soluciones y sirven en diversas fases de la vida normativa.

La doctrina se pregunta si la recepción de los principios por el ordenamiento es necesaria para su vigencia o siquiera conveniente. Hay acuerdo en que la plasmación de los principios en una norma no es indispensable para tenerlos como aceptados en un ordenamiento. Ello sería recomendable solo si hiciera en fórmula que no resultara limitativa de sus alcances.

Para el citado autor y en ello también coincide gran parte de la doctrina que el principio de irrenunciabilidad de derechos prohíbe precisamente que los actos de disposición del titular de un derecho recaigan sobre derechos originados en normas imperativas y sanciona con la invalidez la transgresión de esta regla. La Invalidez afecta a la cláusula que contiene la disposición vedada y no a todo el acto.

Esto viene a colación puesto que cuando se habla de la créditos laborales lo asocian o vinculan a la irrenunciabilidad de derechos dado el carácter prioritario de cobro de las deudas de naturaleza laboral, pero para poder hablar propiamente de irrenunciabilidad de derechos tiene que haber un acto de disposición mediante el cual el trabajador exprese su voluntad de no querer afectar los bienes de su empleador para hacerse cobro de su crédito laboral, situación que por demás resulta poco probable.

Pero al margen de los aspectos doctrinarios lo que el Tribunal Constitucional quiere resaltar cuando nos habla del principio persecutorio de los créditos laborales es darle una gran relevancia o resaltar la importancia que tiene la ejecución crédito laboral en cuanto a su cobro por parte de los trabajadores.

### **Contratos de compra venta de embarcaciones pesqueras.**

Resulta necesario para poder ver los alcances de las Resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional en los casos donde se habría producido la transferencia de propiedad de una embarcación pesquera por parte de la empresa deudora laboral a favor de un tercero -aunque no se precisa la fecha de la transferencia- se colige que se ha cumplido con los tramites y registros respectivos de acuerdo con lo establecido por las disposiciones legales respectivas, aunque no es nuestro objetivo ingresar a ver los requisitos para adquirir, registrar, tener la licencia respectiva, etc., para poder incursionar en la actividad pesquera.

Así tenemos que conforme a la Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 25977 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2001-PE, se establece que la construcción y adquisición de embarcaciones pesqueras deberá contar con autorización previa de incremento de flota otorgada por el Ministerio de Pesquería, en función de la disponibilidad, preservación y explotación racional de los recursos hidrobiológicos; debiendo contar para ello con permiso de pesca del Ministerio de Pesquería además se debe cumplir con Registrarla en el **Registro de Propiedad de Embarcaciones Pesqueras**, que tiene carácter público, siendo que en el Registro General de Pesquería se inscriben los bienes y los derechos y gravámenes que los afecten, así como las resoluciones administrativas y judiciales susceptibles de inscripción.

De lo que podemos colegir que la Inscripción Registral del nuevo propietario de la embarcación que perteneció al empresario deudor en nada impidió el carácter persecutorio de los créditos laborales,

ni tampoco el hecho de que el Tercero adquiriente haya actuado de buena fe o que desconocía de la existencia de un crédito laboral impago por parte de su vendedor.

### **El Arrendamiento Financiero O Leasing**

Veremos también que en uno de los casos se ha presentado que un inmueble de una empresa deudora laboral fue adquirido por una entidad bancaria, quien lo otorgo luego en arrendamiento financiero a la misma empresa deudora laboral, para posteriormente darla en arrendamiento a una tercera empresa, habiéndose dispuesto el embargo del inmueble de propiedad en ese momento del banco.

Resulta importante previamente determinar en que consiste el Leasing, que es el sistema mediante el cual se alquila un determinado activo o bien de capital, como maquinaria o equipo a largo plazo, que es adquirido en propiedad previamente (en primera instancia) por un banco o arrendadora (empresa especializada) a solicitud del empresario (arrendatario), bien que es cedido en uso (arrendamiento) a este último por un determinado plazo pactado, a cambio del pago de cuotas periódicas (por lo general mensuales), a cuyo final del plan de pagos, el empresario o arrendatario tiene la opción de **adquirir la propiedad** del bien arrendado por un pago simbólico.

También se puede adquirir por intermedio de leasing todo tipo de bienes, sean inmuebles (como uno de los casos) para la instalación o expansión de plantas industriales, comerciales, oficinas, etc., sean bienes muebles, como máquinas industriales embarcaciones, aeronaves, vehículos (incluso flotas), entre otros.

En cuanto a la oponibilidad antes de la Ley de Garantía Mobiliaria N° 28677 si se daba un leasing sobre un bien sin registro de propiedad donde pudiera inscribirse el derecho, como por ejemplo, una máquina de coser, existía el riesgo de que el arrendatario vendiera el bien a un tercero que, actuando de buena fe, lo reputara propietario o que le impusiera un gravamen.

En esta situación, el derecho del arrendador difícilmente podría ser oponible, pues la regla del artículo 948 del Código Civil es contundente: en caso de bienes muebles (sin registro) la posesión equivale al título, lo cual desincentivaba el leasing de este tipo de bienes.

Este problema ha sido resuelto por la referida ley, ya que al estar registrado el leasing sobre el bien que se posee, el arrendatario no podrá sorprender a un tercero de buena fe. La prioridad y la oponibilidad están determinadas ahora por la inscripción en el Registro Mobiliario de Contratos o en el registro respectivo.

Pero retomando nuestro caso, tal parece que el empresario deudor, antiguo propietario del inmueble, el cual fue transferido a la entidad bancaria quien luego se lo arrienda a la misma empresa deudora laboral pero tal parece que se resolvió el arrendamiento financiero del referido inmueble pasando el bien a una tercera empresa; por lo que se presupone que se han efectuado las Inscripciones Registrales respectivas, sin embargo esto tampoco fue un impedimento para que el Tribunal Constitucional se pronunciará a favor del crédito laboral.

Cabría hacer una salvedad en el sentido de que el bien materia de persecución tiene que haber sido de propiedad del empleador en algún momento, situación que no se daría en el supuesto de que

el inmueble o una la embarcación puede haber estado en posesión del empleador deudor bajo arrendamiento financiero o leasing, pero éste nunca llega a hacer propietario del misma, en esta situación no procedería la persecución del bien puesto que se debe partir de que el bien materia de preferencia o persecutoriedad perteneció o mejor dicho fue de propiedad del empleador.

### **Dación en Pago**

La dación en pago es un acto bilateral entre un deudor y acreedor por el cual este último recibe como cancelación total o parcial una prestación distinta de la que debía cumplirse. Ha sido prevista como un medio de facilitar el cumplimiento de las obligaciones, por cuanto permite al deudor, siempre con el asentimiento del acreedor, contar con una posibilidad más de cumplimiento, aparte de la prestación originaria.

En nuestro Código Civil se encuentra el artículo 1266, que dispone que la dación en pago en donde se determina la cantidad por la cual el acreedor recibe el bien se regula por las de la compra venta. Así también, a semejanza de la compraventa de bien inmueble, no está sujeta a formalidad para transferir la propiedad.

### **Compra Venta Con Reserva De Dominio - Principio De Fe Pública Registral**

Se encuentra contemplado en el artículo 2014 del Código Civil, que establece: “El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no conste en los Registros

Públicos. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro”.

No podemos dejar de resaltar el hecho de que el Supremo Interprete de la Constitución, en las resoluciones materia de comentario más adelante, no ingresa al análisis de la actuación del tercero adquiriente, es decir sí la compra que efectuara la realizó de buena o mala fe, si actuó en connivencia con el vendedor deudor del crédito laboral, si la transferencia se efectuó antes o después del surgimiento del crédito laboral, el tiempo transcurrido desde la adquisición, la fecha de su inscripción en los registros públicos y si existía previamente alguna anotación que indicara de la existencia del crédito laboral, el tiempo transcurrido, la cadena de sub adquirientes, etc.; entre otras disquisiciones que seguramente serían válidas de recurrirse a una acción pauliana o revocatoria como hemos visto, pero que de aplicarse cuando estamos frente a un crédito laboral haría casi imposible su cobro.

Por tanto parece que existe una concordancia entre lo manifestado por las diversas Salas de la Corte Suprema<sup>53</sup> y el Tribunal Constitucional<sup>54</sup>, en considerar que basta la existencia de un

---

<sup>53</sup> Salvo la Casación N° 21117-2003, expedía por Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia; del 08 de abril del 2005, publicada el 04 de enero pasado, con calidad de precedente vinculante; en la Casación interpuesta por el tercero adquiriente en un proceso sobre Tercería de Propiedad, señala que compro dos vehículos de su anterior propietaria-deudora laboral, transferencia efectuada el 12 de julio del 2001, siendo que al 03 de mayo del 2002, dichos vehículos no registraban afectación, estando probado con los certificados de gravamen que obran en el expediente, que la medida cautelar fue posterior a la transferencia de los vehículos sub litis por lo que debe aplicarse el artículo 2012 del Código Civil; no obstante que el proceso laboral se inició en diciembre de 1998 y que la transferencia de los vehículos se efectuó cuando el expediente de beneficios sociales se encontraba para sentenciar.

<sup>54</sup> En el Expediente: 02424-2004-AA/TC, Ica, a los 18 días del mes de febrero del 2005, el Tribunal Constitucional en un proceso de amparo contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, en un proceso de ejecución de garantías seguido por COFIDE S.A. contra Andimar S.A., mediante el cual se convocó a tercer remate público el 17 de junio del 2002, el inmueble afectado con garantía hipotecaria se adjudicó a dicha entidad, no obstante que al recurrente (trabajadora) por resolución N° 33, de fecha 12 de enero 2001, en el proceso laboral seguido contra la Andimar no obstante ha sido adjudicado a favor de COFIDE en el proceso de ejecución de garantía por resolución N° 187, de 03 de octubre de 2002, a pesar que la adjudicación obtenida a su favor se realizó en aplicación del artículo 7° de la Ley N° 26116; en este caso el tribunal se



crédito laboral y la falta de pago para aplicar la persecución de los bienes del empleador, por lo que se colige que la preferencia frente a otras obligaciones del empleador incluso la hipotecaria también quedaría desplazada, puesto que en derecho quien puede lo más puede lo menos.

*“Resulta compatible lo establecido como precedente vinculante obligatorio por la sala suprema cuando existe de por medio un crédito laboral con la jurisprudencia del tribunal constitucional en materia”.*

## **2. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

**Exp. N° 4056-2006-PA/TC**

**De 19 de Junio del 2006.**

Ante el recurso de agravio constitucional interpuesto por Pesquera San Juan Bautista S.A. contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda.

Con fecha 5 de abril del 2004 la referida empresa Pesquera interpone demanda de amparo contra el séptimo juzgado laboral de Chimbote a fin de que se deje sin efecto la Resolución N° 18, de fecha 16 de julio del 2003, que resuelve ampliar la medida cautelar de embargo en forma de retención sobre las cuentas que tiene en los bancos.

---

inclino por el aspecto formal puesto que no se había inscrito el convenio de liquidación extrajudicial en los Registros Públicos donde se encuentran los bienes del deudor, conforme lo disponía el artículo 15 de la Ley N° 26116 y 18 del Decreto Legislativo N° 845 Ley de Reestructuración Patrimonial.

En tal sentido concluye el Tribunal, no puede oponerse a los terceros, en este caso COFIDE, que teniendo un derecho real de garantía inscrito a su favor como la hipoteca, llevo a cabo correspondiente proceso de ejecución de garantía a efectos de satisfacer su crédito toda vez que el artículo 1097° del Código Civil, prevé que dicha garantía otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado.

Señala que se vulnera su derecho al debido proceso, específicamente su derecho de defensa, pues a pesar de no haber sido emplazada en el proceso sobre reposición, seguido por un trabajador contra la Empresa Pesquera Gamur S. A., la resolución cuestionada pretende en etapa de ejecución de sentencia, que pague créditos laborales adeudados por la precitada empresa, en aplicación del principio persecutorio.

La Sala Superior de Justicia de Santa, declaro improcedente la demanda por considerar que la resolución 18, debió ser impugnada conforme a los medios establecidos en el artículo 50° y siguientes de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, es decir en la vía ordinaria más no a través del amparo.

Habiendo sido apelada dicha resolución ante la Sala de derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, no se queda en un pronunciamiento formal, sino que ingresa al análisis de aspectos de fondo, al señalar que no se advertía la afectación de derechos fundamentales de la recurrente puesto que cuando adquirió la embarcación “Maracaibo”, **se configuro el supuesto exigido por la norma para la aplicación del principio persecutorio de los créditos laborales**, además no existió indefensión, pues la recurrente se apersono al proceso ordinario.

El Tribunal Constitucional señalo que la recurrente quiere que se deje sin efecto la resolución 18 que amplía el embargo, siendo dos los argumentos : 1) que ha sido puesto en estado de indefensión pues no formo parte del proceso de reposición entre el trabajador y la empresa pesquera Gamur y no ha podido contradecir los actos que le resultan desfavorables, y 2) que el juzgado emplazado ha aplicado incorrectamente el Decreto

Legislativo N° 856, en el extremo que establece el carácter persecutorio de los créditos laborales.

Con respecto al primer punto el Tribunal Constitucional se remite a pronunciamientos anteriores cuando ha tratado lo concerniente al derecho de defensa, indicando que “se conculca cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. Agrega que resulta claro que no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión reprochada por el contenido constitucionalmente protegido del derecho. Esta es constitucionalmente relevante cuando la indefensión se genera en una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Y se produce agrega el Tribunal sólo en aquellos supuestos en que el justiciable se ve impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos “(Exp. N° 0582-2006-PA/TC).

Más adelante agrega el Tribunal Constitucional que debe desestimarse este extremo de carácter procesal o adjetivo alegado por la recurrente puesto que el proceso de reposición iniciado por el trabajador contra la Pesquera Gamur concluyo con la sentencia de fecha 20 de febrero de 1996, donde se declaro fundada la demanda. En esa etapa procesal la demandante no participó dado que no fue demandada y en ese sentido no resultaba exigible su incorporación al proceso. Pero en autos obra un escrito del 20 de mayo de 1999, donde la recurrente se apersonó al proceso de reposición que ya estaba en ejecución de sentencia, solicitando desestimar la pretensión del trabajador, pedido que dio lugar a que se expida la Resolución 41, de fecha 22 de setiembre de 1999, mediante la cual se acepta su apersonamiento.

Como podemos apreciar la recurrente participo en el proceso desde setiembre de 1999, siendo que la resolución que amplía el embargo y que es objeto de cuestionamiento es del 16 de julio del 2003; por tanto a la recurrente no se le afectado su derecho a la defensa.

En cuanto al segundo punto, el Tribunal Constitucional, señala que en procesos de amparo contra resoluciones judiciales no se pueden cuestionar materias de exclusivas competencia de la jurisdicción ordinaria, como es, en este caso, la competencia para interpretar la ley en lo que se refiere a la aplicación del principio persecutorio en materia de créditos laborales, por lo que es de aplicación el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional.

Como podemos apreciar en esta primera resolución que es de fecha anterior a las otras, el Tribunal Constitucional no ingresa al análisis si el Juzgado laboral ha hecho una correcta o incorrecta aplicación del Decreto Legislativo 856, en concordancia con la norma constitucional sobre la preferencia del crédito laboral.

Pero la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, si entro al rebatir el segundo agravio de la recurrente consistente en la incorrecta interpretación del principio persecutorio de los créditos laborales, señalando que cuando la recurrente adquirió la embarcación pesquera de la deudora laboral empresa Gamur S.A., se configuro el supuesto exigido para la aplicación del principio persecutorio.

¿Cuál es el supuesto exigido por la norma para la aplicación del principio persecutorio?

Aunque no se indica expresamente en la resolución del Tribunal Constitucional persentencia del pero de las resoluciones expedidas anteriormente por la Salas Supremas.

En la citada resolución no indica en qué fecha se efectuó la transferencia de la embarcación entre las citadas empresas pesqueras, pero se puede colegir que fue después del surgimiento del crédito laboral; tampoco se analiza la buena o mala fe con la que adquirió la embarcación la recurrente.

Por último, la improcedencia de la acción de amparo fue suscrita en ese entonces por seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional.

**Expediente N° 09539-2006-PA/TC y Exp. N° 09725-2006-PA**

Acá se trata de dos hechos similares que han sido objeto de pronunciamiento en los Expediente N° 09539-2006-PA/TC y N° 09725-2006-PA., en tal sentido haremos un sólo comentario que resulta aplicable para los dos casos.

El recurso de agravio constitucional fue interpuesto por el Banco de Crédito del Perú contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 6 de julio del 2006, que confirmando lo apelado declaro improcedente la demanda.

Resulta que el 22 de setiembre del 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Tercer Juzgado Laboral de Chimbote y la Sala Laboral de la Corte Superior de Santa, solicitando se deje sin efecto las resoluciones por las cuales se declara fundada la acción persecutoria de un trabajador sobre un

inmueble de propiedad de la entidad bancaria y le exigen el pago de S/. 5,936.88 bajo apercibimiento de embargo del mencionado bien; afectando de esta forma su derecho al debido proceso, en particular sus derechos a una resolución justa y a la defensa, además del derecho de propiedad.

Sostiene el recurrente que **adquirió el inmueble en el año 2001 de la pesquera María Teresa, a quien se le otorgó posteriormente el mismo inmueble en arrendamiento financiero**, arrendamiento que luego sería transferido a Tecnología de Alimentos S.A., sin embargo en el año 2004, en etapa de ejecución de una resolución judicial proveniente de un proceso laboral de pago de beneficios sociales interpuesto por un trabajador contra su empleadora Pesquera María Teresa, se afectó el inmueble que ya no era de propiedad de esta última sino del Banco.

El 12 de octubre de 2005 la Sala Civil de la Corte Superior de Santa declaró Improcedente la demanda tras considerar que “ el amparista en su escrito de demanda, sólo se limita en señalar que se ha violado su derecho al debido proceso y a una resolución objetiva y justa; pero no precisa en forma detallada como se han vulnerado dichos derechos”, siendo que dicha resolución es confirmada por la instancia suprema, ya que lo que se pretendía es cuestionar un proceso regular y el criterio jurisdiccional, no siendo ello posible en el proceso de amparo.

El Tribunal Constitucional al pronunciarse con respecto al derecho de defensa por no haber sido notificado desde el inicio del proceso, en el que finalmente se ha dispuesto en ejecución la afectación de un bien que actualmente le pertenece; reitera lo

indicado en la sentencia anterior por lo cual nos releva de mayor comentario.

En cuanto a lo que nos interesa referente a los créditos laborales indica el Supremo Interprete de la Constitución advierte que el en Tercer Juzgado Laboral de Chimbote, el juez estableció que la venta efectuada por la empresa deudora pesquera María Teresa a favor del Banco de Crédito, fue realizada “ con el único objetivo de evadir créditos laborales ya que en forma inmediata en que transfirió la propiedad al banco, este se lo arrienda con opción de compra por parte del referido banco a la demandada, existiendo una ficción legal”.

En base a lo sostenido el párrafo precedente, el juez a quo determinó que en presente caso resultaba de aplicación lo dispuesto en los artículo 2 y 3, inciso b), así como el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 856, que desarrollan los artículo 24 y 26.2 de la Constitución. En el sentido de dar preferencia al crédito laboral, así como su carácter irrenunciable, permitiendo acciones persecutorias de parte del trabajador, incluso cuando el empleador haya transferido la propiedad o los activos de la empresa a terceros, para evadir sus obligaciones frente a los trabajadores, como en el presente caso.

En esta resolución a diferencia de la primera que comentáramos, el Supremo Interprete de la Constitución, ingresa a ver lo concerniente a la preferencia de los créditos laborales y su carácter persecutorio; así aunque no lo dice expresamente pero se desprende de su sentencia, que hace suyo los fundamentos expresados por el juzgado laboral que la transferencia y posterior arrendamiento del inmueble por parte de la deudora

laboral, se efectuó con el objeto de evadir créditos laborales; por tanto se aplicó correctamente la norma legal y Constitucional.

En este caso existe indicios que han llevado a concluir que la maniobra efectuada por la empresa de transferir primero la propiedad a la entidad bancaria e inmediatamente poseer el mismo inmueble bajo la modalidad de arrendamiento financiero conservando la propiedad el banco de crédito; lo realizó para eludir sus obligaciones laborales, no ingresando al análisis si el banco recurrente actuó de buena o mala fe al momento de adquirir la embarcación, si desconocía la existencia de adeudos laborales por parte de su vendedora, si resultaba sospechoso que el banco compre una embarcación a una empresa para posteriormente dársela a ella misma en arrendamiento, si hubo concertación entre ambos para eludir el pago de los créditos laborales; puesto que basta que exista una deuda laboral y la existencia de bienes que pertenecieron al deudor para aplicar la persecutoriedad de los mismos.

Cabe resaltar la relevancia que le otorga a la sentencia laboral cuyo fallo no se ejecutaba y con ello se violaría el derecho al debido proceso además de hacerse improbable que el trabajador pueda cobrar sus beneficios sociales que como sabemos tienen carácter alimentario; al sostener el Tribunal Constitucional “que no se puede alegar violación al debido proceso, toda vez que las instancias judiciales han actuado en el marco de la Constitución y la Ley a efectos de dar pleno cumplimiento de una sentencia judicial que declara derechos laborales”.

Esto agrega no impide que el Banco recurrente pueda accionar contra la empresa pesquera María Teresa, por los perjuicios



ocasionados de derechos de contenido patrimonial; es decir deja la posibilidad de que la entidad bancaria pueda repetir o accionar contra la empresa que le ha causado el perjuicio.

**Expediente N° 6411-2007-PA/TC**

**Lima, 18 de noviembre de 2008**

El recurso de agravio constitucional es interpuesto por Hurón Equities INC, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, que declaro Improcedente la demanda de amparo.

El 24 de enero de 2007, la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra los integrantes de la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Lima y contra el Juez del 19 Juzgado, con la finalidad de que se declare la nulidad de la resolución de vista de fecha 27 de noviembre de 2006, expedida en el proceso sobre pago de beneficios sociales seguido por un trabajador contra las empresas Inversiones Gran Hotel Bolívar S.A. e inmobiliaria Cesar Víctor S.A. Alega que se ha violado su derecho a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y de defensa.

La empresa recurrente señala que en el proceso laboral y tras haberse declarado fundada la demanda interpuesta por el trabajador se ordeno a las emplazadas que cumplan solidariamente con pagar el monto al que ascienden los beneficios sociales del trabajador demandante. Sin embargo por intermedio de una carta notarial que le remite una de las codemandadas se enter a el 17 de enero del 2007, en etapa de ejecución que el juzgado habría dispuesto mediante resolución de fecha 24 de mayo de 2006, que la medida de embargo trabada en forma de administración sobre los bienes de las

empresas aludidas debía de extenderse también contra la empresa recurrente y contra María Eliza Silva Hidalgo.

La Sala Civil de Vacaciones de la Corte Superior de Lima, declaro improcedente la demanda invocando el inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, al considerar que el demandante tiene el Código Procesal Civil para hacer valer sus derechos que manifiesta se estarían afectando. La Sala Suprema confirmo la apelada, tras considerar que los magistrados emplazados han motivado sus resoluciones.

El Tribunal Constitucional al pronunciarse indica que la extensión del embargo a la recurrente y a su arrendataria, doña María Eliza Silva Hidalgo, trabada en forma de administración hasta por la suma de S/. 20,983.64, fue dispuesta por el órgano de segunda instancia ello, por considerar que habiéndose comprobado que la codemandada inmobiliaria Cesar Víctor S.A. **transfirió en dación de pago**, el inmueble ubicado en el Jr. De la Unión N° 958-Lima, a favor de la recurrente (Equities) y que a su vez ésta lo transfirió en arrendamiento a doña María Eliza Silva, resulta aplicable el principio persecutorio de los bienes del negocio previsto en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 856, conforme al cual cuando existe incumplimiento de obligaciones respecto de derechos laborales de los trabajadores, en el que **se evidencia la existencia de dolo o fraude para evadir el cumplimiento de dichas obligaciones** debe estarse al principio de persecutoriedad y preferencia de los créditos laborales.

Como podemos apreciar también en este caso se ha producido una de transferencias de la propiedad un bien inmueble que perteneció en algún momento al empleador deudor laboral, que posteriormente ha sido dado en arrendamiento a un tercero; no

contamos con la resolución de la Sala Laboral, en la cual dispone que se haga extensivo el embargo a la recurrente como a su arrendataria, para saber los fundamentos o motivos que llevaron a dicha instancia judicial en aplicar el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 856, siendo suficiente como se colige que exista el incumplimiento en el pago de los beneficios sociales del trabajador para determinar que la transferencia de los bienes del empleador se realiza con dolo o fraude, como parece ser una constante en todos los casos.

Más adelante el Tribunal Constitucional reitera en cuanto a la errónea interpretación y aplicación del Decreto Legislativo 856, que la interpretación de las normas infra constitucionales donde no se comprometen derechos fundamentales, es competencia exclusiva de los jueces del Poder Judicial en el marco de los procesos ordinarios, no correspondiendo al juez Constitucional el “corregir” o imponer una determinada forma de entender las leyes o Reglamentos(STC 8329-2005-HC/TC,FJ4), máxime si como se aprecia en el presente caso, **la interpretación del artículo 3 del Decreto Legislativo se ha hecho en concordancia con lo que prevé el artículo 24 de la propia constitución con relación a la tutela y preferencia de los derechos y beneficios laborales.**

Con lo manifestado por el Supremo Interprete de la Constitución queda claro cuál es la interpretación y alcance que le da al artículo 24 segundo párrafo de nuestra Constitución. Como vemos no ingresa al análisis que si la recurrente Hurón Equities adquirió el inmueble de buena o mala fe, si tenía conocimiento de la existencia de una deuda de carácter labora pendiente por parte de su transfiriendo (inmobiliaria Cesar Víctor S.A.), si la deuda laboral fue anterior o posterior a la transferencia del

inmueble, si se encuentra inscrita en Registro Público, tiempo transcurrido desde la transferencia, etc.

**Expediente: 00122-2007-PA/TC**

**Huacho, 18 de diciembre de 2007**

**El recurso de agravio constitucional es interpuesto por el Banco de Crédito del Perú, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que declara IMPROCEDENTE la demanda.**

Con fecha 07 de julio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Primer Juzgado Laboral de Chimbote y la Sala Superior de Justicia de Santa, solicitando que se deje sin efecto la resolución del 08 de abril de 2005 que fuera confirmada por la sala emplazada, donde se le requiere a la recurrente el pago de la deuda laboral bajo apercibimiento de embargo.

La entidad bancaria refiere haber adquirido la propiedad de la embarcación Nélide-B, antes denominada Costa Mar III, a la pesquera Aquarius y mediante escritura pública de la misma fecha celebro con Pesquera Preko un contrato de arrendamiento financiero por un plazo de 72 meses, manteniendo entonces el banco la propiedad de la embarcación mientras que Pesquera Preko detentaría la posesión; sin embargo en el mes de febrero 2005, tomo conocimiento que ante el Primer Juzgado Laboral de Chimbote se tramitaba un proceso judicial de pago de beneficios sociales seguidos por un trabajador contra pesquera Aquarius SRL en el que el banco no era parte, siendo notificado con la resolución del 15 de febrero de 2005, por la que se corre traslado el pedido del trabajador para que se aplique la acción persecutoria sobre la embarcación Nelida-B, pedido que fue declarado procedente, requiriéndose al BCP el pago de la deuda

laboral como si fuera deudor solidario de Pesquera Aquarius, lesionando de este modo su derecho al debido proceso, defensa y propiedad.

De igual forma que los anteriores se desprende que el Supremo Interprete de la Constitución hace suyo los fundamentos expresados por los órganos jurisdiccionales, al resaltar el razonamiento del Juez laboral que en el presente caso resultaba de aplicación el artículo 3, inciso b), así como el artículo 4 del Decreto Legislativo 856, que desarrolla el artículo 24 de la Constitución, en el sentido de dar preferencia al crédito laboral; por otro lado debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 26.2 de la propia Constitución, en cuanto al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley, por lo que es posible la existencia de acciones persecutorias de parte del trabajador, incluso cuando el empleador haya transferido la propiedad o activos de la empresa a terceros, para **evadir sus obligaciones** frente a los trabajadores como ocurre en el proceso de autos.

Como vemos el sustento en que se basa el Tribunal Constitucional para declarar improcedente la demanda, no solo contiene aspectos procesales sino que recurre a la propia Constitución y al Decreto Legislativo 856, como normas sustanciales para explicar porque de la acción persecutoria de los bienes del empleador aunque hayan sido transferidos a terceros e incluso registrados.

Manteniendo su posición en cuanto al tercero adquirente deja a salvo el derecho del banco adquirente presumible de buena fe, de poder repetir contra el empleador deudor por la lesión de derechos de contenido patrimonial.

Se entiende que el banco adquiere el bien bajo la fe de registral, en tanto en la partida de la embarcación no aparecía registrado crédito laboral alguno, tampoco existía la anotación de la demanda de cobro de beneficios laborales o un embargo preventivo (por lo menos no se hace mención de ello en la sentencia).

#### **8.5. COMPULSA DE LOS CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DE LA CORTE SUPREMA**

Antes de ingresar a ver si existe concordancia entre lo resuelto por la Sala Transitoria de Derechos Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, como precedente de cumplimiento obligatorio, con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de créditos laborales, tenemos que mencionar una serie de cuestionamientos a los precedentes emitidos por las Salas Supremas del Poder Judicial, al amparo del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en especial a lo que es materia de nuestro trabajo cuando se ha pronunciado sobre los créditos laborales como precedente de obligatorio cumplimiento, como son :

- 1) Existiendo en el caso de las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, puede tan sólo la permanente o transitoria establece Precedentes de obligatorio cumplimiento por los demás Órganos Jurisdiccionales.
- 2) Que, tan vinculante puede ser para la Sala Permanente( en el caso de los Créditos Laborales) el precedente establecido por la Sala Transitoria, puesto que de las Casaciones expedidas se colige que no comparte dicho criterio; es más podemos advertir que ni siquiera la propia Sala Transitoria en sus posteriores

resoluciones a respetado su propio precedente de obligatorio cumplimiento.

- 3) Los casos donde ha existido de medio un crédito laboral frete a otro de distinta naturaleza, no solo se han pronunciado vía recurso de Casación las Salas de Derecho Constitucional y Social, sino también las Salas Supremas Civiles, cuya posición resulta contraria a la del precedente establecido en la Causa 177-2003.
- 4) Por otra parte la Sala Transitoria no precisa cual es el principio que fija, que será invocado por la Magistratura como precedente de obligatorio cumplimiento.

### CAPITULO III

#### INVESTIGACION REALIZADA

##### 1. El problema investigado

Uno de los sustentos de por los cuales no se debe otorgar preferencia al crédito laboral, se encuentra en la falta de conocimiento de su existencia generando por ello, problemas cuando produce alguna transferencia de bienes por parte de un empleador deudor hacia un tercero que desconocía de su preexistencia; pero esa falta o carencia de algún signo de reconocibilidad sea por la carencia de un registro o de cualquier otra forma donde se pueda tomar conocimiento de que existe un crédito laboral impago y los bienes que se encontrarían afectados al cumplimiento de sus obligaciones laborales, sería una de las principales causas de inseguridad jurídica en nuestro país.

Vemos que en la compra y venta de inmuebles, donde la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. La naturaleza del artículo 949 del Código Civil legitima el solo consenso entre el vendedor y acreedor para transmitir la propiedad, con lo cual se descarta el elemento constitutivo de la inscripción en los registros.

Es así, que terceros ajenos a la compra venta del inmueble desconocen quien es su propietario, siendo que la gran mayoría de inmuebles en nuestro país no se encuentran registrados o estando, los sucesivos propietarios no lo han hecho a su nombre, porque en nuestro país la inscripción de la propiedad de inmuebles no es constitutiva, por ello, existen en los diferentes órganos jurisdiccionales un gran número de conflictos que en fondo buscan como pretensión que se les declare propietarios o su mejor derecho sobre la propiedad de un inmueble,.



Por otra parte, cabría preguntarnos sí el hecho de establecer la preferencia del crédito laboral frente a otros créditos y en especial frente al hipotecario, incide gravitantemente en su encarecimiento .

Por lo que cabría hacernos las siguientes preguntas:

- I).- ¿La falta de algún signo de reconocibilidad es exclusiva del crédito laboral?
- II).- ¿El crédito laboral es el mayor causante de inseguridad jurídica en nuestro país?

## **2. Tipo de investigación**

En razón al problema seleccionado la investigación tiene un carácter descriptivo, analítico y explicativo.

- Es descriptiva porque señalamos cuales son los fundamentos que sustentan la preferencia del crédito laboral.
- Es analítico porque estudiamos las diferentes resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional así mismo por el Órgano Jurisdiccional, cuando ha existido de por medio un crédito laboral frente a otros derechos
- Es explicativa porque con esta investigación estamos resaltando que la falta de algún signo de reconocibilidad del crédito laboral no puede ser óbice para denegar su carácter preferente y mucho menos imputarle ser causante de la inseguridad jurídica en nuestro país

## **3. Técnicas de investigación**

La recopilación es el método de investigación que recurrimos para analizar el presente trabajo, particularmente efectuamos un análisis jurisprudencial

donde ha existido de por medio un crédito laboral, realizando en este caso el acopio de la información a través de revistas, jurisprudencias, libros, paginas Web, etc.; asimismo se ha utilizado la revisión de convenios de la OIT referidos al tema de investigación,

#### **4. Universo y muestra**

##### **4.1.- Universo**

La investigación tiene como universo los procesos de Tercería donde estaba de por medio un crédito laboral impago frente a otros derechos resueltos tanto por las Salas Civil y Laborales de la Corte Suprema de la República, desde el 2001 hasta la actualidad, pero sobre todo en las resoluciones expedidas por el Supremo Interprete de la Constitución cuando ha tenido que pronunciarse sobre la preferencia del crédito laboral.

##### **4.2.- Muestra**

Se ha tomado como muestra para el caso del Tribunal Constitucional, todos los procesos donde el Supremo Interprete de la Constitución, se ha pronunciado sobre la preferencia del crédito laboral, no obstante el cambio de sus integrantes a lo largo de su creación.

#### **5. Recolección de información**

La recopilación es el método de investigación que recurrimos para analizar el presente trabajo, particularmente efectuamos un análisis jurisprudencial donde ha existido de por medio un crédito laboral, realizando en este caso el acopio de la información a través de revistas, jurisprudencias, libros, paginas Web, etc.

#### **6. Contrastación de hipótesis**

Para el desarrollo de nuestra investigación se formuló las hipótesis siguientes:

### **1.- HIPOTESIS**

La falta de algún signo de reconocibilidad no es exclusiva del crédito laboral ya que la transferencia de propiedad de inmuebles se produce con el mero consentimiento de las partes.

### **2.- HIPOTESIS**

La preferencia del crédito laboral no origina mayor inseguridad jurídica en nuestro país, si la comparamos con la transferencia de propiedad.

## **6.1.- Variables Independientes (X)**

### **6.1.1. Falta de signo de Reconocibilidad del crédito laboral**

- No es exclusiva

### **6.1.2. La preferencia del crédito laboral**

- No genera mayor inseguridad jurídica.

## **6.2. Variable Dependiente (Y)**

**6.2.1.-** Puesto que el principal derecho real carece de todo signo de reconocibilidad.

**6.2.2.-** Si la comparamos con la compra venta de inmuebles.

## **7. Comprobación de hipótesis**

Que el mayor numero de conflictos en materia de derechos reales versan sobre el derecho de propiedad y en especial sobre la propiedad de bienes inmuebles, generando con ello un gran número de conflictos que versan sobre dicho derecho, basta remitirnos al información del Centro de Investigaciones Judiciales que señala que los recurso de casación presentados ante la Sala Civil Transitoria de La Corte Suprema del año 2003, de un total de 1223 casos, 560 (45.79%) se refieren a obligaciones; 331 (27.06%) casos derechos reales; 158 (12.92%).

Esto quiere decir que los procesos sobre derechos reales son los segundos que más se emplean. Ahora bien de ese total (331), específicamente 94 versan sobre tercería de propiedad, 16 mejor derecho de propiedad, 14 sobre prescripción adquisitiva de dominio y 8 sobre interdicto de recobrar; sin contar los proceso de ejecución de garantías (193); de lo que se desprende que la mayor inseguridad jurídica tiene como origen el derecho o la transferencia de propiedad inmueble en nuestro país

Con el análisis de la jurisprudencia efectuada llegamos a colegir que la preferencia del crédito laboral frente a otras obligaciones del empleador, viene siendo aplicada en forma extensiva conforme a la norma constitucional e incluso su carácter persecutorio se da sobre bienes inscritos a favor de terceros, siendo en la practica un gravamen de carácter real.

Tampoco podemos negar la existencia excepcional de supuestos donde no resultaría aplicable dicha preferencia o persecutoriedad como seria el caso de una transferencia realizada antes del surgimiento del crédito laboral.

## **CAPITULO IV**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

#### **SUB-CAPITULO 1**

##### **CONCLUSIONES**

1. Que, la preferencia de los créditos laborales consagradas por nuestra Constitución, viene siendo interpretada y aplicada de manera uniforme tanto por los órganos judiciales así como por el Tribunal Constitucional, no obstante la colisión con otras normas de nuestro ordenamiento, especialmente las contenidas en el Código Civil, pero ante las muchas posibilidades que tiene el empleador para evadir su crédito se ha preferido dotar a la preferencia del crédito laboral de ciertas prerrogativas que otros créditos no cuentan.
2. Que, la norma constitucional y el Decreto Legislativo N° 856 son objeto de muchos cuestionamientos unos con mayor asidero que otros, teniendo erróneamente muchas veces como punto de partida normas infra constitucionales que la Constitución.
3. La preferencia y la persecutoriedad de los créditos laborales están tan ligadas o complementadas que no se puedan separar una de otra, son consecuencias o su extensión.
4. Que, las entidades bancarias si bien pueden verse afectadas por la no ejecución de sus garantías o en sus propiedades por la preferencia de un crédito laboral, ello no tiene tanta repercusión económica ni social dado el número de sus operaciones crediticias y a la diversidad de sus colocaciones e ingresos.

5. Se colige de las resoluciones expedidas por el supremo interprete de la Constitución que hace suyo los fundamentos de los órganos jurisdiccionales para otorgar la preferencia del crédito laboral, siendo suficiente que éste se encuentre impago y el empleador tenga o haya tenido bienes para honrar dicha obligación, presumiendo la actitud fraudulenta del empleador, no siendo relevante la buena o mala fe del tercero.

## **SUB-CAPITULO 2**

### **RECOMENDACIONES**

Muchos autores recomiendan que el Perú debe cambiar el Sistema de Privilegio por la creación de un Fondo de Garantía Salarial que como su mismo nombre lo indica garantiza el pago de los adeudos laborales cuando el empleador no puede cumplir con sus obligaciones para con sus trabajadores, pero restringido a un periodo de tiempo y por un monto determinado, cuyo financiamiento sería de exclusividad de los empleadores que con sus aportes mensuales realizados en función de un porcentaje de la remuneración, serviría para financiar dicho organismo.

De antemano la creación de un Fondo de Garantía no puede significar la eliminación del sistema de privilegios sino un complemento donde el trabajador podría cobrar parte del monto adeudado de ser el caso; no solo cuando se produzca la declaratoria de insolvencia del empleador sino en cualquier situación donde resulte poco probable que el trabajador cobre sus beneficios sociales adeudados.

Debemos comentar que en España los créditos laborales también son objeto de cuestionamientos tanto por trabajadores como por empleadores que ven en la preferencia salarial un tema pendiente hasta el momento de solución definitiva, no obstante su creación en 1976.

Una de las objeciones aparte del cuestionamiento a la entidad encargada de su administración como podría ser la Seguridad Social, la cual no ha demostrado eficiencia en su gestión, provendría de los aportantes a dicho Fondo de Garantía que verían en su contribución otro sobrecosto laboral que les impediría ser más competitivos en un mundo globalizado; todo ello, aunado a la existencia de una gran informalidad en las relaciones laborales y la poca fiscalización de las

empresas en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, hace por ahora poco posible su creación en nuestro país.

Resulta necesario frente a lo que se ha devenido en llamar el “tema torturado” de los privilegios del crédito laboral encontrar una respuesta que satisfaga a todas las partes involucradas puesto que hasta la actualidad es un problema pendiente de solución definitiva.



## ANEXOS

### ANEXO I

#### JURISPRUDENCIA

##### **CAS. N° 2117-03 LA LIBERTAD. (El Peruano, 4 de enero de 2005)**

Lima, ocho de abril del dos mil cinco.- **La Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República: VISTOS:** con los acompañados: en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Vocales: Walde Jáuregui, Villacorta Ramírez. Dongo Ortega, Acevedo Mena y Estrella Cama, luego de verificada la votación con arreglo a ley emite la siguiente sentencia: **MATERIA DEL RECURSO:** Recurso de casación interpuesto a fojas doscientos cinco por el demandante don José Sabino Aguirre Avila contra la sentencia de vista de fojas ciento noventicuatro, su fecha doce de setiembre del dos mil tres que revocó la sentencia apelada de fojas ciento sesenticuatro, de fecha veinticinco de febrero de dos mil tres que declaró fundada la demanda con lo demás que contiene y reformándola, la declaró infundada: en los seguidos contra don Guillermo Enrique Benites Lavado y otra sobre Tercería de Propiedad. **Y CONSIDERANDO: Primero:** Que aun cuando el accionante ha sustentado su recurso de casación en las normas del Código Procesal Civil, resulta evidente que son de aplicación al caso de autos las disposiciones de la Ley Procesal de Trabajo - Ley veintiséis mil seiscientos treintiséis: en tal sentido, aplicando la norma jurídica que corresponde –conforme al mandato contenido en el artículo sétimo del Título Preliminar del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al presente proceso– debe señalarse que el recurso de casación interpuesto por el demandante don José Sabino Aguirre Avila reúne los requisitos de forma exigidos por el artículo cincuentisiete de la Ley Procesal de Trabajo: y en consecuencia, corresponde analizar si cumple con las exigencias de fondo contenidas en el artículo cincuentiocho de la glosada norma procesal. **Segundo:** Que, amparado en el inciso segundo del artículo trescientos ochentiséis de la Ley Procesal –lo que debe entenderse como una clara referencia al inciso c) del artículo cincuentiséis de la Ley veintiséis mil seiscientos treintiséis– el recurrente denuncia la inaplicación de una norma de derecho material señalando que en ningún considerando de la recurrida se han aplicado, para resolver el caso de autos, las normas de derecho material contenidas en los artículos dos mil doce, dos mil trece, dos

mil catorce y dos mil dieciséis del Código Civil, que –según el recurrente– legitiman y reafirman su derecho de propiedad sobre los vehículos de placa de rodaje YD - dos mil quinientos treintisiete y ZD - tres mil catorce, debidamente adquirido de su anterior propietaria, la codemandada doña Rosa Silvia Lázaro Salirrosas y, por tanto, le dan derecho a interponer la presente acción, pues no puede responder con sus bienes por una deuda que no ha contraído y menos conocía. **Tercero:** Que, en tal sentido, considera el recurrente que la Sala Laboral ha vulnerado su derecho de propietario, pues sin haber efectuado una debida valoración de las pruebas, ha extraído conclusiones que no existen en el proceso como aquella en la que señala que resulta evidente que la codemandada doña Rosa Lázaro Salirrosas ha transferido los vehículos objeto de la medida cautelar con la intención de sustraerse de su obligación laboral; lo que a juicio del demandante constituyen afirmaciones que no han sido probadas de ningún modo con medios idóneos y suficientes que demuestren la existencia de simulación, sin embargo, si se encuentra probado con los certificados de gravámenes que obran en el expediente acompañado –*según se sostiene*– que la medida cautelar fue posterior a la transferencia de los vehículos sublitis razón por la cual considera que debió aplicarse la norma de derecho material contenida en el artículo dos mil doce del Código Civil. Asimismo, se ha denunciado que no se ha aplicado el artículo dos mil trece del Código Civil, pues su derecho de propiedad continúa con toda su eficacia jurídica mientras no se haya declarado judicialmente su invalidez, para lo cual tendría que interponerse la acción judicial correspondiente, lo que evidentemente no se ha hecho, alegándose que, no siendo este tipo de proceso abreviado la acción idónea para así determinarlo, como se pretende mediante la sentencia que se impugna que en base a conclusiones no probadas –según se afirma– revoca la sentencia de primera instancia y la reforma declarándola infundada. De otro lado se denuncia que tampoco se ha aplicado el artículo dos mil catorce del Código Civil, en tanto el recurrente en su calidad de tercero de buena fe adquirió a título oneroso el derecho de propiedad de la persona que en el registro aparecía con facultades para otorgarlo manteniendo por tanto su adquisición una vez inscrito su derecho aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos agregando que su buena fe se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Por último, se ha sostenido que no se ha aplicado la norma material que contiene el artículo dos mil dieciséis del Código Civil pese a que –*según se afirma*– se encuentra acreditado en autos que el derecho de propiedad del recurrente es anterior al mandato de la medida cautelar que obtuvo el codemandado Benites Lavado con lo cual se estaría vulnerando este principio jurídico al desestimarse su pretensión en base a supuestos

no probados. Que, así fundamentadas estas denuncias resulta evidente que se ha dado cumplimiento a las exigencias contenidas en el inciso c) del artículo cincuentiocho de la Ley Procesal de Trabajo razón por la cual deberán ser declaradas procedentes.

**Cuarto:** Que, de otro lado, se ha alegado la inaplicación de la doctrina jurisprudencial, habiéndose señalado que se han soslayado abundantes pronunciamientos jurisdiccionales emitidos por los Tribunales de Justicia del país en casos similares al que es materia de litis, como las ejecutorias recaídas en los expedientes números dos mil ciento veintiuno-noventicinco, ochenticuatro-noventa-siete-entre otros. Que, al no encontrarse regulada en la Ley Procesal Laboral la causal de inaplicación de la doctrina jurisprudencial –que evidentemente es diferente de la causal de contradicción jurisprudencial– resulta jurídicamente imposible admitirla, razón por la cual corresponde que sea declarada **improcedente**.

**Quinto:** Que habiéndose declarado la procedencia de las denuncias de inaplicación de los artículos dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil dieciséis del Código Civil de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo cincuentiocho de la Ley Procesal del Trabajo, corresponde emitir pronunciamiento de fondo.

**Sexto:** Que, tanto la sentencia de primera instancia como la de vista concuerdan en señalar que la transferencia de los vehículos de placa de rodaje YD - dos mil quinientos treintisiete y ZD - tres mil catorce por parte de doña Rosa Lázaro Salirrosas a favor del ahora demandante don José Sabino Aguirre Ávila, se produjo el doce de julio del dos mil uno habiéndose precisado en el primer considerando de la sentencia de primera instancia que al tres de mayo del dos mil dos, dichos vehículos no registraban afectaciones.

**Sétimo:** Que, el fundamento principal de la sentencia de vista para desestimar la demanda de tercería radica en que la codemandada doña Rosa Lázaro Salirrosas se dedica al transporte de carga pesada (actividad en razón de la cual el codemandado Guillermo Benites Lavado le inició un proceso laboral en el cual se dictaron las medidas cautelares que motivan el presente proceso) desde diciembre de mil novecientos noventa y ocho y que al haberse transferido la propiedad de los vehículos sublitis cuando el expediente sobre beneficios sociales se encontraba expedito para sentenciar, resulta evidente –según el Colegiado Superior– que la mencionada codemandada transfirió dichos vehículos objeto de medida cautelar con la intención de sustraerse de su obligación de carácter laboral, pues si bien ha alegado que dicha venta se realizó con la finalidad de pagar sus deudas, sin embargo, no ha cumplido con cancelar el crédito laboral que tiene carácter prioritario y preferente, agregando que al contestar la demanda del presente proceso la citada emplazada se allanó solicitando se levante la medida cautelar.

**Octavo:** Que, no obstante lo afirmado por el Colegiado Superior este ha soslayado los hechos afirmados por el

Órgano Jurisdiccional de Primera Instancia, donde acertadamente se ha señalado que en autos no aparecen medios probatorios idóneos y suficientes que demuestren la existencia de simulación en el acto jurídico de compraventa de los vehículos sublitis como podría ser el indicio de un conocimiento previo del comprador de la preexistencia del proceso judicial ni tampoco –según se afirma en el quinto considerando de la sentencia de primera instancia– de limitaciones patrimoniales del comprador precedentes a la adquisición del vehículo, ni existencia indiciaria de vínculo de parentesco del comprador con la ex empleadora. **Noveno:** Que, a mayor abundamiento debe señalarse que conforme establece el artículo dos mil catorce del Código Civil, el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho aunque después se anule rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos, precisándose además que la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro; en tal sentido, al no existir medios probatorios idóneos en autos que determinen la ausencia de buena fe en el accionar del ahora demandante –pues la sentencia de vista no desvirtúa el fundamento fáctico de la sentencia de primera instancia que resolvió amparar la demanda– corresponde amparar el reclamo del accionante en razón de lo establecido en la norma sustantiva en mención, y además en los artículos dos mil doce, dos mil trece y dos mil dieciséis del Código Civil, cuya aplicación resulta trascendente para la solución de la presente litis, no obstante lo cual, han sido inaplicadas por el Colegiado Superior. **Décimo:** Que, el recurrente únicamente ha impugnado el extremo referido a su pretensión principal, habiendo consentido el pronunciamiento de primera instancia que desestimó su pretensión indemnizatoria, razón por la cual esta última decisión no será modificada; fundamentos por los cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo cincuentinueve de la Ley veintiséis mil seiscientos treintiséis - Ley Procesal del Trabajo: **DECLARARON: FUNDADO** el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos cinco, por el demandante don José Sabino Aguirre Avila, en consecuencia: **NULA** la sentencia de vista de fojas ciento noventicuatro, de fecha doce de setiembre del dos mil tres, y **actuando en sede de instancia: CONFIRMARON** la sentencia apelada de fojas ciento sesenticuatro, de fecha veinticinco de febrero del dos mil tres, que declara **FUNDADA** la demanda en el extremo referido a la tercería de propiedad, con lo demás que contiene e **infundada** en el extremo que pretende indemnización; en los seguidos contra doña Rosa Silvia Lázar Salirrosas y otro sobre Tercería de Propiedad e indemnización; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano que sienta precedente de

observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley; y los devolvieron.

SS. WALDE JAUREGUI; VILLACORTA RAMIREZ; DONGO ORTEGA; ACEVEDO MENA; ESTRELLA CAMA



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 04056-2006-PA/TC  
SANTA  
PESQUERA SAN JUAN BAUTISTA S.A.

### RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 19 de julio de 2006.

#### VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Pesquera San Juan Bautista S.A. contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 61 del segundo cuadernillo, su fecha 1 de setiembre de 2005 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y,

#### ATENDIENDO A

1. Que con fecha 5 de abril de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo contra el Séptimo Juzgado Laboral de Chimbote con el objeto de que se declare sin efecto la Resolución N.º 18, de fecha 16 de julio de 2003, que resuelve ampliar la medida cautelar de embargo en forma de retención sobre las cuentas corrientes que posee la recurrente en diversas entidades financieras. Refiere que se vulnera su derecho al debido proceso, específicamente su derecho de defensa, pues a pesar de no haber sido emplazada en el proceso sobre reposición seguido por Celso San Martín Camacho contra la empresa pesquera Gamur S.A., la resolución cuestionada pretende, en etapa de ejecución de sentencia, que pague créditos laborales adeudados por la precitada empresa, en aplicación del principio persecutorio.
2. Que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, con fecha 26 de enero de 2005, declaró improcedente la demanda por considerar que la Resolución N.º 18, de fecha 16 de julio de 2003, debió ser cuestionada de conformidad con lo establecido por el artículo 50.º ss. de la Ley Procesal del Trabajo N.º 26636. Por su parte la recurrida confirmó la apelada estimando que no se advertía la vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, toda vez que cuando la demandante adquirió la embarcación denominada *Maracaibo*, se configuró el supuesto exigido para la aplicación del principio persecutorio de los créditos laborales, arguyendo también que no existió indefensión, pues la recurrente se apersonó al aludido proceso.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

3. Que de la revisión de autos se desprende que la pretensión es que se deje sin efecto la Resolución N.º 18, de fecha 16 de julio de 2003, que resuelve ampliar la medida cautelar de embargo en forma de retención sobre las cuentas corrientes de la accionante, alegándose fundamentalmente dos argumentos: a) que ha sido puesta en estado de indefensión pues no formó parte del proceso de reposición interpuesto por Celso San Martín Camacho contra Empresa Pesquera Gamur E.I.R.L. y no ha podido contradecir los actos que le resultan desfavorables; y b) que el juzgado emplazado ha aplicado incorrectamente el Decreto Legislativo N.º 856, en el extremo que establece el carácter persecutorio de los créditos laborales.
4. Que en cuanto al primer punto cabe mencionar que el Tribunal Constitucional ha sostenido en anterior oportunidad que "(...) [el derecho de defensa] se conculca cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. Evidentemente no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión reprochada por el contenido constitucionalmente protegido del derecho. Esta es constitucionalmente relevante cuando la indefensión se genera en una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Y se produce sólo en aquellos supuestos en que el justiciable se ve impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos." (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC, FJ 3)
5. Que sobre el particular este Colegiado considera que la demanda debe desestimarse por no haberse evidenciado la afectación del derecho de defensa de la recurrente. En efecto, conforme se aprecia a fojas 33, 36 ss., el proceso sobre reposición iniciado por Celso San Martín Camacho tuvo como demandada a la Empresa Pesquera Gamur E.I.R.L. Dicho proceso concluyó mediante sentencia de fecha 20 de febrero de 1996, mediante la cual se declaró fundada la demanda. En dicha etapa procesal la ahora demandante no participó dado que no fue demandada y en ese sentido no resultaba exigible su incorporación al proceso. Posteriormente conforme se aprecia a fojas 150, mediante escrito de fecha 20 de mayo de 1999 (expedida 4 años antes de emitirse la resolución cuestionada en este proceso constitucional), la recurrente se apersonó al proceso de reposición seguido por Celso San Martín Camacho contra Empresa Pesquera Gamur E.I.R.L., que ya se encontraba en etapa de ejecución de sentencia, solicitando desestimar la pretensión del referido ex trabajador Celso San Martín, pedido que dio mérito a la Resolución N.º 41, de fecha 22 de setiembre de 1999 (f. 153), mediante la cual se resolvió aceptar tal apersonamiento. Asimismo, el Tribunal observa que a fojas 156 en adelante, obran determinados actos procesales que muestran que la recurrente ejerció su derecho a la defensa; por lo que es de aplicación lo dispuesto, *a contrario sensu*, en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional.



3

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

6. Que en cuanto al segundo punto este también debe ser desestimado pues el Tribunal Constitucional ha precisado que mediante el proceso de amparo contra resoluciones judiciales no se puede cuestionar materias de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria, como es, en este caso, la competencia para interpretar la ley en lo que se refiere a la aplicación del principio de persecutoriedad en materia de créditos laborales, por lo que es de aplicación el artículo 5.1) del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

**RESUELVE**

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda

Publíquese y notifíquese

SS.

GARCÍA TOMA  
GONZALES OJEDA  
ALVA ORLANDINI  
BARDELLI LARTIRIGOTEN  
VERGARA GOTELLI  
LANDA ARROYO

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra  
SECRETARIO RELATOR (e)





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 09539-2006-PA/TC  
LIMA  
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

**RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

Lima, 6 de marzo de 2007

**VISTO**

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Banco de Crédito del Perú contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 95 del segundo cuadernillo, su fecha 6 de julio de 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y,

**ATENDIENDO A**

1. Que con fecha 22 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra el Tercer Juzgado Laboral de Chimbote y la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa, solicitando que se deje sin efecto las resoluciones 27, de 31 de enero de 2005; 41, de 7 de junio del 2005; 35, de 7 de julio de 2005; y 38, de 25 de julio de 2005. Alega que las cuestionadas resoluciones mediante las cuales se declara fundada la acción persecutoria de don Wilmer Alejandro Febre Huamán sobre un inmueble de su propiedad y que exigen el pago de S/. 5,936.88 bajo apercibimiento de embargo del mencionado bien, afectan su derecho al debido proceso, en particular sus derechos a una resolución justa y a la defensa, además del derecho de propiedad.

Según refiere adquirió el inmueble en el año 2001 de la Pesquera María Teresa E.I.R.L., a quien se le otorgó posteriormente el mismo inmueble en arrendamiento financiero, arrendamiento que luego sería transferido a Tecnología de Alimentos S.A. Sin embargo, en el año 2004, en etapa de ejecución de una resolución judicial proveniente de un proceso por pago de beneficios sociales interpuesto por don Wilmer Alejandro Febre Huamán, ex trabajador de Pesquera María Teresa E.I.R.L., se afectó el bien que ya no era de propiedad de la empresa sino del Banco. De este modo alega se ha afectado un bien que es de su propiedad, sin que ésta haya participado en el proceso judicial y sin que pueda ejercer su derecho de defensa, violándose su derecho al debido proceso y, como consecuencia de ello, también su derecho de propiedad.

2. Que con fecha 12 de octubre de 2005 la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2

Santa declara improcedente la demanda tras considerar que “(...) el amparista en su escrito de demanda, sólo se limita en señalar que se ha violado su derecho al debido proceso y a una resolución objetiva y justa; pero no precisa en forma detallada como se han vulnerado dichos derechos”. Por su parte la recurrida confirma la apelada al estimar que el proceso de beneficios sociales ha sido un proceso plenamente regular y que lo que se pretendía era cuestionar el criterio jurisdiccional, no siendo ello posible en el proceso de amparo por no constituir una vía de revisión.

3. Que tal como se desprende de autos en el presente caso el Banco de Crédito sostiene que se viola su derecho de defensa por no haber sido notificado desde el inicio del proceso en el que finalmente se ha dispuesto, en etapa de ejecución, una afectación sobre un bien que según refiere ahora es de su propiedad. No obstante tal como el propio recurrente lo admite en su escrito de demanda, tal notificación resultaba del todo impertinente en la medida en que el Banco no era parte de la relación sustancial, pues se trataba de una demanda entre un trabajador y su empleador con relación a derechos y beneficios laborales. No obstante tal como consta en el expediente el Banco participó de la etapa de ejecución de dicha sentencia, presentando similares argumentos a los que contiene la demanda de amparo, entre tanto que también las instancias judiciales expusieron con claridad las razones que respaldaban las decisiones judiciales que ahora pretende rebatir en esta vía.

Así por ejemplo el Tribunal advierte que en la resolución N.º 27, de 31 de enero de 2005, emitida por el Tercer Juzgado Laboral de Chimbote, el Juez estableció que la venta efectuada por la empresa emplazada en el proceso de pago de CTS y otros, a favor del Banco de Crédito, fue realizada “con el único objeto de evadir créditos laborales ya que sucesivamente un contrato de arrendamiento con opción de compra por parte del referido Banco a la demandada, existiendo una ficción legal”.

4. Que en tal sentido, y a partir de los fundamentos reseñados en el fundamento precedente, el Juez *a quo* determinó que en el caso resultaban de aplicación los artículos 2 y 3, inciso b), así como el artículo 4 del Decreto Legislativo 856, que desarrolla los artículos 24 y 26.2 de la Constitución, en el sentido de dar preferencia al cumplimiento de los créditos laborales, así como su carácter irrenunciable, permitiendo acciones persecutorias de parte del trabajador, incluso cuando el empleador haya transferido la propiedad o los activos de la empresa a terceros, para evadir sus obligaciones frente a los trabajadores, como ocurre con el proceso de autos.
5. Que siendo ello así el recurrente no puede alegar la violación de sus derechos al debido proceso, toda vez que las instancias judiciales han actuado en el marco de la Constitución y la ley a efectos de dar pleno cumplimiento a una sentencia judicial que



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

declaraba derechos laborales que estaban siendo desatendidos por parte de la empresa emplazada en dicho proceso, lo que –no hay que olvidar–, constituye también un derecho constitucional. Ello sin perjuicio de las acciones legales que correspondan al Banco contra la referida empresa, como consecuencia de la ejecución de la referida decisión judicial que, eventualmente, haya lesionado derechos de contenido patrimonial.

Por consiguiente debe desestimarse la pretensión en aplicación del artículo 38 del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

**RESUELVE**

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

LANDA ARROYO  
GONZALES OJEDA  
ALVA ORLANDINI  
GARCÍA TOMA  
VERGARA GOTELLI  
MESÍA RAMÍREZ

*[Firmas manuscritas de los jueces]*

Lo que certifico

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra  
SECRETARÍA GENERAL (e)



**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

EXP. N° 09725-2006-PA/TC  
LIMA  
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

**RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

Lima, 28 de marzo de 2007

**VISTO**

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Banco de Crédito del Perú contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 77 del segundo cuadernillo, su fecha 24 de agosto de 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y,

**ATENDIENDO A**

1. Que con fecha 6 de julio de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra el Segundo Juzgado Laboral de Chimbote y la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa, solicitando que se deje sin efecto las resoluciones 30, de 20 de enero de 2005; y 34, de 18 de abril del 2005. Alega que las cuestionadas resoluciones, mediante las cuales se declara fundada la acción persecutoria de don José Mercedes Chanta Jiménez sobre un inmueble de su propiedad y que exigen el pago de S/. 2,397.20 bajo apercibimiento de embargo del mencionado bien, afectan su derecho al debido proceso, en particular sus derechos a una resolución justa y a la defensa, además, del derecho de propiedad.

Según refiere adquirió el inmueble en el año 2001 de la Pesquera María Teresa E.I.R.L., a quien se le otorgó posteriormente el mismo inmueble en arrendamiento financiero, arrendamiento que luego sería transferido a Tecnología de Alimentos S.A. Sin embargo, en el año 2004, en etapa de ejecución de una resolución judicial proveniente de un proceso por pago de beneficios sociales interpuesto por don José Mercedes Chanta Jiménez, ex trabajador de Pesquera María Teresa E.I.R.L., se afectó el bien, que ya no era de propiedad de la empresa, sino del Banco. De este modo, alega, se ha afectado un bien que es de su propiedad, sin que ésta haya participado en el proceso judicial y sin que pueda ejercer su derecho de defensa, violándose su derecho al debido proceso y, a consecuencia de ello, también su derecho de propiedad.

2. Que con fecha 9 de diciembre de 2005, la Sala Civil de la Corte Superior del Santa



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

declara improcedente la demanda, tras considerar que "(...) el amparista en su escrito de demanda, sólo se limita en señalar que se ha violado su derecho al debido proceso y a una resolución objetiva y justa; pero no precisa en forma detallada cómo se han vulnerado dichos derechos". Por su parte, la recurrida confirma la apelada al estimar que el proceso de beneficios sociales ha sido un proceso plenamente regular, y que lo que se pretende es cuestionar el criterio jurisdiccional, lo que no es posible en el proceso de amparo pues éste no es una vía de revisión.

3. Que tal como se desprende de autos el Banco de Crédito sostiene que se viola su derecho de defensa por no haber sido notificado desde el inicio del proceso en el que finalmente se ha dispuesto, en etapa de ejecución, una afectación sobre un bien que, según refiere, ahora es de su propiedad. No obstante, tal como el propio recurrente lo admite en su escrito de demanda, tal notificación resultaba del todo impertinente, en la medida en que el Banco no era parte de la relación sustancial, pues se trataba de una demanda entre un trabajador y su empleador con relación a derechos y beneficios laborales. No obstante, tal como consta en el expediente, el Banco participó de la etapa de ejecución de dicha sentencia, presentando similares argumentos a los que contiene la demanda de amparo, entre tanto que también las instancias judiciales establecieron con claridad las razones que respaldaban las decisiones judiciales que ahora pretende rebatir en esta vía.

Así por ejemplo el Tribunal advierte que en la resolución N°. 30, de 20 de enero de 2005, emitida por el Tercer Juzgado Laboral de Chimbote, el Juez estableció que la venta efectuada por la empresa emplazada en el proceso de pago de CTS y otros, a favor del Banco de Crédito, fue realizada con "la finalidad de evadir el cumplimiento de las obligaciones de la ejecutada frente a los derechos laborales del trabajador".

4. Que en tal sentido y a partir de los fundamentos reseñados en el fundamento precedente, el Juez *a quo* determinó que en el caso resultaban de aplicación los artículos 2 y 3, inciso b), así como el artículo 4 del Decreto Legislativo 856, que desarrolla los artículos 24 y 26.2 de la Constitución, en el sentido de dar preferencia al cumplimiento de los créditos laborales, así como el carácter irrenunciable de los mismos, permitiendo acciones persecutorias de parte del trabajador, incluso cuando el empleador haya transferido la propiedad o los activos de la empresa a terceros, para evadir sus obligaciones frente a los trabajadores, como ocurre en el proceso de autos.
5. Que siendo ello así el recurrente no puede alegar la violación de sus derechos al debido proceso, toda vez que las instancias judiciales han actuado en el marco de la Constitución y la ley a efectos de dar pleno cumplimiento a una sentencia judicial que declaraba derechos laborales que estaban siendo desatendidos por parte de la empresa



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

emplazada en dicho proceso, lo que –no hay que olvidar–, constituye también un derecho constitucional. Ello sin perjuicio de las acciones legales que correspondan al Banco contra la referida empresa, como consecuencia de la ejecución de la referida decisión judicial que, eventualmente, haya lesionado derechos de contenido patrimonial.

Por consiguiente, debe desestimarse la pretensión en aplicación del artículo 38 del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

**RESUELVE**

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

LANDA ARROYO  
GONZALES OJEDA  
ALVA ORLANDINI  
BARDELLI LARTIRIGOVEN  
GARCÍA TOMA  
VERGARA GOTELLI  
MESÍA RAMÍREZ

Lo que certifico:

Dr. Daniel Fiallo Rivadeneyra  
SECRETARIO GENERAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 6411-2007-PA/TC  
LIMA  
HURÓN EQUITIES INC.

**RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

Lima, 18 de noviembre de 2008

**VISTO**

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Hurón Equities INC, representada por Pavel Huamaní Contreras, contra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 55, su fecha 23 de octubre de 2007 que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos interpuesta; y,

**ATENDIENDO A**

1. Que con fecha 24 de enero de 2007 la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales integrantes de la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima: don Fernando Montes Minaya, don Eduardo Yrivarén Fallaquen y don Guillermo Emilio Nue Bobbio; así como contra el Juez del 19 Juzgado Laboral de Lima, don Sandro Alberto Núñez Paz, con la finalidad que se declare la nulidad de la Resolución de vista de fecha 27 de noviembre de 2006, así como de la Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, expedidas en el proceso sobre pago de beneficios sociales seguido por Gremanisa Yolanda Manrique Romero contra las empresas Inversiones Gran Hotel Bolívar S.A. e Inmobiliaria César Víctor S.A. Alega que se ha vulnerado sus derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y de defensa.

Según refiere la empresa recurrente en dicho proceso laboral y tras haberse declarado fundada la demanda interpuesta por el referido trabajador se ordenó a las empresas Gran Hotel Bolívar e Inmobiliaria César Víctor S.A. que cumplan con pagar solidariamente el monto al que ascienden los beneficios sociales del trabajador demandante. Sin embargo, según afirma, por medio de la carta notarial que le cursara esta última empresa el 17 de enero de 2007, tomó conocimiento que, en etapa de ejecución de sentencia, el juzgado, mediante Resolución de fecha 24 de mayo de 2006, estableció que la medida de embargo trabada en forma de administración sobre los bienes de las empresas aludidas debía extenderse también contra la empresa recurrente y contra doña María Eliza Silva Hidalgo, y que si bien el juzgado procedió a anular su propia decisión, a través de la resolución de vista de fecha 12 de junio de 2006, la Sala emplazada declaró nula esta resolución efectuando una errónea interpretación de las disposiciones del D. Leg. N.º 856, referido al privilegio y carácter persecutorio de los créditos laborales.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2. Que mediante Resolución de fecha 1 de febrero de 2007, la Sala Civil de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda invocando el inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, al considerar que la demandante tiene expedito su derecho para hacer valer los recursos que le franquea el Código Procesal Civil en defensa de los derechos que manifiesta se estarían afectando. Por su parte, la recurrida confirmó la apelada, tras considerar que los magistrados emplazados han motivado adecuadamente la decisión de extender los alcances de la medida cautelar a la recurrente, por lo que la demanda sólo tendría como finalidad la revisión de la propia decisión adoptada en etapa de ejecución.

3. Que tal como se desprende de autos el objeto de la presente demanda de amparo es que se declare la nulidad de la Resolución N.º 2, de fecha 24 de mayo de 2006, así como de la Resolución de vista S/N de fecha 27 de noviembre de 2006, expedidas en el proceso sobre pago de beneficios sociales seguido por Gremanisa Yolanda Manrique Romero contra las empresas Inversiones Gran Hotel Bolívar S.A. e Inmobiliaria César Víctor S.A. Mediante tales resoluciones, los órganos emplazados dispusieron extender a la empresa recurrente y a su arrendataria, doña María Eliza Silva Hidalgo, los alcances de la medida cautelar trabada en forma de administración (hasta por la suma de S/.20983.64) que recae sobre los bienes e ingresos de las empresas demandadas en el referido proceso. Conforme consta a fojas 58, el órgano de segunda instancia dispuso ello, por considerar que habiéndose comprobado que el demandado Inmobiliaria César Víctor S.A. transfirió en dación, en pago, el inmueble ubicado en Jr. De la Unión N.º 958-Lima, a favor de la recurrente, y que a su vez ésta lo transfirió en arrendamiento a doña María Eliza Silva Hidalgo, resultaba aplicable el principio de persecutoriedad de los bienes del negocio previsto en el artículo 3° del Decreto Legislativo N.º 856, conforme al cual, cuando existe incumplimiento de obligaciones respecto de los derechos laborales de los trabajadores, en el que se evidencia la existencia de dolo o fraude para evadir el cumplimiento de dichas obligaciones, debe estarse al principio de persecutoriedad y preferencia de los créditos laborales.

La empresa recurrente sostiene que la instancia emplazada habría efectuado una errónea interpretación y aplicación de las disposiciones del D. Leg. 856, respecto al privilegio y carácter persecutorio de los créditos laborales, pues a su criterio, tal privilegio solo se extiende a quien voluntariamente ha efectuado el pago de dichos créditos por subrogación, y tal carácter persecutorio es aplicable solo cuando ha sido parte del petitorio de la demanda y ha recibido pronunciamiento positivo en la sentencia de primera y segunda instancia.

4. Que no obstante tal argumento de la recurrente no resulta amparable en esta instancia. Ello porque conforme lo tenemos establecido en nuestra jurisprudencia, la interpretación de las normas infraconstitucionales donde no se comprometan derechos fundamentales, es competencia exclusiva de los jueces del Poder Judicial en el marco de los procesos





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ordinarios, no correspondiendo al Juez Constitucional el “corregir” o imponer una determinada forma de entender las leyes o Reglamentos (STC 8329-2005-HC/TC, FJ 4), máxime si como se aprecia en el presente caso, la interpretación judicial del referido artículo 3° del D. Leg 856 se ha hecho en concordancia con lo que prevé el artículo 24° de la propia Constitución con relación a la tutela y preferencia de los derechos y beneficios laborales.

5. Que en consecuencia no apreciándose que los hechos y el petitorio de la demanda incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca la recurrente, la demanda resulta improcedente en aplicación del inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega

**RESUELVE**

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

Publíquese y notifíquese

SS.

MESÍA RAMIREZ  
VERGARA GOTELLI  
LANDA ARROYO  
BEAUMON CALLIRGOS  
CALLE HAYEN  
ETO CRUZ  
ÁLVAREZ MIRANDA

Lo que certifico

Dr. ERNESTO FIGUEROA BERNARDINI  
SECRETARIO RELATOR



**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

EXP N.º 00122-2007-PA/TC  
LIMA  
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP)

**RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

Huacho, 18 de diciembre de 2007

**VISTO**

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Banco de Crédito del Perú contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 72 del segundo cuadernillo, su fecha 24 de agosto de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y,

**ATENDIENDO A**

1. Que con fecha 7 de julio de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra el Primer Juzgado Laboral de Chimbote y la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa solicitando que se deje sin efecto las resoluciones del 8 de abril de 2005 y del 7 de junio del mismo año, por la que se confirma la anterior, que requiere a la entidad ahora demandante el pago de una deuda laboral bajo apercibimiento de embargo; alega que las resoluciones precitadas han sido expedidas en un proceso irregular.

Según refiere, el 16 de octubre de 2002 adquirió la propiedad de la embarcación Nélida-B, anteriormente denominada Costa Mar III, a la pesquera Aquarius S.R.L. y mediante escritura pública de la misma fecha celebró con Pesquera Preko S.A.C. un contrato de arrendamiento financiero por un plazo de 72 meses, lo que tuvo como consecuencia que el Banco de Crédito del Perú (BCP) mantenga la propiedad de la embarcación mientras que Pesquera Preko S.A.C. detentaría la posesión; que sin embargo en el mes de febrero de 2005 tomó conocimiento que ante el Primer Juzgado Laboral de Chimbote se tramitaba un proceso judicial de pago de beneficios sociales seguido por don Martín Rosado Rodríguez contra Pesquera Aquarius S.R.L. en el que el BCP no era parte (Exp. N.º 106-2001), siendo notificado con la resolución de fecha 15 de febrero de 2005 por la que se le corre traslado del pedido del señor Rosado para que se aplique una supuesta acción de persecutoriedad sobre la embarcación Nélida – B, pedido que luego fue declarado procedente, requiriéndosele al BCP el pago de la deuda laboral como si fuera deudor solidario de Pesquera Aquarius S.R.L., resolución que al ser apelada fue confirmada por la Sala Superior. De este



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

modo, alega, se han lesionado sus derecho a un debido proceso, de defensa y de propiedad.

2. Que tal como se desprende de autos en el presente caso el Banco de Crédito sostiene que se viola su derecho de defensa por no haber sido notificado desde el inicio del proceso en el que finalmente se ha dispuesto, en etapa de ejecución, una afectación sobre un bien que, según refiere, ahora es de su propiedad. No obstante, tal como el propio recurrente lo admite en su escrito de demanda, la notificación resultaba del todo impertinente en la medida que el Banco no era parte de la relación sustancial, pues se trataba de una demanda entre un trabajador y su empleador con relación a derechos y beneficios laborales. De otro lado, tal como consta en el expediente, el Banco participó de la etapa de ejecución de dicha sentencia, en donde las instancias judiciales competentes expusieron con claridad las razones que respaldaban las decisiones judiciales que ahora pretende rebatir en esta vía.
3. Que en tal sentido y a partir de los fundamentos reseñados en el fundamento precedente, el Juez *a quo* determinó que en el caso resultaba de aplicación el artículo 3, inciso b), así como el artículo 4 del Decreto Legislativo 856, que desarrolla el artículo 24 de la Constitución, en el sentido de dar preferencia al cumplimiento de los créditos laborales; de otro lado, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 26.2. de la propia Constitución, en cuanto al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley, por lo que es posible la existencia de acciones persecutorias de parte del trabajador, incluso cuando el empleador haya transferido la propiedad o los activos de la empresa a terceros, para evadir sus obligaciones frente a los trabajadores, como ocurre con el proceso de autos.
4. Que siendo ello así, la entidad recurrente no puede alegar la violación de sus derechos al debido proceso, toda vez que las instancias judiciales han actuado en el marco de la Constitución y la ley a efectos de dar pleno cumplimiento a una sentencia judicial que declaraba derechos laborales que estaban siendo desatendidos por parte de la empresa emplazada en dicho proceso, lo que —no hay que olvidar— constituye también un derecho constitucional. Ello sin perjuicio de las acciones legales que correspondan al Banco contra la referida empresa, como consecuencia de la ejecución de la referida decisión judicial que, eventualmente, hubiere lesionado derechos de contenido patrimonial.

Por consiguiente, debe desestimarse la pretensión en aplicación de los artículos 38 y 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional.



**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

EXP N.º 00122-2007-PA/TC  
LIMA  
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP)

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, y con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se adjunta.

**RESUELVE**

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

Publiquese y notifiquese.

SS.

**LANDA ARROYO  
MESÍA RAMÍREZ  
VERGARA GOTELLI  
BEAUMONT CALLIRGÓS  
CALLE HAYEN  
ETO CRUZ  
ÁLVAREZ MIRANDA**

**Lo que certifico:**

**Dr. ERNESTO FIGUEROA BERNARDINI**  
SECRETARIO RELATOR



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 00122 - 2007-PA/TC  
LIMA  
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ

**FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JUAN FRANCISCO VERGARA  
GOTELLI**

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones

1. La demandante es una persona jurídica denominada Banco de Crédito del Perú (BCP) la que solicita se deje sin efecto las resoluciones dictadas por el Primer Juzgado Laboral de Chimbote y la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fechas 8 de abril de 2005 y 7 de junio del mismo año, respectivamente, emitidas en un proceso judicial de pago de beneficios sociales seguido por don Martín Rosado Rodríguez contra la Pesquera Aquarius S.R.L.

Señala la empresa demandante que adquirió la embarcación Nélide-B, anteriormente denominada Costa Mar III, de la Pesquera Aquarius S.R.L. realizando posteriormente, mediante escritura pública, un contrato de arrendamiento financiero con la Pesquera Preko S.A.C., la que detentaría en adelante la posesión de la embarcación. Sin embargo afirma que en el mes de febrero de 2005 tomó conocimiento que ante el Primer Juzgado Laboral de Chimbote se tramitaba un proceso judicial de pago de beneficios sociales seguido por don Martín Rosado Rodríguez contra la Pesquera Aquarius S.R.L. (Exp. N° 106-2001) en el que BCP no era parte. Con fecha 15 de febrero de 2005 se le notifica sobre el pedido del señor Rosado para que se aplique una supuesta acción de persecutoriedad sobre la embarcación Nelida-B, pedido que luego fue declarado procedente, requiriéndose al BCP el pago de la deuda laboral como si fuera deudor solidario de Pesquera Aquarius S.R.L., resolución que al ser apelada fue confirmada por la Sala Superior. Por ello sostiene la demandante que se le han lesionado sus derechos constitucionales al debido proceso, de defensa y de propiedad.

2. Cabe señalar que las instancias inferiores han rechazado liminarmente la demanda señalando que de autos no se precisa en forma detallada cómo presuntamente se han infringido sus derechos de la demandante, toda vez que de la revisión de los actuados se aprecia que el demandante ha hecho uso de su derecho a la pluralidad de instancia y de defensa.
3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien todavía no es demandado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y formal, corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a trámite y correr traslado de ella al demandado.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4. Además debemos manifestar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio constitucional, el **principio de limitación** aplicable a toda la actividad recursiva le impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse al tema de la alzada, en este caso nada más y nada menos que el auto de rechazo liminar.
5. Por lo expuesto y al ser una demanda de amparo interpuesta por persona jurídica debo señalar previamente que en la causa N° 0291-2007-PA/TC emití un voto en el que manifesté:

***“Titularidad de los derechos fundamentales***

*La Constitución Política del Perú de 1993 ha señalado en la parte de derechos fundamentales de la persona -su artículo 1°- que “La defensa de la **persona humana** y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.” agregando en su artículo 2° que “toda persona tiene derecho ....”, derechos atribuidos evidentemente a la persona humana a la que hace referencia el citado artículo 1°.*

*El Código Procesal Constitucional estatuye en el artículo V del Título Preliminar al referirse a la interpretación de los Derechos Constitucionales que “El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.”*

*De lo expuesto en el fundamento precedente se colige que los derechos constitucionales tienen que ser interpretados en concordancia con los tratados internacionales en los que el Perú es parte con la finalidad de evitar incompatibilidades entre éstos.*

*Entonces debemos remitirnos al contenido de los Tratados Internacionales para interpretar los derechos constitucionales protegidos por el Código Procesal Constitucional. La Declaración Universal de **Derechos Humanos**, como su misma denominación señala, declara derechos directamente referidos a la persona humana, precisando así en su artículo 1° que: “Todos los **seres humanos** nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”, realizando en el artículo 2° la enumeración de los derechos que se les reconoce.*

*También es importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos - “Pacto de San José de Costa Rica”- expresa en el artículo primero, inciso dos, que debe entenderse que persona es todo ser humano”,*



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

*haciendo referencia marcada al precisar que los derechos reconocidos en la señalada disposición internacional están referidos sólo a la persona humana. En conclusión extraemos que las disposiciones internacionales al proteger los derechos referidos a la persona humana están limitando al campo de las denominadas acciones de garantías constitucionales a los procesos contemplados por nuestro Código Procesal Constitucional.*

*Por ello es que, expresamente el artículo 37° del Código Procesal Constitucional señala que los derechos protegidos por el proceso de amparo son los que casi en su totalidad enumera el artículo 2° de la Constitución Política del Perú, referido a los derechos de la persona, exceptuando el derecho a la libertad individual singularmente protegido por el proceso de habeas corpus, y los destinados a los procesos de cumplimiento y habeas data para los que la ley les tiene reservados un tratamiento especial por cuanto traen conflictos de diversa naturaleza. Esto significa entonces que el proceso de amparo está destinado exclusiva y excluyentemente a la defensa de los derechos fundamentales directamente relacionados a la persona humana.*

*De lo expuesto queda claro que cuando la Constitución proclama o señala los derechos fundamentales, lo hace pensando en la persona humana, esto es en el ser humano físico y moralmente individualizado. Hacia él pues se encuentran canalizados los diversos atributos, facultades y libertades siendo solo él que puede invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede constitucional.*

#### **La Persona Jurídica.**

*El Código Civil en su Libro I desarrolla el tema de "personas" colocando en la Sección Primera a las Personas Naturales (personas humanas), y en la Sección Segunda a las Personas Jurídicas.*

*Esto quiere decir que nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal separación precisando los derechos y obligaciones de una y otras. En lo que respecta a las personas morales que denomina jurídicas, hace la ficción de señalar la decisión libre de varias personas naturales de formar un conglomerado con objetivos iguales pero con identidad propia distinta a la de cada una de las personas naturales que crearon dicha "persona" ideal. Dotada así de derechos y obligaciones la "persona jurídica" tiene atribuciones que no corresponden a los derechos de las personas naturales que la crearon con entera libertad. Cabe recalcar que los fines de la persona jurídica obviamente son distintos a los fines de la persona natural, puesto que la reunión de éstas se da por intereses comunes, que conforman interés propio y distinto diferente a los intereses personales de cada uno de sus integrantes, pudiendo tener fines de lucro.*



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

*Las personas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus actividades en función de los capitales que aportan sus integrantes con la expectativa de obtener utilidades que se destinarán al fin de cuentas a estas personas naturales. Por esto se afirma en el lenguaje mercantil que la persona jurídica más que una sociedad de personas es una sociedad de capitales. Entonces cuando estas personas jurídicas denominadas empresas consideran que se les ha vulnerado un derecho fundamental directamente vinculado a sus intereses patrimoniales, deben de buscar un mecanismo idóneo para la solución del conflicto, teniendo en cuenta prima facie que los jueces ordinarios son los encargados de velar por la defensa y protección de estos derechos, también protegidos por el amplio manto de la Constitución Política del Estado. Sin embargo estas empresas cada vez que ven afectados sus intereses económicos, tienen a su alcance el proceso ordinario correspondiente igualmente satisfactorio al proceso constitucional que, como queda dicho, es exclusivo y excluyente de la persona humana.*

*En el caso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil establece la vía específica para solicitar la restitución de los derechos particulares de sus integrantes como el caso de las asociaciones para el que la ley destina un proceso determinado en sede ordinaria.*

*Por lo precedentemente expuesto afirmamos que las personas jurídicas tienen pues derechos considerados fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta cada vez que vean afectados sus intereses patrimoniales, pretendan traer sus conflictos a la sede constitucional sin importarles la ruptura del orden que preserva el proceso, el que señala la tutela urgente en sede constitucional exclusivamente para la solución de conflictos en temas de exclusivo interés de la persona humana.*

*De lo expuesto concluyo estableciendo que si bien este Colegiado ha estado admitiendo demandas de amparo presentadas por personas jurídicas, esto debe ser corregido ya que ello ha traído como consecuencia que las empresas hayan "amparizado" toda pretensión para la defensa de sus intereses patrimoniales, utilizando los procesos de la sede constitucional destinados exclusivamente a la solución de los conflictos sobre derechos de la persona humana. Por ello por medio del presente voto quiero limitar mi labor a solo lo que me es propio, dejando en facultad de este colegiado, por excepción solo los casos en los que la persona jurídica no tenga a donde recurrir, encontrándose en una situación de indefensión total, evidenciándose la vulneración de derechos constitucionales que pongan en peligro su existencia."*

6. De lo expuesto se colige que los procesos constitucionales están destinados a la protección de los derechos fundamentales de la persona y que solo por excepción se podría ingresar al fondo de la controversia.





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

7. En el presente caso tenemos a una persona jurídica que acusa a un órgano administrativo de la emisión de resoluciones administrativas en el proceso N° 475-98 siendo incompetente, por lo que solicita la inaplicación de la resolución N° 1577, de fecha 1 de diciembre –que varió el proceso administrativo respecto a la jurisdicción predeterminada- también oportunidad para señalar que siendo diferente la finalidad del proceso de amparo y de habeas corpus –que son procesos que defienden derechos de la persona humana- de los procesos de cumplimiento y de habeas data –que son procesos en donde se busca cumplir con una norma legal o ejecutar un acto administrativo firme, respectivamente se busca la defensa de los derechos constitucionales reconocidos por los incisos 5) y 6) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú- las personas jurídicas si están facultadas para interponer tales demandas puesto que al solicitarse el cumplimiento de una norma puede ser de interés tanto de una persona natural como de una persona jurídica, lo mismo que en el caso del proceso de habeas data en donde cualquier de las dos puede solicitar determinada información cuando a ellas le concierne.
8. Se observa de autos que la empresa recurrente denominada Banco de Crédito del Perú (BCP) solicita la inaplicación de resoluciones dictadas en un proceso laboral sobre pago de beneficios sociales puesto que considera que dichas resoluciones afectan su derecho al debido proceso.
9. Es evidente que la empresa demandante pretende romper con los límites que imponen las resoluciones cuestionadas resueltas en la vía ordinaria, utilizando para tales fines el proceso constitucional de amparo, puesto que obviamente ve afectados sus derechos patrimoniales, pretendiendo que se anule resoluciones en un proceso laboral de una persona natural –trabajador- que exige sus derechos adquiridos como trabajador, por lo que no puede pretender la desprotección de una persona natural para proteger intereses patrimoniales de una persona jurídica, ya que esto significaría la desnaturalización completa del proceso constitucional en un Estado que tiene como prioridad la defensa de la dignidad de la persona humana. Este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que el Estado es el llamado a poner orden en la sociedad, no pudiéndose aceptar demandas de empresas mercantiles cuando ven afectados sus intereses económicos sin importarles tener que soslayar las disposiciones legales que el Estado ha emitido para poner el orden que la colectividad exige.
10. Cabe recordar que este colegiado ha señalado que los procesos constitucionales tienen el carácter de urgente y excepcional, por lo que no puede admitirse la interposición de demandas que no estén por su contenido vinculadas a dicho proceso urgente, previsto para la defensa de los derechos de la persona humana. En el presente caso la recurrente es, como decimos, una persona de derecho privado con lícito objetivo de lucro que exige se dejen sin efecto resoluciones dictadas dentro de un proceso regular para la protección de derechos que sienta violados pero que necesariamente están relacionados a intereses patrimoniales, acusando en órganos judiciales del Estado aplicación equivocada dentro de un proceso irregular.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

11. A manera de conclusión considero importante servirme de la oportunidad para realizar precisiones que pongan orden en la práctica judicial de todos los días, en la que se permite a las empresas relacionadas necesariamente a intereses de lucro, exigirle al Tribunal el ingreso a determinaciones desbordantes que en la visión de muchas personas reflejan el acomodo de intereses ajenos por la vía del amparo. Por ello sostengo que en todo caso de admisión de demandas constitucionales para la solución de conflictos que no ingresan a dicho rubro, es menester considerar la necesidad de exigir temática en relación a la persona natural pues los amplios cauces de la justicia ordinaria están diseñados para debatir, probar y obtener decisiones terminales en el Poder Judicial, quedando así, como decimos, la sede del proceso urgente limitada a afectaciones de los derechos de la persona humana. Aparte de esto se debe tener también en consideración que la inhumana carga procesal que agobia al servicio de justicia se ve agravada con la prolongación indebida de procesos que no tienen estricta relación con intereses de los hombres sino de empresas económicas creadas en ficción con la categoría de persona cuando en realidad constituyen sociedades de capitales para la satisfacción de objetivos exclusivamente patrimoniales, lícitos ciertamente, pero exclusivamente de lucro, postergando así causas pendientes que sí tienen que ver con directos intereses en relación a la persona humana, verbigracia procesos con pretensiones de trabajadores que esperan con antigüedad de varios años la solución a sus conflictos su temática personalísima que el Estado le promete oportuna y justiciera.
12. Por lo expuesto y en atención a lo señalado en los fundamentos precedentes queda claro que mi posición es que el proceso constitucional busca la plena protección de los derechos de la persona humana, reservándose el Tribunal la facultad de considerar en su sede, por excepción, temas de emergencia y la solución de conflictos cuando que ostensiblemente presenten el riesgo de afectaciones insuperables, considerando por ello que debe confirmarse el auto de rechazo liminar en atención a la falta de legitimidad para obrar activa de la recurrente.

Por estos fundamentos mi voto es porque se **CONFIRME** el auto de rechazo liminar.

SR.  
JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI

Lo que certifico:  
  
Dr. ERNESTO FIGUEROA BERMÚDEZ  
SECRETARIO RELATOR

**EXP. N° 2424-2004-AA/TC**

**ICA**

**MARÍA JESÚS**

**LEANDRO GÓMEZ**

## **SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

En Ica, a los 18 días del mes de febrero de 2005, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, González Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente resolución.

### **ASUNTO**

Recurso extraordinario interpuesto por María Jesús Leandro Gómez contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, fs. 42, de fecha 19 de marzo del 2004, que la declara improcedente la demanda de amparo de autos.

### **ANTECEDENTES**

Con fecha 12 de febrero del 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra doña Tatiana Beatriz Pérez García Blasquez, Jueza del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga; COFIDE S.A., Andimar S.A. y Alminda Albina Mora Zamora, con el objeto de que se dejen sin efecto las resoluciones N.º 168, de fecha 17 de junio del 2002; N° 187, de fecha 3 de octubre de 2002, y N° 199, de fecha 16 de enero del 2003, emitidas en el proceso de ejecución de garantías N° 97-043, seguido por COFIDE S.A. contra Andimar S.A., mediante las cuales se convoca a tercer remate público de los bienes hipotecados, se transfiere el inmueble ubicado en el Jirón Chávez Gavilán, segunda cuadra, de la provincia de Huanta, a favor de Alminda Albina Mora Zamora y se ordena el lanzamiento de la recurrente del referido inmueble respectivamente. Afirma que ante el Juzgado en lo Civil de Huamanga interpuso demanda contra Frigorífico Pesquero (Andimar S.A.) sobre pago de remuneraciones y beneficios sociales y que, en ejecución de sentencia, se le ha adjudicado dicho inmueble por resolución N° 33 de fecha 12 de enero del 2001, en el proceso laboral con Exp. N° 98-283, habiéndose ordenado dejar sin efecto todo gravamen, y que a pesar de haber acreditado este hecho ante la Jueza emplazada ésta ha sacado a remate y adjudicado dicho inmueble a otra persona. Afirma que con las resoluciones cuestionadas se vulnera su derecho a la propiedad y al debido proceso.

La Jueza emplazada contesta la demanda afirmando que las resoluciones cuestionadas provienen de un proceso regular, toda vez que, no habiendo cumplido los ejecutados con pagar la deuda, se dispuso el remate del bien hipotecado y tratándose el proceso de ejecución de garantías de uno

eminentemente formal, que se sustenta en la fe pública registral, y estando a que el derecho que invoca María Jesús Leandro Gómez no se encuentra inscrito, no puede oponerse al ejecutante en el proceso de ejecución de garantía hipotecaria.

La Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, con fecha 10 de junio de 2003, declaró improcedente la demanda al considerar que la Resolución que convoca a tercer remate fue debidamente notificada a la actora en su calidad de tercero legitimado, que la nulidad planteada por ella fue declarada infundada y luego de ser notificada no fue impugnada, habiéndose declarado consentida dicha resolución; que la resolución N° 187, mediante la cual se adjudica el inmueble a Alminda Albina Mora Zamora, le fue notificada oportunamente, habiendo ésta formulado apelación fuera del plazo y sido rechazado por inadmisibile y que, por resolución N° 192, fue declarada consentida, por lo que no puede dejarse sin efecto resoluciones emitidas en un proceso regular y que han sido consentidas por la denunciante.

La recurrida confirma la apelada reproduciendo los fundamentos y agregando que el proceso de ejecución de garantías se ciñe a lo dispuesto por el artículo 1097° del Código Civil, que prescribe que el acreedor tiene los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado.

### **FUNDAMENTOS**

1. 1. El tema que se trae a consideración es uno en el que se acusa la violación del debido proceso y del derecho a la propiedad, en razón de que el inmueble adjudicado a favor de la recurrente, por resolución N° 33, de fecha 12 de enero de 2001, en el proceso laboral seguido por la actora contra Andimar S.A. ante el Segundo Juzgado Civil de Huamanga, expediente N° 98-283, ha sido adjudicado posteriormente a favor de Alminda Albina Mora Zamora en otro proceso seguido por COFIDE contra Andimar S.A. sobre ejecución de garantías (hipoteca), Exp. N° 97-043, seguido ante el Primer Juzgado Civil de Huamanga, por resolución N° 187, de fecha 3 de octubre de 2002, a pesar de que, según sostiene la recurrente, la adjudicación obtenida a su favor se realizó en aplicación del artículo 7° de la Ley 26116, que establece el orden de preferencia de los créditos y que al provenir su acreencia de obligaciones laborales se encontraba en el primer orden de prelación.
2. 2. El debido proceso está concebido como aquel en el que se respetan sus dos expresiones, tanto formal como sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer.
3. 3. La recurrente afirma que la violación de su derecho se ha producido dentro del proceso de ejecución de garantía hipotecaria, Exp. N° 97-043, llevado a

cabo ante el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga; sin embargo, es de advertirse que se le ha permitido intervenir como tercera legitimada, brindándosele tutela judicial; ha ejercido su derecho a la defensa ampliamente, impugnando las resoluciones que consideró le causaban, agravio, como es de verse de fs. 34-36, 41-42, 44-46, 47-48, 52-53 y 151, y se ha respetado su derecho a la doble instancia, emitiéndose las resoluciones respectivas debidamente motivadas, como es de advertirse de fs. 37, 49-51, 54, 120, 123, 133, 141-143, 146 y 152-153.

4. 4. Se aprecia, además, que como consecuencia de la resolución N° 168, de fecha 17 de junio de 2002, que convocó a tercer remate público los inmuebles afectados con garantía hipotecaria a favor del ejecutante, se llevó a cabo dicho acto procesal levantándose el acta respectiva, fs. 114, contra la que la recurrente dedujo nulidad y, habiéndose dado trámite al referido medio impugnatorio, fue declarada infundada por resolución N° 185 de fecha 18 de setiembre del año 2002, fs. 123-125, resolución que dejó consentir conforme se aprecia a fs. 127. Asimismo, la Resolución N° 187, que transfiere la propiedad del inmueble a favor de Almina Albina Mora Zamora, también fue declarada consentida por resolución N° 192, conforme obra a fs. 134, toda vez que la apelación que se interpuso contra ella fue declarada inadmisibile por extemporánea.
5. 5. Según sostiene la recurrente, la adjudicación obtenida a su favor se realizó en aplicación del artículo 7° de la Ley 26116 “Ley de Reestructuración Patrimonial”, la que durante su vigencia (30-12-1992 a 21-09-1996) estableció las normas aplicables a la reestructuración económica y financiera, liquidación extrajudicial y quiebra de empresas. Esta norma dispuso en su artículo 2° que la declaratoria de insolvencia del deudor comienza con la solicitud del acreedor ante la Comisión de Simplificación y Salida del Mercado del INDECOPI y que, luego de culminado dicho procedimiento y acreditada la incapacidad de pago del deudor, se emite una resolución declarándolo insolvente, y en caso de que la Junta de Acreedores decida la disolución y la liquidación extrajudicial de la empresa, el convenio de liquidación extrajudicial deberá inscribirse en el Registro Público donde se encuentran inscritos los bienes del deudor; así lo dispuso el artículo 15 de la ley 26116 y lo dispone el artículo 18 del Decreto Legislativo N° 845, Ley de Reestructuración Patrimonial Vigente.
6. 6. La recurrente afirma estar amparada por el artículo 7° de la Ley 26116, hoy artículo 24° del D. Leg. 845, que estableció el orden de preferencia en el pago de créditos del insolvente; sin embargo, conforme se aprecia de fojas 98 a 103, Copia Literal del Predio N° P11029912 otorgado por el Registro Predial Urbano de Ayacucho, no existe inscripción registral alguna del convenio de liquidación extrajudicial realizado por la Junta de Acreedores conforme a la legislación anterior (artículo 15 de la ley 26116, *in fine*), ni tampoco la resolución que declara al deudor como insolvente de acuerdo a la legislación vigente (artículo 18° del D. Leg. 845) en la partida registral correspondiente al inmueble ubicado en Jirón Chávez Gavilán, segunda cuadra, de la provincia de Huanta, no

obrando en autos prueba alguna que acredite que la recurrente cumplió con el procedimiento señalado para la declaratoria de insolvencia del deudor a efectos encontrarse dentro del ámbito de protección del anterior artículo 7° de la Ley 26116, recogido hoy por el artículo 18° del D. Leg. 845.

7. 7. Siendo así la preferencia que invoca la recurrente, no pudo oponerse a los terceros, en este caso COFIDE, que teniendo un derecho real de garantía inscrito a su favor como la hipoteca, conforme se verifica en el Asiento N° 5 de la ficha N° P11029912, fojas 101, llevó a cabo el correspondiente proceso de ejecución de garantías a efectos de satisfacer su crédito toda vez que el Artículo 1097° del Código Civil prevé que dicha garantía otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado.
8. 8. No habiéndose acreditado la vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, debe estarse a lo previsto por el artículo 2° del Código Procesal Constitucional *contrario sensu*, por lo que la demanda debe desestimarse por infundada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

#### HA RESUELTO

Declarar **INFUNDADA** las demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI  
BARDELLI LARTIRIGOYEN  
GONZALES OJEDA  
GARCIA TOMA  
VERGARA GOTELLI  
LANDA ARROYO

## **ANEXO II**

### **PROPUESTAS**

Seguir manteniendo la norma a nivel Constitucional, establecer mejoras a nivel Legal que se cuente con un fondo de garantía que cuente con los aportes del empleador para cubrir los adeudos laborales en caso de disolución o quiebra de una empresa.

### **BIBLIOGRAFIA**

1. ALVITES ALVITES, Elena (2005). Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante. Dialogo con la Jurisprudencia Nº 84. La Protección Jurisdiccional de los Derechos Sociales Fundamentales – Estrategias Nuevas para un viejo problema.
2. ALEXY ROBERT (2002) Teoría de los derechos fundamentales, La Estructura de las normas de derecho fundamental. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales, Tercera Reimpresión, Pp.81-115.
3. ARIANO DEHO, Eugenia (2004), Diálogo Cuaderno Jurisprudencial Nº 39 Setiembre.Pp.161
4. ARIAS – SCHREIBER PEZET, Max (1998), Exégesis del Código Civil de 1984. Tomo IV. Derechos Reales de Garantía, Gaceta Jurídica Editores SRL.
5. AVALOS JARA, Oxal Víctor y LLONTOP CASSINA, José Luis (2006), Transferencias efectuadas a un tercero de buena fe por el deudor incluso en un proceso laboral ¿puede dejarse sin efecto? Dialogo con la Jurisprudencia Nº. 96. Pp. 263.
6. BELTRAN PACHECO, Jorge Alberto. (2006) Derecho a participar en u proceso de ejecución de garantía hipotecaria “yo también Juego”...Dialogo con la Jurisprudencia Nº96, Pp. 109.
7. BERNALES BALLESTEROS, Enrique (1996), La Constitución de 1993 Análisis Comparado. ICS Editores, Primera Edición.



8. BRONSTEIN, Arturo, Derecho Individual del Trabajo. Materiales de Enseñanza, Víctor Ferro Delgado-Fernando García Granara, Pontificia Universidad Católica del Perú.
9. CORTES CARCELEN, Juan Carlos (2002), Revista Análisis Laboral de Julio.
10. Diario Oficial el Peruano Jorge Panizo Fernández (2006), Presidente de la Sociedad Peruana de Pymes, del 1 de diciembre.
11. DOLORIER TORRES, Javier Ricardo. La Responsabilidad solidaria en el pago de créditos laborales. Análisis y Crítica Jurisprudencial .Dialogo con la Jurisprudencia N° 80, Pp. 29-34.
12. GÓMEZ VALDEZ, Francizco. “La empresa y el empleador “ , Editorial San Marcos, Agosto 2004, pagina 559-560
13. HUERTA RODRÍGUEZ, Hugo (2003), El Carácter Persecutorio de los Créditos Laborales. Edición Agosto, Editorial Rodhas.
14. LASARTE, Carlos, LOPÉZ PELÁEZ, Patricia y YAÑES VIVERO, Fátima. La reforma de la prelación de créditos, Cuadernos de Derecho Registral. Fundación Registral Madrid 2007, Pp.27.
15. La transmisión de créditos laborales (2003), ¿Mantiene el créditos laboral su carácter privilegiado cuando cambia de titular?, Gaceta Jurídica Julio. Pp. 77.
16. LOPEZ BASANTA, Justo , “El salario, en De buen Néstor Morgado, Emilio. Instituto de trabajo y de la seguridad social, AIADTSS-UNAM, México DF., 1977, p.447; Revista Jus Mayo 5-2008, Perú, Editora Grijley, Pp. 433-437.

17. MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia (1984), Los Derechos Reales. Librería Studium, Tercera Edición, Editorial Rocarme S.A.
18. MARCENADO FREÍS, Ricardo (2004), El trabajo en las Constituciones Latinoamericanas y Europeas. Editorial Diálogo S.A, Lima - Perú: abril.
19. MESINAS MONTERO, Federico. Soluciones Laborales Año 2-Numero 24 diciembre 2009, Pp. 51-56.
20. MERINO ACUÑA, Roger. (2006) “La demanda de Tercería de Propiedad y la Contraposición entre propiedad no inscrita y embargo inscrito”. en Dialogo con la Jurisprudencia N° 98 - Noviembre. Pp. 177
21. MESINA MONTERO, Federico (2004). ¿Qué no hay límites para la preferencia del cobro de los créditos laborales? Dialogo con la jurisprudencia N° 75. Diciembre. Pp. 31
22. MENDOZA ESCALANTE, Mijael (2009) Curso de Argumentación jurídica: Materiales de lectura. Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Septiembre.
23. MONTOYA MENDOZA, Andrés A (2005.b), La Corte Suprema y la Seguridad Jurídica ¿se ha constitucionalizado el carácter persecutorio de los créditos laborales? En Dialogo con la Jurisprudencia N° 80. Mayo.
24. MONTOYA MENDOZA, Andrés (2004.a), La Influencia de los Privilegios laborales en la Eficacia de las Garantías Reales. ¿Un problema social de los trabajadores o uno de seguridad para las inversiones? Dialogo con la Jurisprudencia N° 75 Diciembre. Pp. 21.

- 25.MORALES CORRALES, Pedro (2001), "Protección de los créditos laborales en el Perú". Revista Jurídica del Perú N° 29. Edit. Norma Legales S.A. Trujillo – Perú. Diciembre.
- 26.NEVES MUJICA, Javier (2000), Introducción al Derecho del Trabajo. Colección Textos Universitarios, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.
- 27.OIT Conferencia Internacional de Trabajo -78 reunión. 1991, Informe V Protección de los créditos Labores en caso de insolvencia del empleador, Ginebra.
- 28.RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge (año), Derecho del Trabajo Introducción. Editorial Tárpuy S.A.
- 29.Revista Addenda Jurídica (2006), El Peruano 28 de marzo.
- 30.Revista Análisis Laboral (1996), Octubre
- 31.RUBIO CORREA, Marcial (2005), La Interpretación de la Constitución Según el Tribunal Constitucional. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Pp. 71
- 32.PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. () Derechos Humanos, Estado de derecho y Constitución: La interpretación de la Constitución, Tercera Edición, Tecnos, Pp. 249-283
- 33.PLA RODRIGUEZ, Américo. Los principios del derecho del trabajo. Buenos Aires: Depalma.1978. Pp 9.

34. TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge (2005). a, Derecho Persecutorio laboral sobre el ex patrimonio del empleador. En Dialogo con la Jurisprudencia N° 81 de Junio.
35. TOMAYA MIYAGUSUKU, Jorge (2010) b. Doctrina y Análisis sobre la nueva Ley de Trabajo, Academia de la Magistratura de Perú. Primera Edición. pp. 199 al 212
36. VALDIVIESO L. Erika J. Contenido del Principio de Persecutoriedad de los créditos laborales en el caso de las empresas vinculadas., Dialogo con la Jurisprudencia N° 144. Pp. 259 al 270.
37. VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Teoría General del Acto Jurídico. Cultural Cuzco S.A. Editores.
38. ZAVALETA RODRÍGUEZ, Róger (2005), Abogado Asociado al Estudio Muñiz, Forsyth, Ramírez y Luna Victoria. “Un caso sobre preferencia de créditos laborales“. Dialogo con la Jurisprudencia N° 76 Enero.

